

Fej



Universidad Nacional
Autónoma de México

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

*La Autonomía Relativa del Poder
Militar en Argentina
(1943-1966)*

T E S I S

Que para obtener el Título de
Licenciada en Ciencia Política
presenta
Pilar Calveiro



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

<u>Presentación</u>		1
<u>Capítulo I</u>	<u>Introducción</u>	3
	Estado y sociedad	3
	Estado-Nación o Estado y nación	7
	Democracia y Estado	9
	Corporativismo y Estado	12
	El Estado autoritario	14
<u>Capítulo II</u>	<u>Poder militar y populismo (1943-1955)</u>	20
	Marco histórico	22
	Marco económico	47
	Los partidos políticos	53
	Los sindicatos	58
	Las Fuerzas Armadas	62
<u>Capítulo III</u>	<u>Los hijos de la Revolución Libertadora (1955-1962)</u>	75
	Marco histórico	75
	Marco económico	90
	Los partidos políticos	100
	Los sindicatos	107
	Las Fuerzas Armadas	109
<u>Capítulo IV</u>	<u>El poder militar se consolida (1962-1966)</u>	115
	Marco histórico	115
	Marco económico	127
	Los partidos políticos	132
	Los sindicatos	140
	Las Fuerzas Armadas	143
<u>Conclusiones</u>		156
<u>Bibliografía</u>		167

PRESENTACION

En este trabajo estudiaremos el papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas en el periodo 1943-1966 en Argentina, partiendo de la hipótesis de que en esta etapa se plasmó el crecimiento y consolidación de su poder para llegar a convertirse en el grupo hegemónico, dentro de una sociedad cuyas estructuras de representación resultaban inoperantes.

Para ello, haremos "cortes" históricos, tomando como momento de ruptura cada uno de los golpes militares que se produjeron. Este procedimiento nos permite diferenciar tres fases: el periodo populista (1943-1955), la reacción antipopulista encarnada en la Revolución Libertadora (1955-1962); y la preparación de las Fuerzas Armadas para asumir el papel del Estado, como fuerza hegemónica, a través del proyecto de la Revolución Argentina (1962-1966).

Para cada una de estas fases haremos una reseña de los hechos, daremos un panorama de la situación económica y trataremos de analizar cómo funcionaron las fuerzas políticas, los sindicatos (por desempeñar también un papel eminentemente político) y por último las Fuerzas Armadas (como parte determinante de ese conjunto).

En definitiva, se trata de entender qué relación existió entre el Estado y la sociedad civil, y el papel que jugaron en esa relación las Fuerzas Armadas. Pero para abordar esta cuestión es necesario delimitar en primer lugar a qué nos referimos al hablar de Estado, no con una intención teórica que resultaría pretenciosa dada la envergadura, complejidad y extensión del tema, sino para precisar qué herramientas consideramos útiles en el estudio de esta realidad en particular.

CAPITULO I

INTRODUCCION

CAPITULO I

INTRODUCCION

Estado y sociedad

El pensamiento de Gramsci, y más precisamente su forma de concebir la relación entre el Estado y la sociedad, nos permiten una primera aproximación al problema. Para Antonio Gramsci el Estado se define en un sentido ampliado, como la suma de la sociedad política y la sociedad civil. El Estado se extiende y ramifica en ésta puesto que no sólo es productor de la vida social sino que, a su vez, es un producto de ella. Esta doble condición hace que en el pensamiento de Gramsci Estado y sociedad se interpenetren, se modifiquen mutuamente. Así como la clase dominante es parte de la sociedad civil, la clase dominada se introduce en el aparato estatal gracias a las innumerables rupturas que modifican las relaciones de fuerza.

De acuerdo con la visión gramsciana no hay "terrenos vedados" para una u otra clase, sino que el cuerpo social es un todo continuo en el que se miden las fuerzas en pugna. El Estado se constituye en una expresión de las relaciones de fuerza sociales y no representa una manifestación caprichosa del poder. [Siguiendo este punto de vista, la presencia de un gobierno populista expresa una relación de fuerzas dentro de la sociedad muy diferente de la que se pone de manifiesto en un gobierno militar. De igual manera, la persistencia de las Fuerzas Armadas en el aparato estatal nos remite a un cierto tipo de sociedad civil (a la vez producto y productora) sobre la que tal poder se asienta.]

Para Gramsci, los sujetos políticos son las voluntades colectivas, que se forman por la alianza de distintas clases en torno a un grupo, el hegemónico. [La formación de estos bloques, constituidos por diferentes clases y sectores de

clase, nos permite explicar, en nuestro caso, el fenómeno peronista. Además, facilita la comprensión del juego político en una sociedad que, aunque claramente capitalista, por su condición de periférica sería incomprendible si sus contradicciones se redujeran a la que existe entre burguesía y proletariado.]

Es preciso diferenciar los diversos sectores de la burguesía, que según el momento histórico se asimilaron ya sea al bloque dominante o al popular. También resulta más útil la categoría de bloque popular que referirnos estrictamente al proletariado. [Una de las razones por las que la idea de bloque se adapta me jor a la realidad argentina, es la presencia de una importantísima clase media, cuya alineación política oscila, convirtiéndola en "clase de apoyo" de uno u otro bloque, según circunstancias verdaderamente coyunturales.]

Pero la construcción de voluntades colectivas y la formación de bloques sólo es posible con la existencia de un grupo hegemónico. Este sector articula a las demás clases en torno a sus objetivos económicos, políticos, intelectuales y morales. [En Argentina, tal papel le cupo hasta 1943 a la gran burguesía agro exportadora. Sin embargo, la pérdida gradual de su función hegemónica (aunque no de su condición de clase dominante ya que mantuvo el control del aparato pro ductivo) dio lugar a la serie de conflictos y desequilibrios que se sucedieron en este periodo. Con la irrupción de la experiencia peronista, las clases do minantes perdieron la posibilidad de acceder al gobierno mediante los me canismos de la democracia representativa, que les habían sido útiles hasta 1930 y que, por medio del fraude, mantuvieron bajo su control hasta 1943. El ascenso peronista cerró a la gran burguesía agroexportadora toda posibilidad de ma ntener el gobierno por vía electoral, produciéndose una escisión entre el nivel e conómico y el nivel de representación política. A pesar de conservar el papel de clase dominante, la gran burguesía pampeana parece haber perdido paulatina me nte su función de clase hegemónica, sobre todo si consideramos que la lucha por la hegemonía cobra coherencia en torno a lo ideológico.]

La ideología es el elemento que da consistencia a los diferentes grupos de una alianza, para articularlos alrededor de la clase dominante. Así aumenta la base de consenso de la alianza hasta lograr la hegemonía social. Esta permite, a través de la ideología, articular al bloque en el poder, al Estado y también a la sociedad como conjunto, brindándole la forma de verse a sí misma. [En la Argentina, a partir del peronismo tal posibilidad quedó clausurada para la oligarquía. El discurso conservador perdió validez social de manera drástica y acelerada. Sin una ideología capaz de permear el conjunto del cuerpo social y sin posibilidad de acceder a las estructuras de representación política formal, la hegemonía oligárquica quedaba herida de muerte.]

La hegemonía es estatal y social, y consiste en una delicada combinación de fuerza y consenso. Coerción y persuasión se equilibran en una especie de báscula en la que, a mayor consenso menor necesidad de coerción.

Puede parecer contradictorio hablar a un mismo tiempo de golpe militar y de consenso, sin embargo no necesariamente es así. Gramsci se refiere a dos formas de consenso: uno activo y directo y otro otorgado por la pasividad de las clases que lo prestan. [Creemos que en el caso de los golpes militares argentinos se expresan las dos modalidades, pero sobre todo se manifiesta el consenso pasivo como resultado del desgaste de los canales de participación política tradicionales. La crisis del sistema de representación por vía de los partidos políticos estuvo fuertemente asociada con el papel protagónico que le cupieron tanto a las Fuerzas Armadas como a los sindicatos. A su vez, el aparato estatal tuvo una fuerte relación con estas corporaciones y permaneció en manos de una de ellas, el ejército, durante periodos prolongados, en los que instrumentó proyectos políticos y económicos correspondientes a distintas facciones de la burguesía.] La condensación en el aparato estatal de la relación de fuerzas que existe entre las diferentes clases y sectores de clase, le permite mantener una

autonomía relativa de cada grupo en particular. [Es por ello que el Estado, y más específicamente las Fuerzas Armadas de Argentina han podido representar en un periodo relativamente corto (23 años) a sectores de la burguesía con proyectos diferentes e incluso contrapuestos.]

Esta autonomía del aparato estatal con respecto a una u otra fracción de la burguesía no se puede confundir con una supuesta "neutralidad". El Estado no es en ningún momento independiente de la reproducción económica del sistema, sino que interviene en ella y, por lo tanto, se compromete con la supervivencia de la estructura de dominación sostenida por las clases dominantes. Sin embargo, tampoco se puede concebir al Estado como un simple desprendimiento o reflejo de las contradicciones presentes en el nivel económico, reduciendo su problemática a la de la reproducción económica. Si esto fuera así, la resolución de las cuestiones políticas pasaría por la resolución de las económicas y dependería de ellas. En tal caso sería inexplicable que junto al mantenimiento del poder económico de la gran burguesía agroexportadora se haya verificado en Argentina la pérdida creciente de su hegemonía.

Tampoco se puede entender al Estado como un simple "instrumento", perfectamente homogéneo, de dominación de clase sino que es preciso descubrir cuáles son los sectores que se expresan en cada momento y las contradicciones que existen entre ellos. El englobamiento de la política estatal en un todo uniforme no lleva más que a la confusión de proyectos diferentes e incluso contrapuestos y a la descalificación de los espacios de lucha que el propio aparato del Estado abre a ciertos sectores, en especial durante los gobiernos populistas. [Esta distorsión en el análisis se hizo patente en el caso de la izquierda tradicional argentina, es decir socialistas y comunistas, que sólo pudieron ver en la experiencia peronista un intento de corte fascista que profundizaría la dominación de la clase obrera. No percibieron, por ejemplo, que la fuerza del pujante movimiento sindical protegía a dicha clase en lugar de debilitarla.]

Otro elemento de primera importancia para nuestro trabajo es la valoración de lo nacional. Considerado durante mucho tiempo por el marxismo como un componente burgués, fue recuperado por Gramsci como un elemento movilizador de las masas populares. El pensador italiano señala que cada formación social es una combinación única, con sus propias particularidades y que, por lo tanto, es preciso que el punto de partida del análisis sea nacional, aunque se considere al mismo tiempo la perspectiva internacional. [Este enfoque resulta muy válido para comprender fenómenos tan particulares como el peronismo (que aunque se inscribe dentro del populismo tiene rasgos muy específicos) o como el autoritarismo (que reviste en Argentina características diferentes a las de los demás países de América Latina)]

Estado-Nación o Estado y nación

En los países centrales, la burguesía se desarrolló como una clase nacional que requirió del fortalecimiento de la nación para sus propios intereses. Estado burgués y nación formaron, en ese marco, una unidad: el Estado Nación.

Por el contrario, en los países periféricos la situación parece invertirse. En ellos, la relación entre el Estado y la nación obliga a un análisis diferenciado.

Los Estados nacionales de América Latina no se crearon para unificar el mercado interno sino más bien para lograr su incorporación al mercado mundial, en términos de su subordinación a las metrópolis. La acumulación de capital se hizo primariamente con base en cierta acumulación interna de las clases dominantes, que en algunos países como Argentina dio lugar a la formación de una burguesía local. Esta burguesía, aunque muy ligada a los capitales internacionales a través del comercio, buscó la formación de un mercado interno. Al mismo tiempo se aso

ció a los capitales internacionales como forma de crecer. Gran parte de la acumulación y el desarrollo del capital industrial fue posible al asociarse éste con el capital internacional, o bien al montar su propia producción alrededor de las cadenas monopólicas. Los intereses de la burguesía agroexportadora ligada con los grandes capitales industriales quedaron, pues, encadenados al capital internacional. Por otro lado, los sectores populares (clase obrera, campesinado y pequeña burguesía nacional) se vieron afectados y limitados por la penetración extranjera, aliada de la gran burguesía local.

De esta manera, en los países periféricos lo nacional es con frecuencia una bandera política del bloque popular. Se verifica así una escisión entre la idea nacional y el proyecto estatal. La primera aparece asociada con la categoría pueblo y, al mismo tiempo, con componentes ideológicos de "atraso" o "conservadurismo", ligados a la oposición oligárquica inicial frente al proyecto estatal burgués. Este último, por su parte, representa a la gran burguesía emparentada con una oligarquía más moderna, con fuertes lazos con los capitales internacionales y cuyo discurso ideológico es de corte liberal: el "laissez faire, laissez passer", como fórmula de acceso para los monopolios.

En virtud de su relación de dependencia, los Estados liberales latinoamericanos no pudieron ser depositarios de la soberanía nacional, salvo en los casos en que se produjo la ruptura o discontinuidad del dominio hegemónico de la gran burguesía agroexportadora.

Estado y nación fueron términos escindidos; el primero quedó asociado con lo extranjero y el segundo con lo popular. operándose una superposición en la que se asocia la liberación nacional con la liberación social.

Por esta misma razón, en Argentina el populismo levantó las banderas de la soberanía nacional, en tanto que los gobiernos militares sólo pudieron asumir lo nacional como un fenómeno territorial o de enunciación discursiva. Tal como sos-

tiene O'Donnell, el Estado autoritario conlleva la supresión de dos mediaciones: la ciudadanía (en tanto categoría de representación electoral) y lo popular; al tiempo que invoca otra mediación, la nación, a la que alude como proyecto pero no como realidad. Esto se debe a que la concreción de una política nacional llevaría a reformular la relación con los países centrales, tarea que estos Estados no pueden ni quieren realizar.

Así pues, la problemática de lo nacional nos lleva a abordar el análisis de las formas políticas en las que se inscribe, sean éstas de corte autoritario o democráticas.

Democracia v Estado

En términos generales, podríamos decir que la democracia, como principio, representa el fluir del poder desde abajo hacia arriba. Pero al hablar de las formas concretas que reviste es preciso delimitar las reglas del juego democrático:¹

1) todos los ciudadanos mayores de edad gozan de derechos políticos, sin restricciones; 2) todos los votos tienen igual valor; 3) todos los ciudadanos con derechos políticos son libres de votar en una confrontación de grupos organizados; 4) debe haber alternativas reales entre las que se pueda optar y 5) en las votaciones rige el principio de mayoría numérica.

Este tipo de definición, por ser mínima, deja al margen, entre otras cuestiones, las diversas formas institucionales y encubiertas de exclusión política, como la marginación misma en sus diversas manifestaciones.

La categoría "democracia" se inserta en discursos diferentes, que a su vez representan estrategias distintas. Sólo a primera vista podemos distinguir entre

¹ Norberto Bobbio, ¿Qué alternativas a la democracia representativa, Sistema 16, 1977.

las democracias correspondientes a los gobiernos de tipo liberal, las democracias de los populismos y las llamadas democracias populares que sustentan los países del llamado socialismo real. Cada una de ellas sostiene ser más "democrática" que las restantes y a su vez, todas aluden a principios diferentes.

Dejando de lado el problema de las formaciones socialistas, aun dentro de un mismo esquema político, por ejemplo en la democracia representativa, los diferentes candidatos de una lucha electoral pueden esgrimir la defensa de la democracia, aunque con contenidos diferentes. Incluso dentro de un mismo proceso (como el peronista) el concepto de democracia se fue resignificando de acuerdo con los distintos momentos por los que atravesó.

Los populismos opusieron a las llamadas democracias formales las que dieron en llamar democracias reales. Las democracias formales representaron la institucionalidad de la democracia, en tanto que las reales hicieron hincapié en la justicia social como primer contenido de la democracia. En estas últimas la participación empieza por la inclusión en el ingreso; a su vez, la relación lider-masas rebasa a las instituciones de representación política mediante la movilización, y da lugar a nuevas formas de participación a través de las corporaciones.

Pero aun las democracias reales, propias de los regímenes populistas, fueron transitando hacia democracias de tipo institucional, o democracias integradas, que buscaron la desmovilización de las masas y la obtención de un consenso pasivo, para garantizar la estabilidad política.

Si bien el peronismo representó una profundización de la democracia formal (sobre todo por ampliar de manera considerable la base de votantes) propuso una democracia real, centrada en la justicia social como vía de participación, en la movilización y en la relación directa con las masas y las corporaciones. Este esquema entró en contradicción con principios básicos de la llamada democra

cia formal, como la representación partidaria, que fue rápidamente desplazada por otras formas de participación.

Por otra parte, la oposición entre democracia directa y democracia representativa se ha planteado con frecuencia, idealizando a la primera y proponiéndola como vía de resolución a las limitaciones de la democracia formal. Pero así como la democracia representativa está sujeta a las mediaciones interpuestas por los mecanismos del sistema, que limitan la participación, también la democracia directa puede ser distorsionada mediante otros mecanismos como la manipulación de las masas o la existencia de instancias organizativas que las dirijan. Sin embargo, no se puede desechar la posibilidad de ejercer ambas formas a un mismo tiempo, lo que, de hecho, se practicó en los populismos variando, según los momentos, el acento que se colocó en una y otra forma.

Lo cierto es que el significado "democracia" se modifica según el discurso ideológico del que forma parte. Por lo mismo, no se le puede asignar un contenido de clase en sí, sino que dicho contenido estará dado por el conjunto del discurso que lo rodea. Esta característica no es exclusiva del término democracia, sino que puede extenderse a muchos otros elementos discursivos.

La hegemonía de un grupo se expresa en una hegemonía ideológica sobre el conjunto social; para que pueda lograrlo debe ser capaz de interpelar no sólo al bloque dominante, sino también al dominado. Esto le permite vaciar de contenido al discurso oponente y aumentar las interpelaciones del propio. La lucha por "ga-
nar" significantes para el propio discurso, restándolos del ajeno, es parte de la guerra de posiciones mediante la que se obtiene la hegemonía. En ella, la democracia es una de las posiciones que se ganan, o se pierden, y que adquiere un sentido concreto según el bloque del que forme parte y la política de poder que éste desarrolle.

Corporativismo y Estado

La democracia moderna, nacida con la Revolución Industrial, se había planteado la representación de los intereses particulares del individuo, sin intermediarios que dificultaran su relación con el Estado. En este sentido, acabó con el corporativismo tradicional y con su concepción de una sociedad orgánica y jerárquica e inauguró el sistema de representación con base en los partidos políticos.

Sin embargo, en la medida en que los partidos resultaron insuficientes o incapaces para representar determinados grupos con intereses económicos particulares, el Estado se vio precisado, para mantener la hegemonía, a su inclusión como interlocutores políticos. Así nacieron las políticas de concertación como forma de gobernar las relaciones entre fuerzas sociales organizadas y el Estado. Los mecanismos de concertación podían fungir como un complemento de la democracia. De esta manera, el Estado no sólo permitió tales relaciones sino que incluso conformó alrededor suyo a corporaciones que pudieran funcionar como sus sostenedoras. Tal es el caso del sindicalismo en ciertos países, como México y Argentina, que atravesaron por experiencias populistas.

En Argentina, aunque el sindicalismo existía desde fines del siglo pasado, su conformación como un aparato de poder propio y, sobre todo como interlocutor político, data precisamente del periodo peronista. Nacido al abrigo del Estado, sin embargo alcanzó un alto grado de independencia posterior, sobre la base de la concertación que sólo era posible en la medida en que detentara un poder real. Este poder se sustentó en los sindicatos de masas, unificados por ramas de la industria; en el hecho de contar con una base políticamente homogénea, puesto que se identificaba mayoritariamente con el peronismo; en el mantenimiento de una Central General de Trabajadores (CGT) única; y en los fondos económicos

provenientes del descuento de cuotas automático del salario, así como de la administración de las poderosas obras sociales y el control de los contratos colectivos de trabajo. El sindicalismo se convirtió entonces en un interlocutor válido además de necesario.

La proscripción política del peronismo a partir de 1955 profundizó esta situación, dado que el sindicalismo se convirtió entonces en la expresión política de un movimiento mucho mayor, cuyos canales de participación formal estaban cortados. A lo largo del periodo 1955-1966, y aun después, la lucha sindical representó la presencia incómoda de un amplio sector popular que impidió la consolidación de los distintos proyectos ensayados desde el poder.

Por su lado, otra gran corporación se abría paso en el escenario argentino: las Fuerzas Armadas. Nacidas en el siglo.pasado y vinculadas, sobre todo a partir de los 80, con las grandes familias oligárquicas, acostumbradas a participar del poder, sin embargo fue a partir del golpe de 1943 cuando se asumieron claramente como sujetos políticos con una voz y un proyecto propios. Durante el periodo que analizaremos, las Fuerzas Armadas asumieron alternativamente diferentes propuestas, cada una coincidente con distintas fracciones del bloque en el poder, reivindicando para sí el derecho de privilegiar a una u otra.

En términos esquemáticos podríamos decir que si en la sociedad argentina individualizáramos dos bloques (el dominante y el popular), la clase principal del primero sería la gran burguesía agroexportadora, y la del segundo la clase obrera industrial. Ahora bien, en el periodo que analizaremos ni una ni otra se encontraban representadas en el juego de la democracia formal, la primera por haber perdido un proyecto que abarcara al conjunto social y la segunda por proscripción. Ambos hechos estaban, a su vez, íntimamente relacionados.

La imposibilidad de una representación política directa y las dificultades que ofrecieron las soluciones "mediadas" por los partidos tradicionales provocaron

una situación en la que el acuerdo interpartidario no garantizaba el acuerdo entre las clases sociales principales, las que optaron por buscar su expresión a partir de dos fuertes corporaciones.

Tanto las Fuerzas Armadas como el sindicalismo acrecentaron su poder, en la medida en que evocaban, tras su propia fuerza, las de sectores más amplios que ellas mismas; cumplían una función social que las colocaba en el primer plano de la lucha política. A su vez, aumentaba su autonomía de manera creciente, en un caso de la gran burguesía pampeana y en el otro de la clase obrera como tal. Sobre esta base hay que analizar el proyecto corporativo ensayado por el general Onganía, inscrito en lo que podríamos llamar el corporativismo tecnocrático. Esta modalidad consiste en la colaboración de organizaciones tanto obreras como patronales, reservando la instancia de decisión a élites de técnicos y altos funcionarios. Su origen se debe buscar en las dificultades manifiestas de la partidocracia y el sistema representativo para controlar los conflictos sociales y mantener la estabilidad del sistema en situaciones de debilitamiento o pérdida de la hegemonía. Por ello se presenta como antagónico con las instancias democráticas y propone una reestructuración del aparato estatal y de todos los mecanismos de representación y participación.

Con la Revolución Argentina, corporativismo y autoritarismo se conjuntaron para intentar salvar la enorme brecha abierta entre la sociedad y el sistema político.

El Estado autoritario

Los Estados de tipo autoritario se han extendido en América Latina a partir de la década del 60. Sin embargo, desde mucho antes las Fuerzas Armadas habían a-

sumido un papel más o menos protagónico, sobre todo en países que, como Argentina, vivieron un proceso populista íntimamente ligado a ellas. Más adelante, después de la Segunda Guerra, los ejércitos se alinearon tras la hegemonía norteamericana y se propusieron la defensa de las llamadas "fronteras ideológicas" que desplazó lo nacional por una continentalidad muy benéfica para las intenciones de dominación de Estados Unidos. Desde entonces comenzaron a fungir como instancias para adaptar nuestros países a su función de capitalistas periféricos. La proliferación de los Estados autoritarios está asociada con este hecho y con la dificultad de las clases dominantes para asegurar tal reubicación, así como su hegemonía, sin el auxilio de las Fuerzas Armadas.

Por contar con el monopolio de la fuerza, el ejército juega un rol de primordial importancia en la preservación del sistema. Su relación con las clases sociales no es una relación de exterioridad o de dependencia, sino que, al igual que ocurre con el Estado, la institución militar está atravesada por los conflictos de clase. "Las contradicciones propias del bloque en el poder repercuten directamente en el seno del ejército, se cristalizan en tal o cual tendencia o fracción, apoyando tal o cual facción del bloque en el poder", sostiene Nicos Poulantzas.² Por ello, dentro del aparato militar argentino se pueden identificar distintos sectores con contradicciones internas pero sobre todo se distinguen diferentes proyectos que favorecieron a uno u otro sector del bloque en el poder. Así se dio un tránsito de lo nacional a una propuesta liberal y por último a un desarrollismo corporativista, sin que cada uno de estos intentos se pudiera identificar en forma directa con uno u otro sector interno. Las Fuerzas Armadas tienen una unidad propia y a la vez una autonomía relativa

² Nicos Poulantzas, *La crisis de las dictaduras*, en Mario Esteban Carranza, *Fuerzas Armadas y estado de excepción en América Latina, México, Siglo XXI, 1978, p. 53.*

con respecto a las distintas fracciones del bloque dominante, más allá del origen de clase de la mayoría de sus miembros, o incluso, de la cúpula militar. También aquí hay una pugna por la hegemonía en la que indudablemente estos factores desempeñan un papel, aunque no con el carácter de determinantes. La definición de la hegemonía interna es, a su vez, central en la lucha por la hegemonía social.

No se puede caer en el error de suponer que todo el accionar militar se limita a la coerción. Como sostiene Alain Joxe, las Fuerzas Armadas son un "lugar del aparato del Estado que produce simultáneamente efectos de dominación y efectos de hegemonía".³ El campo de irradiación de las Fuerzas Armadas es tan amplio que podríamos decir que constituyen a la vez un aparato económico, ideológico y represivo del Estado.

Por su amplia incidencia social, por la importancia de las funciones que reúnen y por la unidad que les da su estructura corporativa, las Fuerzas Armadas tienen a asumir sobre sí la función del Estado en momentos de crisis generalizada. Estos se caracterizan por 1) un desfase de la dominación económica respecto de la político-ideológica; 2) una crisis de dominación política del bloque en el poder y; 3) la incapacidad del bloque en el poder para superar las contradicciones que amenazan su hegemonía. Estos elementos, presentes desde los inicios del periodo 1943-1966, sin embargo se agravaron a partir del fenómeno peronista por su alta incidencia político ideológica en la sociedad.

Así, la implantación del Estado autoritario fue consecuencia de una crisis política, ideológica y económica, es decir de una crisis generalizada, que no encontró resolución en las instancias institucionales democráticas.

A partir de la década del 60, y más específicamente de los golpes militares ocu-

³ Alain Joxe, Atlantisme et crise de l'Etat européen, en Mario Esteban Carranza, op. cit., p. 52.

rridos en América Latina en los años 70, se practicaron con mayor claridad las características del Estado autoritario (llamado también burocrático-autoritario o de excepción, según los autores). Este tipo de regímenes surgió como respuesta tanto a la crisis de hegemonía del Estado oligárquico como a una creciente movilización popular que polarizó a las clases que se sintieron amenazadas por una posible interrupción del orden social. A su vez, la necesidad de reinsertar a los países latinoamericanos en un orden internacional acorde con la actual fase de desarrollo capitalista fue un elemento que favoreció la proliferación de estos Estados.

Por todo ello, las consignas de "estabilidad interna" y "confianza externa" fueron centrales en los regímenes surgidos a partir de 1960.

La profundidad de la crisis política parece guardar relación, a su vez, con la profundidad del ciclo populista anterior y con la fase en que quedó interrumpido. Esto se explica en el hecho de que para las clases dominantes resulta de primordial importancia destruir las bases de posibilidad del populismo, para recuperar una verdadera hegemonía social. En Argentina, este hecho se expresó en la antinomia peronismo-antiperonismo que estigmatizó la vida política a lo largo del periodo.

Las "aperturas" que suceden a los Estados autoritarios no implican necesariamente una derrota de los mismos. En muchos casos, las salidas "civiles" fueron una forma de preservar los cambios sociales ya impuestos, o bien constituyeron caminos para asegurar un retiro temporal de la escena política. Lo cierto es que los gobiernos militares se enfrentan con un serio problema de legitimidad, que se manifiesta en cuanto desaparece el peligro "inminente" que amenazaba con la disolución social.

Las funciones de gobierno suelen desgastar a quien las ejerce. Este rasgo parece presentarse con especial énfasis en el caso de los gobiernos militares, que

enfrentan un doble juicio: el de la sociedad y el de la institución, con el peligro de disgregación interna que este último conlleva. Ante la posibilidad de la "politización" y desintegración de las Fuerzas Armadas, los militares suelen optar por el retiro y la autopreservación. Saben que mientras la institución sobreviva, podrá encontrar las formas y el lugar para ejercer el poder con que cuenta y hacer oír su voz.

CAPITULO II

PODER MILITAR Y POPULISMO

(1943-1955)

CAPITULO II

PODER MILITAR Y POPULISMO

Ningún error puede ser causa de mayores desventuras que alejar a las Fuerzas Armadas del pueblo que las nutre.

General Juan Domingo Perón

Introducción

La serie de golpes militares que interrumpieron la vida democrática argentina a lo largo de este siglo se inició, indudablemente, con el de 1930 en contra del gobierno radical de don Hipólito Irigoyen. En ese momento los militares utilizaron la fuerza de las armas para desplazar al mayoritario partido radical y reinstalar en el poder al partido conservador, claro vocero de la gran burguesía terrateniente por aquellos años. Podríamos decir que este sector social, cuyo papel de clase dominante era indiscutible, fue el que utilizó la fuerza de las armas para asegurar sus ganancias, provenientes de la exportación, en la coyuntura de crisis internacional de los años 30.

La crisis del 30 representó la caída de los precios agrícolas en el mercado internacional y el inicio de una política proteccionista por parte de los países centrales. Esto puso en peligro los negocios de la gran burguesía agrícola argentina que dependían de la exportación de granos y carne hacia Europa y en especial a Inglaterra, país que amenazaba con suspender las importaciones.

En esta coyuntura de emergencia para la clase dominante, la intermediación radical resultaba poco confiable. Era preciso tener las riendas del Estado para asegurar la colocación de las cosechas de la gran burguesía terrateniente, y

sobre todo, la producción de los invernadores que regían la actividad ganadera. Efectivamente, en 1933, este sector logró su supervivencia mediante la firma del Tratado Roca-Runciman, por el cual Inglaterra se comprometió a seguir comprando una parte de las carnes argentinas a cambio de extraordinarios privilegios en la radicación de capitales y en la colocación de sus mercancías. Roca, vicepresidente del país, y representante argentino en la negociación, expresó en esa oportunidad: "La Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico";¹ debió haber dicho "La gran burguesía agroexportadora, por su dependencia económica, debe comportarse como parte integrante del imperio británico".

En el golpe del 30, los militares fueron hasta tal punto instrumento de los intereses del grupo dominante, que incluso recibieron su pago. Poco antes de lograr la firma del Tratado Roca-Runciman, la oligarquía recompensó con dinero la intervención militar contra Irigoyen. El presidente Uriburu giró un comunicado: "Solicito a usted entere a cada oficial que se gestiona que una entidad financiera facilite la cantidad necesaria para que cada oficial cancele el importe total de sus deudas".²

Así, la intervención de 1930 representó el desplazamiento de un partido para la reinstalación de aquél que expresaba a la clase dominante, que le abría el camino para la realización de sus negocios en un momento de crisis. El ejército cumplía el papel de simple instrumento.

En este trabajo se pretende demostrar que las sucesivas intervenciones militares forman parte de un proceso sostenido y creciente de acumulación de poder en

¹ En Mario Horacio Orsolini, Ejército argentino y crecimiento nacional, Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1965, p.23.

² En Rogelio García Lupo, La rebelión de los generales, Buenos Aires, Jancana Ediciones, 1963, p. 91.

el seno de las Fuerzas Armadas. A su vez, esta acumulación ha significado un incremento de la autonomía relativa del ejército con respecto al aparato estatal, y aun a las distintas clases sociales, para pasar a constituir un grupo con representación de sus propios intereses, una suerte de "partido militar". Por ello se toma como punto de partida el golpe de 1943, en el cual los militares manifestaron por primera vez un accionar independiente de los partidos políticos y regido por objetivos propios. Estos elementos estaban ausentes en el golpe de 1930 que sólo puede registrarse como un antecedente del proceso que pretendemos describir y quizás como una toma de conciencia sobre el poder real de las armas dentro de la sociedad civil.

Marco histórico

El golpe de 1943

Al producirse el golpe militar del 4 de junio de 1943, por primera vez en el país las Fuerzas Armadas ponían fin a un ciclo que ellas mismas habían iniciado: la restauración conservadora. Trece años antes los militares habían desalojado del gobierno al caudillo radical Hipólito Irigoyen, para sostener, mediante fraudes y proscripciones, a sucesivos gobiernos conservadores (Uriburu, Justo, Ortiz, Castillo). Pero ya en 1943, Castillo, presidente conservador, trataba de imponer, nuevamente a través del fraude, a un candidato oficial: Roberto Patrón Costas, representante de la gran burguesía agraria. Este continuo irritaba a distintos sectores sociales, por diversas razones.

Los radicales, partido con una alta influencia en las clases medias y en los sectores de menor ingreso, veían con desagrado unas elecciones que los excluían

de antemano del gobierno por el sistemático camino del fraude. Necesitaban rom- per esta estabilidad conservadora que les cerraba las puertas, si no de cierta participación, al menos de la toma de decisiones y de las claves del poder. A su vez, las Fuerzas Armadas, en cuyo seno crecían las corrientes nacionalis- tas, veían en la candidatura de Patrón Costas una amenaza para la política de neutralidad que hasta entonces se había mantenido en relación con la Segunda Guerra Mundial. El arraigo de la posición neutralista en el ejército se puede asociar a muchos factores: el resentimiento y la desconfianza hacia Estados U- nidos por favorecer la hegemonía brasileña en detrimento de la argentina, cir- cunstancia que a los militares les hacía temer una invasión del territorio (a- parentemente propiciada por Estados Unidos); los vínculos con Gran Bretaña, que trataba de que sus "enclaves" no fueran absorbidos por la influencia norteamer- icana, desplegada a través de los organismos continentales que esta potencia con- trolaba, como las conferencias de asistencia recíproca con los países latinoame- ricanos a los que Argentina se mostraba reticente; la identificación ideológica de algunos militares con los procesos nacionalsocialistas europeos. Además, en el interior de las Fuerzas Armadas crecía la desconfianza en la capacidad de los sectores civiles para controlar la situación política del país y encauzarla por caminos seguros en la difícil coyuntura de la próxima posguerra. La importancia que los militares argentinos se asignaron, y la que los propios civiles les concedieron, se refleja con bastante claridad en los hechos concre- tos que desencadenaron el golpe. Cuando el presidente Castillo impuso la candidatura de Patrón Costas, la reac- ción de los sectores políticos, tanto radicales como conservadores, fue negati- va. Los radicales comprendían que una vez más serían excluidos "por vía democrática", es decir fraudulenta, puesto que constituían efectivamente una fuerza mayorita

ria. Por lo tanto, decidieron incitar al general Pedro Pablo Ramírez, ministro de Guerra, a dar un golpe que restituyera la práctica de comicios limpios, a cambio de lo cual le ofrecían la candidatura presidencial. Además, los radicales propiciaban la ruptura con el Eje y tenían la esperanza de que el nuevo gobierno la concretara. En efecto, existían rumores acerca de la simpatía del general Ramírez por los aliados.

Aunque Ramírez no habría accedido a la propuesta, dado que ésta tomó estado público el presidente Castillo exigió una declaración tajante de su parte. Ramírez se limitó a un suscito desmentido que no satisfizo al primer mandatario, quien entonces le pidió su renuncia. La remoción del ministro, aunque exigida por el propio presidente de la República, fue interpretada por las Fuerzas Armadas como una ingerencia o intromisión del poder civil en su propio terreno, lo que acentuó el clima de conspiración, desde entonces liderado por Ramírez, en contra del gobierno constitucional.

El movimiento fue encabezado por el general Rawson, entonces comandante en jefe. Esta circunstancia permitió mantener las estructuras jerárquico institucionales, lo que es de primordial importancia en el accionar militar puesto que funciona como un elemento de cohesión interna. Al respecto, Rogelio García Lupo señala en relación con éste y otros golpes posteriores que un movimiento de estas características no puede triunfar sin la participación de los mandos naturales.

No obstante, tres días después Rawson presentó la renuncia y el proceso quedó encabezado por Ramírez. Las circunstancias de la dimisión no quedan claras y se han dado diferentes explicaciones que van desde adjudicarla a ciertas dificultades en la formación del gabinete hasta atribuirle a diferencias en cuestiones de política exterior. Lo cierto es que la conducción de este nuevo gobierno quedó en manos del general "agraviado", lo que puso de manifiesto con toda claridad la intransigencia castrense ante las supuestas intromisiones ci-

viles. Así, el 4 de junio de 1943 los militares dieron un golpe que, a diferencia del de 1930 no fue expresión de un determinado partido o fracción sino de la defensa de su propia autonomía y de su supuesta capacidad para dar soluciones a un país en el que las fuerzas políticas serían, según su propia versión, ineptas, corruptas y desconfiables. Aún hoy, Mariano Montemayor, ideólogo de las Fuerzas Armadas ligado con sectores nacionales, sostiene que: "Sólo la corriente nacionalista reconoció en esa invasión castrense al área específicamente civil, el signo de la irremediable caducidad de todo un sistema y hasta un estilo de vida... El pueblo, fatigado, indiferente, les había dado la espalda [a los políticos] y esperaba el nacimiento de una nueva fuerza... los viejos políticos se encontraban desprestigiados".³

Quizás es en el golpe del 4 de junio donde podríamos encontrar el inicio de esta concepción de "salvataje" nacional, por la cual los militares argentinos, en aras de una vocación de servicio y de un "deber moral supremo" se ven "obligados" a intervenir una y otra vez desplazando a las fuerzas civiles.

En 1943, su instalación en el gobierno se proponía producir el saneamiento necesario para retomar el orden constitucional. El protagonismo de las Fuerzas Armadas fue posible por circunstancias internas, concretamente por el deterioro político de radicales y conservadores y por su carencia de líderes, pero también es necesario recordar la importancia que tenían las estructuras militares en un mundo convulsionado por la Segunda Guerra.

Una vez en el gobierno, Ramírez formó un gabinete que no tenía un signo político claro. Sus coincidencias eran escasas y muy propias del pensamiento militar: el orden ante todo y el temor a las consecuencias desestabilizantes de la posguerra. Se mantuvo una política de neutralidad, a pesar de la intención rupturista de ciertos sectores radicales, lo que era acorde con los intereses castrenses, pues existían expectativas de recuperar el equilibrio continental me-

³ Mariano Montemayor, Presencia política de las Fuerzas Armadas, Buenos Aires, Editorial Sigla, pp. 39-40.

dian te la adquisición de armas a Alemania.

El gobierno nombró ministro de Hacienda a un representante de la Sociedad Rural Argentina, con lo que automáticamente quedaron protegidos los intereses de la gran burguesía agraria.

Pero también creo lo que después sería la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde se desarrolló una política más distributiva, a partir de medidas como la baja de los alquileres y el aumento de ciertos sueldos. Esta línea social débil, pero que iría tomando fuerza a partir de la instalación de Perón en la mencionada Secretaría, se fundaba en un intento de impedir las conmociones sociales que se esperaban una vez terminada la guerra.

Al mismo tiempo, los militares hablaban de una política de protección y fomento industrial para aprovechar la coyuntura de la guerra e iniciar la sustitución de importaciones.

El golpe parecía abrir espacios para todos, pero la falta de un proyecto coherente hacía que, en definitiva, no se abriera realmente ninguno.

El neutralismo

Si los militares no partían de un proyecto político acabado y actuaban pragmáticamente respondiendo a principios muy generales, más ideológicos que políticos o económicos, fueron las circunstancias y en muchos casos la actitud de la propia oposición las que forzaron y delimitaron las respuestas del gobierno.

En el caso de la política exterior pasó algo similar ya que si bien existía una actitud general de neutralidad, sin embargo, había sectores que veían con simpatía una posible ruptura con el Eje y un acercamiento a los Estados Unidos. Tal era el caso del canciller Storni, quien en julio de 1943 envió una carta al secretario de estado norteamericano en la que hacía algunas afirmaciones arries

gadas: sostenía que los barcos argentinos navegaban para los aliados, es decir Inglaterra, desde principios de la guerra; que la Argentina era partidaria de las democracias y se oponía a cualquier totalitarismo, pero que necesitaba aviones, repuestos, armamento y maquinaria para restablecer el equilibrio militar en Sudamérica y que, en caso de recibir esta ayuda, seguramente habría un avance en las relaciones diplomáticas.

Los norteamericanos interpretaron la carta como una presión -efectivamente lo era- y su reacción fue furibunda. Hicieron pública la misiva junto a una respuesta bastante prepotente.

Esta actitud de los Estados Unidos no logró más que reafirmar las posiciones neutralistas, ya que desde ese momento quedaba cancelada toda posible ayuda norteamericana para un reequipamiento, objetivo que los militares argentinos consideraban prioritario. Así pues, la respuesta norteamericana provocó un alejamiento mayor y cerró los pocos canales de aproximación que existían.

Al interpretar el suceso Storni, Alain Rouquié desliza la posibilidad de que la carta, desde su redacción, se haya pergeñado como una provocación para desencadenar la ruptura de relaciones. Por el contrario, creo que si se considera que la carta provenía de un marino, los términos liberales de su exposición y el intento de un acercamiento a los Estados Unidos resultan más que plausibles. No podemos olvidar la formación ideológica liberal de esta arma, resaltada por el propio Rouquié, y cómo en el marco de un gobierno poco homogéneo existía una fuerte presión de muchos sectores que veían con agrado una posible ruptura con el Eje. Con respecto al chantaje implícito, es indudable que para los militares argentinos la competencia por el liderazgo del Cono Sur era prioritaria, sobre todo en un momento de guerra, en que la superioridad militar se consideraba decisiva. Por otra parte, como ya se señaló, un elemento central en las buenas relaciones con el Eje era la esperanza de que proveyera armamento. El tono y la falta de mesura en los términos se pueden explicar simplemente a partir de la

conocida soberbia militar, de la que han dado muestras no menos asombrosas en los recientes sucesos de las Malvinas.

La reafirmación de las posiciones neutralistas culminó con el nombramiento de un gabinete que respondía por entero a esta posición y con la designación del general Farrel, paladín del neutralismo, como vicepresidente.

Pero a medida que avanzaba la guerra, la derrota de Alemania se hacía evidente y la política norteamericana en Latinoamérica se fortalecía. Las presiones por lograr una ruptura de relaciones con el Eje aumentaron.

En enero de 1944 el cónsul argentino Hellmuth, de paso por Europa y encargado de negociar la compra de armas a Alemania fue denunciado como espía y arrestado por los servicios de las Naciones Unidas. Hellmuth llevaba una carta del presidente Ramírez dirigida a Hitler. Se amenazó entonces al gobierno argentino con hacerla pública, en caso de que no rompiera las relaciones con Alemania. Lo grave era que la publicidad del documento justificaría una ocupación militar del país.

El suceso dio lugar a una crisis diplomática que culminó en el mes de febrero en una casi forzosa ruptura de relaciones con el Eje. Los sectores nacionalcatólicos se separaron del gobierno y el presidente Ramírez condenó al nacionalismo totalitario en una alocución pública y solicitó la renuncia del vicepresidente Farrell, neto representante del neutralismo.

El giro político parecía evidente y los sectores cercanos a los Estados Unidos se regocijaban. En estas circunstancias, Perón, hombre de confianza de Farrell, reunió a la oficialidad de Campo de Mayo y Palomar, que en desacuerdo con las medidas presidenciales exigieron la renuncia de Ramírez y la instalación de Farrell en su lugar.

De esta manera, los líderes de la posición neutralista mantuvieron el gobierno. Cabe pensar que la ruptura formal de relaciones con el Eje les permitió usar el descontento de la oficialidad para derrocar a Ramírez y alcanzar el control del

gobierno. Pero además les resolvió un problema: la neutralidad comenzaba a ser una amenaza para la posición del país una vez terminada la guerra, que ya esta ba definida a favor de los aliados. Sin embargo, este problema no quedaba total mente resuelto por la sola ruptura. Estados Unidos exigía "pruebas de fidelidad" más claras.

El aislamiento diplomático de la Argentina crecía. Las Naciones Unidas se nega ban a reconocer al general Farrell como forma de presionar al gobierno para o bligarlo a una definición más clara. Esto comprometía seriamente la situación del país en la posguerra, en que se temían desbordes sociales que sólo podrían detenerse o impedirse si el país llegaba a ese momento con un equilibrio tanto interno como internacional.

El 21 de febrero de 1945 se firmó el Acta de Chapultepec a la que el gobierno de Farrell no adhirió. Las presiones aumentaron y se le ofreció a Argentina la re anudación de relaciones con los países de América Latina a cambio de que firma ra el Acta y declarara la guerra a Alemania. El 27 de marzo de 1945, a regañadientes, bajo presiones y poco antes de la capitulación del Eje se declaró la guerra contra Alemania y Japón. La resistencia a aceptar el liderazgo de Estados Unidos en América Latina marcaría el inicio de una relación difícil y reti cente que se mantendría durante todo el gobierno peronista. Los militares nacio nalistas del 43 (y Perón como uno de ellos) estaban enfrentados desde su nacimiento con la potencia americana.

El sorprendente ascenso de Perón

Hacia fines de 1943, Juan Domingo Perón ya era una figura conocida que iba diferenciándose rápida y claramente del golpe militar que lo había iniciado en

la vida pública. Quizás uno de los elementos más claros en esta diferenciación fue la importancia creciente que el coronel le otorgó a lo político así como el desplazamiento de las concepciones más autoritarias y de la importancia que se le atribuía a la cuestión del orden. (Ya en diciembre de 1943 se oponía a la instauración del estado de sitio).

A lo largo del año siguiente logró elevar el Departamento Nacional del Trabajo al rango de Secretaría de Trabajo y Previsión desde donde desarrolló una labor que, además de ser eminentemente política, tuvo la característica de estar dirgida a una clase en particular: la obrera. Junto a las medidas concretas adoptadas por Perón en relación con reivindicaciones de tipo laboral, inauguró una modalidad muy propia y significativa: los mensajes. Perón era un hombre de dis cursos, hablaba a la gente, explicaba sus procedimientos. De estos mensajes Rou quí ha hecho un análisis en el que demuestra el desplazamiento de los temas re feridos a la unidad nacional y el orden, por los relacionados con la justicia social. En su primer discurso del 3 de diciembre de 1943 la justicia social ape nas representaba un 10 % de lo expuesto, y sólo cinco meses más tarde el mismo tema ocupaba el 70 % de sus mensajes.

Una de las peculiaridades del coronel fue su aceleradísimo ascenso. En el térmi no de dos años fue secretario de Trabajo y Previsión, el 27 de noviembre de 1943; ministro de Guerra, el 26 de febrero de 1944; vicepresidente, el 7 de julio de 1944, y candidato a presidente de la República en 1945.

Obtuvo cada uno de estos puestos gracias a una habilidad política, propia de quienes tienen un objetivo y un proyecto claros. En un principio, el Departamen to Nacional del Trabajo se le ofreció como una forma de sacarlo de circulación con un puesto poco importante. Perón, en cambio, lo utilizó como plataforma de lanzamiento de su propia figura y logró que le dieran el rango de una secretaria de estado, desde donde realizó gran parte de su labor política.

El nombramiento como ministro de Guerra lo consiguió después de la renuncia de

Ramírez y su sustitución por Farrell. El nuevo presidente, a quien Perón había ayudado a desplazar a Ramírez, era uno de los hombres que apoyaban el ascenso del entonces ya controvertido coronel.

A su vez, para ser designado vicepresidente había desarticulado antes a sus oponentes dentro del propio gobierno.

La acumulación de cargos del coronel creó cierto malestar en diversos sectores, ya que a cada nuevo nombramiento no sucedía la renuncia al puesto anterior, sino la acumulación de uno sobre otro. Sin embargo, aunque esta circunstancia era irritativa parece claro que para la gran burguesía agroexportadora el verdadero malestar provenía del giro cada vez más popular que iba notando en Perón. La Secretaría de Trabajo y Previsión tomaba medidas muy concretas: la negociación de convenios colectivos de trabajo se hizo más efectiva; se impusieron indemnizaciones para los despidos; los convenios aseguraban vacaciones pagas y se amplió el sistema de jubilación que ahora abarcaba a empleados y obreros de la industria y el comercio.

Sin ir más lejos, en 1944 la misma Secretaría había sancionado el Estatuto del Peón, que permitía la agremiación de los peones, estipulaba un salario mínimo, jornada de ocho horas, revisión anual de salarios, indemnización por despido y vacaciones pagas para los trabajadores rurales. El hecho de que los peones tuvieran derechos representaba una dificultad, pero que el Estado se permitiera legislar y entrometerse en los "feudos" nunca tocados de los terratenientes y ganaderos era verdaderamente intolerable. La guerra, aunque sorda, quedaba declarada.

El 17 de octubre

Además del aislamiento diplomático, el crecimiento de la oposición ponía en pe

ligro a un gobierno signado por el autoritarismo. Las Fuerzas Armadas permitieron el reinicio de las actividades políticas, desgastadas en parte por el ejercicio del poder sin un proyecto claro y también por el ataque creciente de la oposición. El llamado a elecciones parecía una salida decorosa y de hecho mantenía el juego democrático, ahora sin el riesgo del fraude conservador. Los militares daban un paso al costado y cedían el lugar a los civiles, para evitar un desgaste mayor. Se iniciaba esta especie de juego en dos movimientos: 1) abalanzarse sobre el gobierno y 2) dar un paso al costado y cederlo, para volver a empezar ininterrumpidamente.

Sin embargo, el antimilitarismo creciente que se agrandaba con la victoria de las fuerzas aliadas en Europa, los alarmaba. La oposición liberal, que tenía un importante punto de apoyo en la Federación Universitaria Argentina (FUA), se lanzó a una "resistencia" contra el gobierno en un evidente, aunque equívoco, paralelo con la lucha antifacista librada en Europa. A medida que el gobierno cedía espacios, los políticos asumían una actitud más agresiva que hacía dudar a los oficiales de su decisión de dar elecciones y de la confiabilidad de los civiles.

Por otra parte, el ejército veía con malestar la creciente influencia de Perón. Su acumulación de cargos, su actitud protagónica y "populachera" y la escandalosa y pública relación que lo unía con una actriz de poca categoría, Eva Duarte, eran irritativas. Sin embargo, era el único hombre de las Fuerzas Armadas que parecía tener un proyecto, una opción que impidiera la reimplantación de los modelos liberales, que amenazaban con desandar el camino emprendido en 1943, y que ahora proponían la entrega inmediata del gobierno a la Suprema Corte de Justicia.

Perón comprendía con claridad que el país estaba sufriendo profundas transformaciones que requerían de una política social sin vacilaciones y de cambios políticos y económicos para adaptarse al mundo de la posguerra. Sus posiciones,

aunque surgidas del movimiento de 1943 eran menos vacilantes, más decididas y definidas, tanto en la necesidad de industrialización del país como en el papel político protagónico que se le debía asignar al sector obrero. Esto no suponía la prescindencia de las Fuerzas Armadas sino la compatibilización de estos sectores, asignando un papel dirigente a la capa militar.

Si bien los oficiales desconfiaban de los políticos liberales, a los que consideraban causantes de la crisis del 43, también temían al personalismo y al populismo de Perón. Esta doble reticencia se expresó en una serie de vacilaciones y de contradicciones entre diferentes sectores, y a veces dentro de un mismo sector, que desembocaron en la crisis de octubre de 1945.

El nombramiento de un pariente de Eva Perón en un puesto de poca importancia en las oficinas de correos, funcionó como detonante, pues se lo consideró como un abuso de poder. A raíz de ello, el ejército solicitó y obtuvo la renuncia de Perón. El coronel sólo pidió que el 10 de octubre se le permitiera transmitir por radio un discurso de despedida de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En el mismo día dio lectura a un decreto que otorgaba un aumento considerable de suéldos, la implantación del salario mínimo, vital y móvil y la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades. Lanzaba así una bomba de tiempo en las manos de sus enemigos, a la vez que se alineaba en una posición popular y asociaba el hecho de su renuncia con la adopción de medidas favorables al sector trabajador.

En vista de los acontecimientos, los políticos se reunieron con los altos mandos castrenses y exigieron el arresto de Perón y la renuncia del gobierno. Se formó entonces una Junta de Coordinación Democrática, compuesta por conservadores, radicales, socialistas y comunistas.

La oposición no obtuvo la renuncia de Farrell pero en cambio logró la prisión de Perón que se concretó el 13 de octubre. El coronel, aunque detenido por el ejército, fue custodiado por la marina y trasladado a la isla de Martín García.

Este hecho, completamente irregular, parece indicar que el ejército no garantizaba una posición uniforme con respecto al arresto de Perón y que, por lo mismo, se habría confiado su custodia a la marina. Pero, de hecho, significaba una "invasión de jurisdicción" que creo un gran malestar entre la oficialidad.

El 17 de octubre, los obreros y grupos marginales del cinturón urbano de Buenos Aires marcharon hacia el centro de la ciudad con la proclama de una huelga general que se fue convirtiendo en un reclamo de mantenimiento de los derechos sociales adquiridos, y ahora en peligro, y en el pedido de la libertad de Perón. La marcha del 17 de octubre fue un acto sin precedentes en la vida nacional, no sólo por su masividad sino por el sector social movilizado, la espontaneidad y la ausencia de un encuadramiento partidario o político. La sorpresa fue grande y cundió el temor de que la situación se desbordara.

Farrell había logrado que trasladaran a Perón de Martín García al Hospital Militar de Buenos Aires, tal vez regresándole el apoyo obtenido del coronel cuando Ramírez le exigiera la renuncia.

Perón había quedado nuevamente bajo la jurisdicción de su arma, lo que acababa con la molesta situación de haber sido "abandonado" a manos de la marina, circunstancia que afectaba al espíritu de cuerpo.

Los manifestantes pedían la libertad de Perón y la obtuvieron gracias al desconcierto de los políticos y la escasa o nula resistencia de Farrell. El día culminó con el naciente líder y Farrell hablando desde los balcones de la casa de gobierno. La batalla estaba ganada a favor del peronismo. La oposición no había tenido tiempo de reaccionar; los sectores del ejército contrarios a Perón quedaron sobrepasados por los hechos ante los que crecía el desconcierto; el pueblo probaba extrañado su propia fuerza, que nacía más de lo inusitado de la situación que de una real capacidad organizativa o de presión.

Se ha hablado mucho sobre la supuesta manipulación de las masas en la marcha de amplios sectores populares sobre Buenos Aires. Es indudable que la gigantesca

manifestación fue relativamente organizada por los personajes próximos a Perón como Eva Duarte y Mercante; también resulta obvio que no se encontró con represión o resistencia policial. Pero estos dos elementos no alcanzan para explicar una movilización multitudinaria. No basta con decirle a la gente que vaya a un lugar para que lo haga; no basta con no reprimir para movilizar. Más bien habría que pensar que esa masa que llegó a pie hasta la Plaza de Mayo se movilizaba porque por primera vez, desde el inaccesible aparato estatal, se alzaba una voz dirigida a ellos, los descamisados. Por primera vez eran interlocutores del poder y destinatarios de beneficios sociales concretos.

Los hechos se desencadenaron de una manera imprevisible para todos; ni los militares esperaban la irrupción popular, ni los partidos creían que Perón podría sobrevivir políticamente, ni el pueblo que se movilizó tenía conciencia de su capacidad de presión.

A partir del 17 de octubre, para Perón se abrió el camino hacia la candidatura presidencial. A fines de 1945 se anunció un aumento salarial, se otorgó el aguinaldo y la patronal declaró un lock out.

El gobierno peronista

La campaña electoral fue reñida. Por un lado la fórmula Perón-Quijano y por otro, la Unión Democrática, una alianza entre radicales, conservadores, socialistas y comunistas, que daba por hecho su triunfo contra la "barbarie" peronista. La gran adhesión con que contó la primera fórmula residía, probablemente, en que Perón, hasta ese momento, había avalado su discurso popular con hechos concretos. Las reivindicaciones, además de medidas proselitistas para ganar electorado, se habían convertido en realidad inmediata. Ante eso, poco importaba

que el programa de la Unión Democrática fuera de un radicalismo sin precedentes. (reforma agraria, nacionalización de los servicios públicos, de las fuentes de energía, de las materias primas esenciales y ampliación de la legislación laboral). Era obvio que intentaba ponerse a la izquierda del peronismo y que sus promesas no podían tomarse en serio, desde el momento en que en la alianza participaban hasta los conservadores.

Los resultados electorales fueron tajantes, aunque los peores de la historia peronista hasta 1983. A los comicios acudió el 88 % del electorado; Perón obtuvo el 55 % de los votos emitidos y la Unión Democrática el 45 %. El peronismo ganó con el voto de los distritos obreros y de los sectores más modernos del agro; en cambio, las provincias más tradicionales dieron su apoyo a la Unión Democrática.

Perón había captado una buena parte de la masa electoral de los partidos tradicionales, pero además, de allí en adelante se dedicó a integrar políticamente a sectores marginados, como la mujer. Así, en 1947 le otorgó el voto, largamente prometido por los socialistas y sólo efectivizado por él. Además de participación electoral, la mujer tuvo un lugar de integración a la actividad política y social en la Fundación Eva Perón.

También integró a los llamados territorios nacionales, que hasta entonces no tenían derecho a participar en las elecciones. En esta situación estaban las actuales provincias de Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el territorio de Los Andes (hoy parte de Jujuy, Salta y Catamarca). Con la inclusión de estos sectores, los inscritos en el padrón electoral pasaron de 3 405 173 en las elecciones nacionales de 1946 a 8 633 998 en las de 1951. ⁴

El hecho de incorporar nuevos grupos a la vida política desconcertó a la oposición.

⁴ Darío Cantón, Elecciones y partidos políticos en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 272 y 273.

ción que sólo atinó a explicar el apoyo ferviente de algunos sectores en una es trategia oficial de manipulación de las masas.

La manipulación, la demagogia, la exaltación del líder eran las razones que los partidos políticos creían válidas para explicar el apoyo multitudinario e incon dicional, sin reparar en las conquistas concretas. La política económica del pe ronismo, que buscaba una nivelación hacia abajo, aumentando sobre todo los salarios básicos, fue un factor decisivo. La justicia social se convirtió en eje del gobierno. "Lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre la 'justicia social' y la 'injusticia social'", decía Perón en 1946. ⁵

Para ello, se operó una verdadera transferencia de ganancias, del agro hacia la industria, a partir de una política de sobrevaluación del peso que perjudicaba las exportaciones y favorecía las importaciones necesarias para esta última. Es to aumentó la oposición de las familias oligárquicas y, por supuesto, de sus vo ceros dentro de las Fuerzas Armadas, los hijos de las familias distinguidas, in corporados principalmente a la caballería.

Aunque nacido de las Fuerzas Armadas y conducido por uno de sus oficiales, el movimiento peronista fue haciendo un tránsito hacia los sectores populares. Si Perón se sentía parado sobre dos patas -ejército y sindicatos- y si estas dos patas representaban respectivamente coherción y consenso, podríamos decir que a medida que su gobierno se fue afianzando y ganando apoyo popular, descansó más en su sostén consensual que en el coercitivo, aunque nunca abandonó al ejército, ni dejó de sentirse parte de él.

Es evidente que Perón se identificaba con la institución militar y buscaba que a su vez ésta se identificara con él: era uno de sus reaseguros. Baste recordar que en el acto de asunción como presidente apareció con el uniforme militar

⁵ En Milciadés: Peña, El peronismo, Buenos Aires, Ediciones Fichas, 1972.

y posteriormente buscó y obtuvo ascensos dentro de la jerarquía castrense. Al mismo tiempo, trató de democratizar las estructuras militares para que fueran más afines a su proyecto, y las politizó incluyendo cursos de formación para coroneles en la Escuela Superior de Guerra.

Pero también se convirtió en líder del movimiento popular más grande de la historia argentina, en organizador de un sindicalismo con alta cohesión interna y se llamaba a sí mismo "primer trabajador". Esta doble identificación es parte del peronismo. Aceptar una no supone negar la otra, a riesgo de interpretaciones viciadas o parciales.

En 1947 se nacionalizaron los ferrocarriles comprándolos a las compañías inglesas. La medida fue bastante controvertida ya que desde el punto de vista contable, los ingleses se beneficiaron con una alta indemnización sobre un equipo obsoleto y no rentable. Pero desde un punto de vista político, el control de los resortes claves de la economía de un país es de primera importancia (no se puede olvidar, por ejemplo, que toda la producción agropecuaria de la Argentina llegaba al puerto de Buenos Aires mediante la red ferroviaria). También se nacionalizaron otras áreas estratégicas como teléfonos (comunicaciones) y energéticos (YPF, Gas del Estado, electricidad). Estas medidas internas derivaban de una línea nacional que no buscaba el enfrentamiento con los importantes capitales ingleses, sino más bien su paulatino desplazamiento de ciertas esferas.

En 1949 hizo una reforma constitucional que consistió básicamente en la incorporación de un artículo que declaraba los recursos naturales como propiedad inalienable del Estado (inspirado en el artículo 27 de la constitución mexicana), el monopolio del comercio exterior en manos del Estado y la posibilidad de reelegir al presidente por dos periodos consecutivos. También se incluían disposiciones de derecho laboral y social.

Los sectores opositores se indignaron con la reforma, a pesar de que se había

hecho con elección democrática de los convencionales que la llevaron a cabo. Sin embargo, sostuvieron que todas las modificaciones eran una simple cortina de humo para disimular la verdadera causa de la misma: permitir la reelección presidencial. Su molestia y los hechos posteriores parecen dar vuelta el planteo y permiten pensar que fue la oposición quien usó su repudio a la reforma electoral como una verdadera cortina de humo: en primer lugar, el rechazo a una posible reelección indica que el voto mayoritario era peronista; en segundo lugar, esta misma oposición, después del triunfo de la Revolución Libertadora no derogó sólo la reelección, sino la reforma en su conjunto. Es evidente que las medidas concernientes al subsuelo y al comercio exterior no eran disposiciones intrascendentes para "rellenar" la reforma.

La relación con la oposición fue difícil y no se dio una convivencia de diálogo y tolerancia. Podría decirse que el gobierno peronista fue personalista y autoritario pero en verdad esta afirmación resulta una paradoja si no se la remite a que la verdadera expresión del autoritarismo en la Argentina se encarnó en el golpe de estado y en el fraude.

Sin embargo, es preciso apuntar que incluso el gobierno más democrático de los últimos 50 años (por la mayoría electoral con que contó, en elecciones sin fraude ni proscripción) no hizo gala de tolerancia ni de convivencia con las minorías. Aun contando con el apoyo incondicional de las masas, el peronismo tuvo fuertes rasgos de autoritarismo.

Las vacas flacas

Tanto la política económica como los intentos de democratización de las Fuerzas Armadas resultaban irritativos para los oficiales hijos de la gran burguesía agropecuaria, quienes en 1951 intentaron dar un golpe. El mismo, que estaba en-

cabezado por el general Menéndez y secundado por nombres que serían famosos en los años siguientes: Lanusse, Alsogaray, López Aufranc, fue abortado. El movimiento pretendía impedir la reelección que se daría al año siguiente. A raíz de este hecho se decretó el estado de guerra interno, que rompía el clima de normalidad institucional. No obstante, el gobierno aún se sentía imbatible.

Las elecciones que se celebraron en 1951 dieron un triunfo arrollador a la fórmula Perón-Quijano. Los resultados fueron los siguientes: Perón-Quijano 62.4 %, Balbín-Frondizi 31.8 %, otros 3.2 %, pese a que el año anterior se había planteado una situación económica más difícil y la baja del salario real. La consigna oficial era producir más; 1951 y 1952 también fueron difíciles para el agro, cuyas cosechas fueron malas.

Pero la adhesión al peronismo no se debía sólo a las mejoras económicas que presentó para las clases más bajas; otros elementos como la recuperación de la dignidad social, a través de la política social del gobierno, y la posibilidad de participación fueron decisivos en el apoyo popular. Lo político e ideológico jugó un papel tan importante como lo económico.

A lo largo de 1952, la conspiración creció. El gobierno intervino la Universidad, uno de los focos de reunión de la oposición. Otro, como ya se mencionó, era el constituido por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, aunque en su conjunto éstas permanecían ajenas.

La muerte de Eva Perón, en el mes de junio, cerró uno de los capítulos más irrisantes, que llegó a ser crítico durante la coyuntura electoral, en la que se agudizaron las presiones para impedir su candidatura a la vicepresidencia. Hay quienes clausuran con este hecho la etapa más popular del peronismo y atribuyen a la figura de Evita el papel de lazo, vínculo o intérprete entre el pueblo y el general. Parece poco verosímil puesto que aunque su figura era netamente popular y estaba muy asociada con el aparato sindical, el gobierno como tal poseía otros canales de comunicación como la propia estructura de la CGT. El bino

mio Perón-Eva podría encarnar, en cierto sentido, al binomio ejército-sindicatos, pero no por la desaparición de su figura se desvanecía o disminuía la importancia de la representación sindical. Resulta más pertinente buscar las razones de un cierto endurecimiento del gobierno en las dificultades económicas que llevaron a la formulación de un nuevo plan de estabilización, estructurado por Cafiero, y en las contradicciones de orden político que hacían crecer la oposición en sectores de la clase media.

Hacia 1953 el gobierno trataba de ampliar su base de sustentación. Una de las formas que instrumentó para ello fue la creación de la Confederación General de Profesionales, pero tal como señala Halperin Donghi, la medida se tomó demasiado tarde. El peronismo nunca logró hacer un símil de la poderosa CGT y ni siquiera alcanzó a obtener un respaldo discreto en los medios profesionales.

A su vez, la numerosa clase media resentía el deterioro de la situación económica y, como fenómeno secundario, se alarmaba por la escasez de artículos de uso cotidiano, provocada por la mayor demanda y también por la especulación y la mala cosecha. Llama la atención cómo las capas medias se espantan más por la ausencia de un artículo en el mercado que cuando el mismo está en los aparadores, aunque no puedan adquirirlo por su elevado precio (sobre todo si quienes se ven privados de tal consumo son los grupos de menor ingreso).

El gobierno parecía haber perdido la capacidad de captación de nuevos sectores y de vaciamiento del discurso adversario. Comenzaban a cristalizarse los campos, a agudizarse las contradicciones y se desencadenó la violencia.

En una concentración peronista, sectores de la oposición colocaron bombas que hirieron a muchos manifestantes. En respuesta, esa noche un grupo de desconocidos quemó el Jockey Club, reducto de las clases altas porteñas, la Casa Radical y otros locales de la oposición.

El gobierno trató de paliar las dificultades internas dando un giro en su politica internacional y tratando de resolver la situación crítica con Estados Unidos.

dos, que ya era entonces la potencia hegemónica en América Latina. Además, esperaba una ayuda económica que le permitiera regresar a una situación más holgada. Se firmó entonces la ley 14 222, de inversiones extranjeras, que permitía a las empresas transferir a su país de origen ganancias equivalentes a un 8 % anual, sobre el monto del capital declarado. La medida concedía al capital extranjero derechos que no se le habían reconocido hasta entonces pero, al mismo tiempo, seguía poniendo limitaciones que Estados Unidos consideraba poco satisfactorias.

La ley sirvió para que la oposición arreciara en sus ataques, puesto que afectaba al patrimonio nacional. Pero tampoco conformó a los norteamericanos, por las restricciones que contenía en sus cláusulas. Así pues, no satisfizo a nadie, ni sirvió para salvar las dificultades económicas.

Sin embargo, al año siguiente el gobierno firmó un contrato con la Standard Oil de California mediante el cual se otorgaba a esta compañía el derecho para desarrollar actividades de exploración y explotación petrolera. El peronismo comenzaba a permitir la penetración norteamericana, aunque no podía contar con el gobierno de los Estados Unidos como un aliado. De esta época datan la radicación de Fiat y Kaiser y, por cierto, un préstamo otorgado por el Eximbank para la instalación de SOMISA, importante planta metalúrgica.

El golpe gorila

La oposición no crecía numéricamente en forma significativa pero sus diferencias se profundizaban, especialmente a partir de las dificultades del gobierno. No obstante, no tenía expectativas de alcanzar la presidencia mediante la vía electoral, puesto que la población seguía siendo mayoritariamente peronista: las elecciones para vicepresidente celebradas en 1954 otorgaron al candidato oficial

el doble de los votos obtenidos por el postulante radical. Las fuerzas "democráticas" no confiaban en la democracia; sus esperanzas se cifraban nuevamente, como en 1943, en las Fuerzas Armadas que irían a sacarlas del atolladero.

Los políticos conspiraban acusando al régimen más que de fraude, de ser demagógico y dictatorial y de que sus maniobras y engaños impedían el triunfo de una verdadera democracia.

Oficiales de las Fuerzas Armadas impulsaban el levantamiento en el interior de sus filas, aunque gran parte de la jerarquía era adicta al gobierno. Sin embargo, en ciertos sectores de la oficialidad crecía una oposición sorda, que los mandos superiores pasaban por alto. Aun cuando ahirieran al gobierno, todos estaban asustados, entre otras cosas, por la intención gubernamental de romper o diluir la barrera jerárquica entre oficiales y suboficiales, permitiendo el paso de estos últimos a la oficialidad. La ruptura de la jerarquía interna representaba el caos y la pérdida de status. Una vez derrocado el gobierno, el contralmirante Rojas se refería a esto declarando ante los suboficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): "Los derechos nacen únicamente del deber bien cumplido y el desconocerlo sólo conduce a la indisciplina, el más temido mal de una fuerza armada... al producirse ascensos en masa e indiscriminados... tal procedimiento... constituye la ruina de las instituciones al nivelar los valores y las jerarquías, subalternizar las funciones y, a la postre, beneficiar los peores en detrimento de los mejores." ⁶ La ESMA había sido uno de los lugares donde la suboficialidad se había resistido tiroteando contra las tropas antiperonistas.

Al peligro de romper las jerarquías de las instituciones armadas minando su poder, se sumaba el desagrado por las amenazas (ya que nunca pasaron de ser esto)

⁶ Pedro Eugenio Aramburu, La revolución libertadora, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1956, Discurso pronunciado por el contralmirante Rojas ante los suboficiales de la ESMA, p. 178.

con formar milicias sindicales que privarían a los militares del monopolio de la fuerza que habían detentado hasta entonces.

Por otra parte, el bloque que había logrado formar el peronismo ya no expresaba objetivos válidos para la oficialidad, por el contrario, la movilización popular y su desafío a las instituciones era preocupante.

A todos estos conflictos se sumó, en 1955, el enfrentamiento entre Perón y la Iglesia. No es fácil explicar las razones que lo provocaron. Halperin Donghi desliza como posible causa la necesidad del gobierno de crear un oponente que unificara a la masa.⁷ Esa función, que habría cumplido primero la oligarquía y luego el imperialismo, debía ser ocupada ahora por un sector al que nuevamente se pudiera culpar de todos los males nacionales. Si esto fuera así, no se entiende por qué era necesario cambiar de "chivo emisario" en lugar de mantener las baterías dirigidas contra la oligarquía que ya era un enemigo irreconciliable. Parece poco probable que Perón, quien manejaba con mucha habilidad la política de las alianzas, se hubiera echado encima en forma gratuita a un enemigo tan poderoso y con tanta influencia social. No se puede olvidar que en la Argentina la Iglesia no estaba, ni está, separada del Estado y que tiene un gran poder económico. Resulta más coherente pensar que, a pesar del apoyo que siempre le brindó Perón, la jerarquía eclesiástica, profundamente ligada con las familias de la gran burguesía agroexportadora y por ende con los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas, habría participado en la conspiración. Perón respondió con proyectos de ley que significaban una verdadera amenaza para el poder de la Iglesia (separación de la Iglesia y el Estado, divorcio, equiparación de derechos de los hijos legítimos y los ilegítimos, supresión de la enseñanza religiosa). La Iglesia, que ya estaba en la conspiración, se lanzó a un ataque ostensible. Al revisar la propaganda que se distribuía en contra del gobierno e

⁷ Tulio Halperin Donghi, Argentina, la democracia de masas, Buenos Aires, Editorial Paidós.

instando al golpe, es evidente la mano clerical. El 94 % de los panfletos recopilados en el libro Los panfletos, su aporte a la Revolución Libertadora⁸, de 511 páginas, se refieren, sobre todo, a la persecución religiosa y a los ataques a la Iglesia. Los otros temas predilectos de esta propaganda son: la crítica contra el divorcio, la legalización de la prostitución y la posible corrupción e indisciplina en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), todas preocupaciones muy católicas por cierto.

Algunos de estos panfletos llegan a hacer un ataque directo a la colectividad judía e incluso uno de ellos reconoce en forma jactanciosa: "El radicalismo no puede ignorar que ha sido la reacción católica la que ha hecho tambalearse al régimen".⁹ El signo \dagger , que quería decir "Cristo vence", se convirtió en la contraseña antiperonista.

En el mes de junio se organizó una multitudinaria manifestación de Corpus que era en realidad un acto de protesta contra Perón. En ella ocurrieron oscuros episodios como la quema de una bandera nacional, probablemente un acto de provocación del propio gobierno. Cinco días después, en medio de una gran movilización oficial en desagravio a la bandera, estalló el primer levantamiento contra Perón, encabezado por la marina, que fue derrotado. Los rebeldes bombardearon la Plaza de Mayo, llena de gente, dejando un millar de víctimas civiles. La relación entre la Iglesia y estos sucesos es obvia. Esa misma noche, grupos civiles, probablemente de la CGT, incendiaban los templos de Buenos Aires. La violencia estaba desatada, la situación era irreversible.

Perón intentó buscar una distensión y ofreció el diálogo a la oposición, pero ésta, que se sentía cerca del triunfo, hostigó con más fuerza al gobierno. Se produjo un nuevo endurecimiento oficial, como reacción desesperada: Perón amenazó con una movilización que no sería capaz de mantener, con una organiza-

⁸ Félix Lafianra editor, Los panfletos, su aporte a la Revolución Libertadora, Buenos Aires, Editorial Itinerarium, 1955.

⁹ Ibid. p. 252

ción armada de los civiles que no tenía interés en crear y con una violencia que no quería desatar. En este marco se dieron los últimos días del gobierno, la consigna de "por cada uno de los nuestros caerán cinco de ellos", que sólo logró acelerar y cohesionar a la oposición.

El 16 de septiembre estallaba un nuevo movimiento militar, ahora sí dirigido por el ejército, requisito indispensable para el triunfo. En tres días la situación estaba definida a favor de los rebeldes más que por un apoyo activo, por indiferencia de importantes sectores militares.

Se cerraba el ciclo peronista que había representado para el país la integración de nuevos grupos a la vida política; la crisis del sistema representativo, que ya no era una garantía para las minorías liberales argentinas; y la intromisión en la esfera política de instituciones que no pertenecían a ella: por una parte, la "maldición nacional", que representaba para la burguesía la interferencia constante del sindicalismo con la política; y por otra, la reafirmación de la intromisión militar que se venía produciendo desde 1930.

El peronismo, como la restauración conservadora, fue un proceso abierto y cerrado por las Fuerzas Armadas; instancias toleradas hasta cierto punto y desarticuladas, por distintas razones en el momento en que resultaron amenazantes. Es importante notar que en ambos casos la ruptura se produjo ante la interferencia de la esfera civil con el poder militar. También en ambos, las Fuerzas Armadas actuaron con la suficiente autonomía como para intervenir en el momento y con la modalidad que indicaban sus propios intereses, con relativa independencia de otros sectores sociales. Esto no quiere decir que su accionar estuviera desvinculado de ellos, sino simplemente que no se movía en función de éstos o como brazo armado de los mismos.

Marco económico

Después de la crisis del 30, que significó una disminución de las exportaciones argentinas, el país promovió un proceso de sustitución de importaciones para crear industrias destinadas a satisfacer el mercado interno, las más importantes de las cuales fueron la de la alimentación y la textil. En el periodo correspondiente a 1925-1950, el 45 % de la expansión de la producción manufacturera correspondió a la elaboración de alimentos, bebidas y textiles, es decir a una industria liviana que aprovechaba la producción agrícola como materia prima. Sólo un 20 % del crecimiento industrial estaba orientado a las actividades metalúrgicas. Aunque esta industrialización ocasionó una transferencia de ingresos del sector agrícola al industrial, en un primer momento no afectó a los intereses de la gran burguesía agroexportadora que, de hecho, no podía ampliar su mercado externo en virtud de la situación internacional y que, por lo tanto, se introdujo en aquellas ramas de la industria que completaban su ciclo de producción, como la alimenticia. Por sus propias características, esta primera etapa de sustitución de importaciones no alcanzó a significar una verdadera industrialización de la economía, que siguió girando principalmente en torno a las actividades agrícola ganaderas. La situación fue variando con el crecimiento de la planta industrial y el cese de las políticas proteccionistas en Europa y Estados Unidos.

El año 1950 representó el inicio de una nueva etapa. Hasta ese momento las industrias líderes eran la textil y la alimenticia, productoras de bienes de consumo y con una baja composición orgánica del capital. El aumento de plusvalor se realizaba mediante la incorporación de mano de obra, lo que significa un uso extensivo de la misma.

En el periodo 1946-1950 disminuyó la tasa de plusvalor, aumentó el poder adquisitivo del salario (lo que incrementó las posibilidades de consumo) y se verifi

có una marcada tendencia al pleno empleo.

Según índices de Mónica Peralta Ramos, ¹⁰ la tasa de plusvalor pasó de 123.5 en 1944, a 74 en 1952, año en el que alcanzó el nivel más bajo; también se registró una disminución de la tasa de ganancia. Este deterioro se acentuó a lo largo de todo el gobierno peronista. Para lograr mejores porcentajes para los industriales sería necesario el reemplazo de mano de obra por capital. Pero dicha transformación económica suponía una política diferente en relación con la clase obrera, y por consiguiente un límite de la alianza vigente en ese momento, que incluía a obreros y a la burguesía industrial. La alianza entre esta clase social y el proletariado fue posible a partir de la propuesta de una industrialización sobre la hipótesis de la ampliación del mercado interno.

"La República Argentina produce en estos momentos el doble de lo que consume, es decir, la mitad de lo que produce sale al exterior. Yo me pregunto si cuando termine la guerra será posible seguir colocando nuestros productos en Sudáfrica, Canadá, Centro o Sudamérica, en competición con los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, etc. Cuando ya no sea posible exportar, si consumimos sólo el 50 %, ¿cuál será la situación de nuestra industria, de nuestra producción? Habrá una paralización del 50 %, y veremos a un millón de argentinos desocupados que no tendrán en qué trabajar ni con qué vivir. No habrá otro remedio que aumentar el consumo. Y el consumo, en una circunstancia tan extraordinaria como la que se nos va présentár, solamente podrá aumentarse elevando los sueldos y salarios para que cada uno pueda consumir mucho más de lo que consume actualmente y permitiendo que cada industrial, cada fabricante, cada comerciante, pueda a su vez producir lo mismo que hoy sin verse obligado a parar las máquinas y despedir a los obreros. Los organismos de estado se hallan abocados al

¹⁰ Mónica Peralta Ramos, Acumulación del capital y crisis política en la Argentina (1930-1974), México, Siglo XXI, 1978, p. 33.

estudio de estas posibilidades", según palabras del propio Perón. ¹¹

El proceso de industrialización ahora creciente y la redistribución de la riqueza en beneficio del sector asalariado y de sectores de la clase media se hacía a expensas del campo, mediante el control de la exportación a partir del IAPI (órgano oficial de exportación) y el control de precios en el mercado interno. Los precios oficiales del grano bajaron de un nivel de 100 en 1948, al de 64 en 1952. El proceso de disminución fue sostenido y constante; además se tuvo un estricto control de cambios.

A estas medidas que de por sí afectaban los intereses de la gran burguesía agraria se sumó la sanción del Estatuto del Peón, que tuvo un valor irritativo en términos políticos ya que en realidad no afectaba el poder económico de la oligarquía. También las nacionalizaciones tuvieron un signo sobre todo político. La compra de los ferrocarriles franceses e ingleses en 1946 y 1947, la adquisición de Teléfonos del Estado, la creación de Aerolíneas Argentinas en 1949, la nacionalización de una flota naviera privada (Dodero) en 1949, la Formación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la formación del ente estatal Empresas Nacionales de Energía, fueron medidas de contenido nacional impulsadas por la necesidad de reafirmar la soberanía nacional, más allá del acierto financiero que pudieran significar.

Una nueva forma de acumulación

A partir de 1950 se inició una segunda etapa. Desde ese momento, la industria metalúrgica asumió el liderazgo produciendo bienes intermedios, con alta composición orgánica. Se reemplazó parte de la mano de obra por capital, lo que dio lugar a una nueva forma de acumulación, que permitió elevar las tasas de ganan

¹¹ En Mónica Peralta-Ramos, op. cit., p. 80.

cia de plusvalor relativo. Este tránsito comenzó a ocurrir en pleno gobierno peronista y se aceleró después del golpe de estado de 1955.

Aumento de la composición orgánica del capital y disminución de la mano de obra durante el gobierno peronista

	1946	1955
Incremento stock capital	1.8 %	9.8 %
Incremento mano de obra	2.9 %	0.4 %

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op.cit., p. 26

Para garantizar la modernización y el reequipamiento de la industria que permitirían aumentar las tasas de ganancia y plusvalor fue necesario romper el "equilibrio" peronista y destruir el bloque social que lo sustentaba, mediante el golpe de estado. De hecho, a partir de 1956 se incrementó la capitalización de la industria con el liderazgo de la metalurgia.

Tasa de incremento anual acumulativo del stock de capital por tipo de industria

	1946-1955	1956-1965
Alimentos y bebidas	-1.2	9.1
Tabaco	1.1	4.3
Textil	1.8	6.9
Madera	-6.1	5.7
Papel	6.1	11.7
Imprenta y publicaciones	-1.2	7.9
Productos químicos	5.2	7.1
Petróleo y derivados	4.7	17.3
Caucho	8.8	10.3
Cuero	-1.8	7.1
Piedra, vidrio, cemento	-1.2	3.1
Metales	9	10.9
Vehículos y maquinaria	2.3	12.5
Maquinaria eléctrica y aparatos	8.5	16
Varios	-4.1	4.8
Total industria manufacturera	1.8	9.8

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op.cit., p.27

Con el aumento de las tasas de capitalización industrial, disminuyó el crecimiento de la población obrera en la industria manufacturera, como puede verse en el cuadro siguiente:

Tasa de incremento anual acumulativo de la población obrera en la industria manufacturera

	1946-1950	1950-1955	1956-1961
Total ind. manufacturera	4.8	1.5	0.4
Industrias dinámicas	8.8	4.5	2.8
Sector metalúrgico	10.9	5.8	3.8
Industrias vegetativas	2.1	-0.7	-2.2
Alimentos y bebidas	4.4	0.9	-1.2

Fuente: Mónica Peralta Ramos, *op. cit.*, p. 30

A partir de 1950, los conflictos económicos se agudizaron a raíz de una política redistributiva que, además, se había acompañado de una disminución de las tasas de ganancia. La posibilidad de un financiamiento externo para lograr la modernización de la anticuada planta industrial parecía una buena alternativa puesto que las bajas tasas de ganancia no permitían realizarla con la acumulación interna. Además, el indiscutible papel hegemónico alcanzado por Estados Unidos y la creciente presión del capital extranjero limitaban los alcances de una política nacional, o la forzaban a un enfrentamiento radical.

En 1953 el gobierno firmó la ley de inversiones extranjeras. Aunque no era todo lo permisiva que hubieran deseado las empresas foráneas se registró un nivel más alto de participación de los capitales norteamericanos, que en el periodo 1954-1963 representaron el 56 % del total de las inversiones con una alta composición orgánica del capital.

La caída del peronismo significó la aceleración de este proceso, la modernización de la industria, con una mayor composición orgánica y más alta tecnología, junto al aumento de los índices de desocupación. Las fluctuaciones salariales quedaron libradas a la productividad y se acentuaron las diferencias salaria-

les entre las ramas más calificadas y las más tradicionales, tal como se puede ver en el cuadro siguiente:

Evolución de los salarios obreros por hora y a precios corrientes

	Industria de la alimentación (oficial)	Industria metalúrgica (oficial)	Diferencia
1948	1.88	2.29	21.8 %
1955	4.88	6.15	26 %
1966	92.40	124.42	34.6 %

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 54.

La política redistributiva del peronismo, los bajos precios internos y las tasas de cambio estables había conducido a una crisis en la balanza de pagos. Para restituir su equilibrio se requería de una devaluación. La nueva situación rompía la alianza entre la burguesía urbana, las clases medias y los sectores populares para pasar a emblocar a la gran burguesía urbana con la agroexportadora. Sin embargo, este nuevo frente también sería efímero.

Los partidos políticos

El período que estamos analizando se caracteriza por la complicidad de los partidos políticos con los distintos golpes de estado y por el surgimiento del movimiento peronista en la escena política argentina.

Hablar de golpes de estado es, normalmente, hablar de las Fuerzas Armadas, pero en Argentina, desde 1930, significa referirse también a los partidos políticos.

Apoyándolos, incitándolos o esperándolos, el juego de las distintas fuerzas políticas ha estado entretejido con los numerosísimos intentos de golpe, exitosos o no.

Apenas cuatro días después del golpe militar de 1930, la Corte Suprema de Justicia legitima a las nuevas autoridades sin que le pesara el hecho de que sólo dos años antes, el 1928, la Unión Cívica Radical gobernante había obtenido el 57.41 % de los votos y la fracción antipersonalista el 10.63 %. Es decir que entre las dos vertientes el radicalismo se repartía casi el 70 % del electorado nacional.

El Partido Conservador, con fuertes vinculaciones con las Fuerzas Armadas, y representante de la gran burguesía terrateniente y ganadera había instigado el golpe ante su incapacidad para ganar al electorado. Pero esta práctica violenta no fue privativa de una minoría desplazada de la representación política a pesar de su real poder económico. Al año siguiente, los radicales, que representaban fundamentalmente a los sectores medios, ya estaban conspirando y realizaron su primer intento de golpe fracasado, que se repitió en 1932 y 1933.

Tanto radicales como conservadores, las dos fuerzas políticas de peso en los años 30, parecían confiar más en el poder de las armas que en el que pudiera asentarse en las vías democrática e institucional. Los años siguientes, conocidos como la década infame, están marcados por el fraude electoral, otra práctica común a un estilo autoritario.

El golpe de 1943, aunque independiente de los políticos, había sido incitado por los radicales, como ya se explicó. Aunque los militares hayan actuado por su propia cuenta, es indudable que las solicitudes de los políticos les permitirían contar con un consenso para su intervención, o cuando menos suponerlo. Los radicales instaban a un golpe y los conservadores también se acercaban al medio castrense pero para buscar el respaldo al gobierno. Los partidos requerían que las Fuerzas Armadas los auxiliaran.

Es preciso señalar que en ese momento ambos nucleamientos enfrentaban una marcada debilidad interna.

Los radicales, partido mayoritario y nacido de las clases medias urbanas, se encontraban divididos entre una conducción alvearista (que se había aproximado paulatinamente a los conservadores en el gobierno) y el sector yrigoyenista que criticaba la alianza de su partido con el grupo gobernante. Esta escisión interna también reflejaba posiciones diferentes en relación con el conflicto mundial. El alvearismo era aliadófilo y tendía a una aproximación a los Estados Unidos para lograr un reacomodo en la nueva situación internacional.

El yrigoyenismo, además de sustentar la vertiente más nacional y popular, proponía la neutralidad con respecto a la guerra.

Estas diferencias hacían perder cohesión al agrupamiento que además se veía exento de un líder que lo unificara. Se fraccionaba así el partido radical, que en las elecciones de 1937, a pesar del fraude evidente, había alcanzado el 40.02 % de los votos, contra un 53.77 % que se atribuían los conservadores.

Por su parte, estos últimos también habían perdido su unidad interna a partir del desgaste de diez años de mal gobierno y fraude vergonzoso, criticado por sectores del propio partido. Otra circunstancia desfavorable era el aislamiento que les iba creando su reticencia a adherir a los sistemas panamericanos impulsados por los Estados Unidos. Además carecían de líderes importantes que asumieran la conducción.

Con el golpe de 1943 los militares llenaban un espacio que los partidos no estaban en condiciones de ocupar por su estado de debilidad y las contradicciones internas que los afectaban. No era el momento de ascenso de un proyecto político que los militares consideraran peligroso para el orden, sino más bien un momento de carencia de proyectos. Este vacío, que hacía riesgosa la situación, a los ojos del ejército, en una coyuntura mundial que consideraba inestable, fue el que vino a llenar, de hecho, el golpe del 43; más adelante y con más proyección lo haría el movimiento peronista. La connivencia del radicalismo con

los conservadores había desradicalizado la ideología de aquel partido, para formar una suerte de coalición que desplazaba a un segundo plano los antagonismos del electorado. Las conducciones estaban constituidas por miembros de las clases altas y no representaban a las clases o sectores de clase que habían dado origen al partido. Como consecuencia directa las bases se desmovilizaron. Si esto ocurría con el partido mayoritario, el panorama entre los conservadores no era más alentador. A pesar de representar socialmente a la clase dominante, el partido había perdido su capacidad de nuclear a otros sectores a través de su discurso; había perdido su condición de hegemonizar a la sociedad y por ello se veía obligado a un fraude que le asegurara lo que no podía alcanzar mediante el consenso.

Se podría tomar aquí el planteo de Offe, quien sostiene que los partidos políticos cuando entran en crisis se ven superados y desplazados por otras prácticas y procedimientos de participación como los movimientos sociales, el corporativismo y la represión (como fenómeno que tiende a pasar por alto el sistema de partidos).¹² Por eso el peronismo no surgió ni se caracterizó a sí mismo como un partido político sino como un movimiento de masas, inorgánico, cuya única estructura y autoridad era el propio Perón. Su identificación de clase fue clara y rápida y la movilización una de sus principales armas. Los partidos no entendían esta nueva dinámica e insistieron en asimilarla a los modelos europeos, siempre cuidadosamente estudiados por la partidocracia argentina. Enseguida encontraron similitudes con el fascismo: existía un líder carismático que hablaba de colaboración de clases, arrastraba masas y hacía gala de demagogia; para como se declaraba nacionalista. Estos elementos bastaron para persistir en esa caracterización, sin reparar en las medidas económicas concretas ni en las reivindicaciones sociales y políticas.

¹² Claus Offe, Las contradicciones de la democracia capitalista, cuadernos políticos, num. 34, México, Ediciones Era, p.13.

"Cuanto menos ortodoxamente facista se mostraba, más arreciaban las protestas contra su facismo, que hacía impensable reconocerle un lugar legítimo en el marco de la futura restauración democrática", dice Halperín Donghi refiriéndose a Perón. 13

Los partidos funcionaron una vez más como instigadores de la acción militar y exigieron a las Fuerzas Armadas la prisión de Perón desencadenando el 17 de octubre, con lo que sólo lograrían que se manifestara el alto apoyo popular que había conseguido el coronel y la propia incapacidad para controlar la situación. Una vez en la coyuntura electoral, las fuerzas políticas se movieron como atraídas por el discurso de su adversario. La izquierda y la parte mayoritaria del partido radical se mostraron más temerosas del discurso peronista, por los elementos ideológicos próximos al facismo, que de concretar una alianza con los conservadores, partido históricamente oligárquico. Por su parte, el ejército y la Iglesia, aunque temían las veleidades populares del coronel, se alarmaron más ante la Unión Democrática, que incluía a grupos con un discurso liberal de izquierda, sin considerar que el control real del mismo quedaba en manos de radicales y conservadores alvearistas, que asegurarían el no cumplimiento de su explosivo programa.

Al darse las elecciones, con el consecuente triunfo peronista, el frente electoral se disolvió. La oposición en su conjunto no creció pero mantuvo un caudal electoral estable que durante los diez años siguientes representó a un tercio del electorado, nucleado tras los candidatos radicales. En las elecciones presidenciales de 1951, éstos obtuvieron el 31.81 % de los sufragios y se convencieron de que no podrían ganar el gobierno mediante el voto popular. Además, no estaban dispuestos a esperar un nuevo periodo presidencial. La conspiración ya había empezado y desde entonces se acentuó.

13 Tulio Halperín Donghi, op. cit., p. 41.

Pareciera ser que los partidos políticos argentinos vieron en lo que llamaban demagogia un peligro mayor para las instituciones democráticas que en las prácticas del fraude, la proscripción y la intervención militar. En 1955, una vez más los políticos pedían el auxilio de los militares para salvar la democracia y desalojar a un gobierno elegido por voto mayoritario. Esta vez los radicales hacían con sus adversarios lo que 15 años antes le habían hecho los conservadores a su último caudillo.

Los sindicatos

La Confederación Nacional de Trabajadores (CGT) había sido fundada en 1930, poco después del golpe contra Irigoyen, en un momento difícil tanto política como socialmente. La clase obrera no era numerosa, pero poco después, entre los años 1936 y 1945, llegaron a Buenos Aires alrededor de un millón de personas provenientes del interior del país, gran parte de las cuales se incorporó a la industria. Esta migración interna favoreció un proceso de "nacionalización" de la clase obrera, hasta entonces conformada por una gran cantidad de inmigrantes europeos.

Hacia 1943 el sindicalismo se encontraba dividido en dos centrales: la número 1, que nucleaba a la Unión Ferroviaria, y la número 2 en la que se reunían socialistas y comunistas. Era un sindicalismo cauteloso que, ni por su organización ni por sus objetivos, constituía una alternativa de movilización o lucha.

Los dirigentes sindicales estaban fuertemente subordinados a las directivas del partido al que pertenecían, que no les dejaba ninguna libertad de acción.

Después del golpe de 1943, Perón desarrolló una política hacia los sindicatos, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Los cambios que se estaban produciendo internacional y nacionalmente en el mundo laboral, la próxima posguerra

y, a nivel nacional, la vinculación de los sindicatos más fuertes con los partidos de izquierda representaban signos de alarma. Era necesario tomar medidas que impidieran un desborde de la situación. La primera de ellas fue impulsar un reparto más equitativo de la riqueza, lo que suponía cierta justicia social. Otra fue proveer a la clase obrera de organismos de representación que le fueran propios y, por lo tanto, conjuraran el peligro de los agitadores de izquierda. Según palabras del propio Perón "el seguro (contra la agitación social es) la organización de las masas... ya que el Estado organizaría el reaseguro, que es la autoridad necesaria". 14

Para lograr una corriente sindical favorable, Perón partió de una actitud de aproximación a todos los sectores, diferenciándose en principio, de la dureza oficial, que recurría a la intervención de los sindicatos de izquierda. Así restituyó en la Unión Ferroviaria intervenida a dirigentes desplazados de sus cargos; también se entrevistó con los líderes socialistas de la CGT 2, disuelta por el gobierno militar. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión desarrolló una labor de concesiones, presiones, promesas y conquistas que le fueron abriendo un espacio en el mundo sindical, a la vez que diferenciaban su actitud de la del conjunto del gobierno. Así fue como consiguió primero la adhesión de ciertos dirigentes, muchos de ellos provenientes del socialismo, y luego el apoyo de las bases. Para los dirigentes sindicales, acostumbrados a una gran dependencia de los cuadros políticos de los partidos (en especial los socialistas), e incapaces de obtener conquistas importantes para sus representados en virtud de la política dubitativa de sus conducciones, el peronismo les ofrecía un espacio propio y la concreción de viejas reivindicaciones.

Los primeros sindicatos que adhirieron al peronismo nucleaban más bien a empleados que a obreros; tal era el caso de los empleados de comercio, los empleados de prensa y los trabajadores del Estado. Esto desecha la hipótesis de que el pe

14 En Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, 1943-1973, Buenos Aires, Emecé Editores, 1982, p. 50.

ronismo se asentó sobre un proletariado recién llegado a la ciudad, deslumbrado por el discurso peronista dada su inmadurez política y sindical. Más bien parece que los elementos sobre los que se asentó el primer respaldo sindical fueron las conquistas concretas, la posibilidad de contar con un espacio propio y el hartazgo del sindicalismo tradicional.

Una vez instalado en el gobierno, el peronismo abrió enormes posibilidades a los sindicatos. La sindicalización se hizo obligatoria y llegó a ser masiva. Las cuotas de afiliación se descontaban directamente del sueldo de los trabajadores. De 528 523 afiliados con que contaba la CGT en 1945 pasó a tener 1 500 000 afiliados hacia fines de 1947 y 3 000 000 en 1951. ¹⁵ Además, la situación de pleno empleo daba a los sindicatos una mayor capacidad de presión. Se crearon federaciones únicas, centralizadas y fuertes. "Los sindicatos obreros necesitan estar profundamente unidos y ser con esa unidad poderosos para la defensa de sus intereses: deben estar persuadidos de que esa defensa nadie la hará mejor que ellos mismos", decía Perón en 1946. ¹⁶

La fuerza organizativa, junto a la capacidad económica daba a las organizaciones sindicales un poder real, al mismo tiempo que su centralización, las hacía controlables por parte del Estado.

El gobierno favorecía el poder del sindicato y se fortalecía con su apoyo. "Lo fundamental es que se mantengan organizados los cuadros sindicales, porque de ese modo podemos tener una seguridad -la única, por cierto- de respaldar cualquier acción contra la antipatria", así lo expresaba Eva Perón. ¹⁷

Las estructuras gremiales se construyeron de manera vertical y fuertemente cen

¹⁵ Miguel Murmis, Juan Carlos Portantiero, Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974, p. 81.

¹⁶ Juan Domingo Perón, Habla Perón, Buenos Aires, 1949, p. 121.

¹⁷ Eva Perón, Historia del peronismo, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1953, p. 109.

tralizada: nacía la burocracia sindical, a imagen y semejanza de una sociedad autoritaria en su conjunto. Este sindicalismo, cuya fuerza y unidad se forjaron al abrigo peronista, fue unánimemente partidario del gobierno; su eficacia para obtener reivindicaciones concretas le granjeaba un apoyo significativo de las bases.

Después de 1950, y a medida que aumentaron las dificultades económicas, el espacio reivindicativo se redujo pero aun así se mantuvo la adhesión política al gobierno. No obstante es de esa fecha que datan los primeros enfrentamientos oficiales con algunos sindicatos o fracciones de ellos. Los más significativos fueron la huelga bancaria de 1950, que terminó con algunos detenidos y 2 000 cesantes y la huelga ferroviaria de 1951 que fue reprimida por la policía. Estos hechos marcan la existencia de una oposición, pero a pesar de ellos el sindicalismo como conjunto mantuvo su identidad peronista hasta la caída del gobierno. Hasta tal punto fue así que en 1955, poco después del primer intento de golpe, la CGT propuso al ejército una acción conjunta para defender al gobierno, iniciativa que obviamente no prosperó. Sin embargo, los sindicatos estaban dispuestos a actuar y, hasta último momento, pidieron armas, que nunca obtuvieron, para defender al gobierno peronista.

A la caída del peronismo, aunque semiclandestina, quedaba en pie una estructura que nucleaba a toda la clase obrera industrial, con poder económico y con una organización vertical y disciplinada que garantizaba que una directiva dada desde Buenos Aires se cumpliera al unísono en todos los puntos del país. Este aparato sindical había probado y conocía el poder. En la cúpula se enquistaban dirigentes que defendían más su propia cuota de poder político y económico que las bases a las que decían representar. Hacia adentro florecía el autoritarismo en su versión sindical: el matonaje.

Las Fuerzas Armadas

Las contradicciones internas

Al hablar de las Fuerzas Armadas de un país se cae con frecuencia en la suposición de que se está aludiendo a un conjunto homogéneo. Esta idea es falsa, por lo menos en el caso argentino, ya que en el aparato militar se pueden diferenciar distintas tendencias políticas. En primer lugar, es necesario distinguir entre las diferentes armas.

La marina se caracteriza por una posición liberal, de un liberalismo elitista muy propio de la oligarquía argentina, cuya raíz se encuentra en la ligazón de esta arma con las grandes familias. Por lo mismo, la institución se formó tratando de reproducir los modelos de la armada británica que acentuaron en ella valores de tipo liberal. Estos, al pasar por el filtro militar y, sobre todo, por su contenido de élite tomaron un matiz eminentemente autoritario.

La fuerza aérea, nacida durante el peronismo, está conformada por individuos de extracción social más baja. Se identifica ideológicamente con el nacional catolicismo, un nacionalismo de derecha con fuerte influencia facista. Es comparativamente débil tanto por su escaso poderío en equipo y personal, como por la falta de una historia y tradición institucionales.

El ejército, el arma más poderosa, reúne en su seno una gama de tendencias políticas que van desde las posiciones liberales más o menos democráticas hasta el nacionalismo de derecha más radical, pasando por el corporativismo, el industrialismo tecnocrático y otras variantes. Cada una de ellas adquiere mayor o menor relevancia según las coyunturas por las que atraviesa el país. Es el arma con más poder económico y con mayor número de efectivos por lo que juega un rol determinante en relación con el conjunto. La amplia gama política que se encuentra en él expresa por una parte lo extenso de su estructura pero también el

acceso que a ella tienen individuos provenientes de diferentes estratos. Alrededor del 42 % de los candidatos admitidos en el Colegio Militar entre 1967 y 1970 eran hijos de militares, pero sólo una parte de ellos lo eran de oficiales. El 13.6 % de los aceptados eran hijos de suboficiales, es decir que a éstos la carrera militar les ofrecía una oportunidad de ascenso social.

Hijos de militares en el Colegio Militar

		1967	1968	1969	1970	Total
Hijos de oficiales	Tierra	98	102	93	91	384
	Aire	4	7	4	4	19
	Marina	1	4	5	2	12
	Gendarmería	5	5	8	3	21
	Total	108	118	110	100	436
Hijos de suboficiales	Tierra	36	53	50	39	178
	Aire	4	3	3	4	14
	Marina	2	3	1	5	11
	Gendarmería	1	0	6	1	8
	Total	43	59	60	49	211
Total de hijos de militares		151	177	170	149	647
Total admitido		363	421	437	323	1544

Fuente: Alain Rouquié, op.cit. p. 328.

Además, los jóvenes provenientes de la clase obrera y la clase media baja alcanzaron a representar en el mismo periodo al 25.7 %. Si esta cifra se suma a la de hijos de suboficiales, se encuentra que casi el 40 % de los aspirantes admitidos provenía de medios socialmente bajos. En el conjunto se encuentran representados hijos de obreros, obreros calificados, técnicos, funcionarios, pequeños comerciantes, suboficiales, sectores acomodados y oficiales, prácticamente todo el mosaico social. No contamos con datos referidos a 1943, pero sabemos que ya por entonces el ejército había perdido su condición "elegante" de los a

ños 30. Ninguno de los oficiales golpistas del 43 tenía apellidos ilustres. Esta amplitud social de la estructura del ejército, profundizada durante el periodo peronista, dio base a la proliferación de diversas corrientes políticas en su seno.

Los estratos populares civiles en el Colegio Militar

Año	Técnicos funcionarios de ejecución, maestros, pequeños comerciantes	Obreros calificados	Obreros no calificados	Peones	Total admitido
1970	70	8	-	-	323
1969	97	15	3	1	437
1968	90	7	3	-	421
1967	96	8	-	-	363
	353	38	6	1	1 544

Fuente: Alain Rouquié, op.cit., p. 333.

Las diferencias entre el ejército, la armada y la aeronáutica no son las únicas que rompen una imaginaria homogeneidad castrense. Aun dentro de cada arma hay diversos sectores que pugnan por obtener el poder del aparato militar. En el ejército, la lucha entre la infantería y la caballería expresan diferencias de clase en el seno de la institución. La segunda, en la que se nuclean los hijos de los grandes hacendados, se identifica con un conservadorismo tecnocrático, que intenta "modernizar" al país. Durante muchos años fue el arma más homogénea dentro del ejército y tuvo un papel preponderante en la conspiración contra Perón y en todo el periodo 1955-1966. La infantería está conformada por individuos provenientes de las capas medias. Se dice que es más popular por estar en contacto con la masa de reclutas, verdadero muestrario del conjunto social argentino. Tuvo su ascenso durante el gobierno peronista, al que le dio su apoyo,

y declinó con él.

Estas disputas no siempre se mantienen al nivel de simples contradicciones internas, sino que trascienden al ámbito nacional y han llegado a ocasionar enfrentamientos abiertos en la lucha por el control político del país, como ocurrió en la pugna entre azules y colorados, en 1961.

Sin embargo, a pesar de éstas y otras diferencias internas, las Fuerzas Armadas logran en cada coyuntura unificar posiciones detrás de la variante más probable o más poderosa (no necesariamente la más numerosa) y son capaces de ofrecer una imagen homogénea gracias a ciertos mecanismos propios, relacionados con la disciplina, pero que no se agotan en ella.

Crecimiento del poder militar

El proceso de gestación del poder militar se remonta a principios de siglo, pero cobra mayor fuerza durante el periodo que nos ocupa.

Hacia fines de la década del 30 el potencial bélico de una nación cobraba una gran importancia; se acercaba la Segunda Guerra y el futuro de los países dependería de su ubicación durante la contienda y después de ella. Los militares argentinos querían mantener una posición hegemónica en América del Sur, única forma de garantizar la defensa nacional pues el crecimiento de Brasil ponía en peligro el liderazgo del país y también su propia seguridad territorial. El fantasma, con visos de realidad, de la ocupación del territorio argentino por los brasileños seguramente nació en esa coyuntura y persiste hasta el presente. Al respecto, no se puede olvidar la ocupación real de territorio ni la incitación de Estados Unidos (a la que alude Miguel Angel Scenna) para que Brasil invadiera al país, en castigo a su inoportuna neutralidad.

Lo cierto es que la situación internacional imponía un reequipamiento militar.

Entre 1937 y 1947 el ejército duplicó su personal. En 1940, apenas iniciado el conflicto mundial, el presidente Ortiz elevó un proyecto presidencial al congreso para la creación de Fabricaciones Militares (FM). Al año siguiente se designó al nacionalista coronel Savio como primer director de la flamante empresa. La creación de F.M. daba por primera vez a las Fuerzas Armadas una base económica propia, hecho fundamental para que un grupo sea vocero de sí mismo antes que de otros.

El crecimiento del poder económico militar fue gradual y, de 1943 en adelante, coincidió con el proyecto de industrialización nacional. Fabricaciones Militares llegó a participar en múltiples ramas de la producción como la automotriz, la mecánica, la química, la química pesada, las construcciones mecánicas, la industria aeronáutica y la maquinaria agrícola. También se abocó a la formación de sociedades mixtas, como en el caso de SOMISA, primera siderúrgica del país y Atanor, de la industria petroquímica, que explota una licencia de Geigy y de la que se crearon filiales fuera del país. Otra actividad fundamental que pasó a estar controlada por los militares fue la petrolera puesto que el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) quedó en sus manos.

En 1954 se creó el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas que estudia, entre otras cosas, asuntos relacionados con los energéticos, investigaciones geológicas y la localización de yacimientos.

Para 1955 existían en el país 14 fábricas militares que ocupaban 20 000 asalariados, con un promedio de 1 428 obreros por fábrica lo que da una idea de la magnitud de las plantas (en 1937 sólo el 0.6 % de los establecimientos contaba con más de 250 obreros).

El desarrollo de Fabricaciones Militares permitió el reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que les dio acceso a las diferentes esferas de la economía, sobre todo en la producción de tipo estratégico e infraestructural

Así pues, el año 40 marcó el inicio de un proceso ascendente de acumulación de poder económico por parte de los militares.

El GOU

Poco antes del golpe de 1943 se constituyó el Grupo Obra de Unificación (GOU). No era la primera vez que se formaba una logia dentro del ejército. Es más, ésta era la modalidad más frecuentemente adoptada para canalizar la intervención militar en la política.¹⁸

Los estatutos del GOU proponían la unificación del ejército, el respeto a la jerarquía y la disciplina, la prescindencia política fuera del arma y el apoyo a la obra del gobierno militar. Las obligaciones de sus miembros eran la defensa del ejército, del servicio, del mando, de los cuadros, la defensa contra la política y la defensa contra el comunismo. En suma, era una estructura de respaldo a las Fuerzas Armadas y al proyecto de 1943. "Las derivaciones de la política moderna... han traído como consecuencia la necesidad de que los ejércitos lleguen a penetrar, más que la política misma, los designios de los políticos que ponen en peligro la existencia misma del Estado y del Ejército", rezaban sus estatutos. El GOU intentaba favorecer esa penetración. Tenía una propuesta para las Fuerzas Armadas y la hacía explícita, aunque no era capaz de mayores precisiones.

El grupo estaba constituido mayoritariamente por coroneles, el más alto grado jerárquico con mando de tropa en forma directa. Se trataba de gente relativamente joven y que contaba con una formación política además de militar. Esta doble

¹⁸ Rogelio García Lupo, en su libro La rebelión de los generales hace un análisis detallado de cada una de las múltiples logias que se formaron en la historia del ejército argentino.

cualidad de ser oficiales - políticos tal vez fue la clave para que llegaran a tener gran influencia en un momento en que, precisamente, el ejército se proponía asumir este tipo de conducción. Sin embargo su ideología era heterogénea, aunque los "teóricos" de la logia pertenecían al grupo nacionalista de derecha, que era minoritario.

El GOU se presentó a sí mismo como gestor del golpe de 1943, aunque en realidad sólo constituía entonces un grupo pequeño. El hecho de atribuirse un papel protagonista tendía precisamente a ganar una influencia mayor dentro de las filas castrenses. El 8 de noviembre de 1943, en una entrevista concedida al diario El Mercurio de Chile, Perón declaraba: "El ejército argentino cuenta con más o menos 3 600 oficiales combatientes. Pues bien: todos, con excepción de unos 300 que no nos interesan, estamos unidos y juramentados; todos tenemos firmados ante el ministro de Guerra las respectivas solicitudes de retiro. En mi fichero las tengo todas." ¹⁹ Como es obvio, nadie quería pertenecer al ^{supuesto} grupo de los 300 marginados por lo que las incorporaciones aumentaron. El hecho de exigir, en efecto, las renunciaciones en blanco permitiría la colocación de los hombres de confianza en los puestos claves. Al mismo tiempo, como la organización se proponía llegar a las distintas guarniciones, pudo tener una influencia a nivel nacional. Se ha presentado al GOU como una especie de secta todopoderosa en la que se apoyó Perón para su acelerado ascenso. Sin embargo, la logia nunca dejó de ser un grupo pequeño y con menos capacidad de decisión de la que se cree. Su influencia sobre el vasto aparato militar obedeció sin duda al hecho de brindar cierta unidad a un conjunto que aunque carecía de ella se proponía llevar a cabo una acción de gobierno. A su vez los coroneles, con todas sus indecisiones, ofrecían una propuesta política en un medio ávido de ellas. La necesidad de una industrialización, la unión a los países chicos, el rechazo a la doctrina Monroe

¹⁹ En Rogelio García Lupo, La rebelión de los generales, Buenos Aires, Jancana, Ediciones, 1963, p. 57.

y la neutralidad ante la Segunda Guerra eran las alternativas que proponía el GOU y que podrían nuclear en ese momento a una buena parte de la oficialidad. Perón, como el más brillante de los coroneles, tuvo un papel protagónico en la formación de la logia y es indudable que los contactos que allí obtuvo fueron muy importantes en su carrera posterior. Sin embargo, sería pueril adjudicar su rápido ascenso al oculto poder del GOU. Las razones del mismo se deben buscar antes en circunstancias políticas que en las conspirativas.

Fuerzas armadas y peronismo

Después del golpe de 1943, se produjo una militarización de la sociedad propia de los gobiernos de facto. Una de las consecuencias inmediatas fue el aumento de los gastos militares en relación con el presupuesto nacional. Este incremento, propio de un mundo en guerra, fue sin embargo superior al promedio de América del Sur, aunque estuvo muy por debajo del de Brasil, la potencia competidora.

Gastos militares anuales (en % del presupuesto nacional)

	Argentina	Brasil	Promedio de A. del Sur
1940	16.9	25.5	16.4
1941	17.9	25.3	20.0
1942	22.8	34.8	23.3
1943	27.0	45.2	24.7
1944	34.4	44.1	26.3
1945	38.4	34.8	25.8

Fuente: Alain Rouquié. op. cit., p. 310.

Pero no sólo los militares se vieron beneficiados con el nuevo reparto. El sector asalariado también obtuvo ciertas ventajas en nombre de una política de justicia social y a cambio de que existiera una disciplina de trabajo. La evolución del salario real se puede observar en el cuadro siguiente:

Salario real, 1939=100

	Obreros calificados	Obreros no calificados
1940	100.89	100.40
1941	101.26	100
1942	104.18	103.69
1943	109.50	115.34
1944	120.89	135.18
1945	120.89	134.82

Fuente: Miguel Murmis, Juan Carlos Portantiero, op. cit., p. 106.

Sin embargo, el crecimiento de los gastos militares en el periodo 43-45, representa un 40 %, mientras que el incremento del salario real sólo llega al 10 % en el caso de los obreros calificados y al 16 % en el de los no calificados. El ascenso de Perón representó la reducción de los elementos represivos, para favorecer el crecimiento de organismos de masas centralizados y controlados por el aparato estatal. Pero no por ello relegó a las Fuerzas Armadas, que fueron uno de los puntos de apoyo de su gobierno. En su periodo se equipó y modernizó al ejército, al mismo tiempo que aumentó el número de sus efectivos. Sin embargo, los gastos militares anuales en relación con el presupuesto nacional pasaron de representar el 36 % en 1946 al 19.1 % en 1955. Su disminución fue paulatina, a medida que se iba desechando la posibilidad de un nuevo enfrentamiento mundial, y se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Inversión bruta del gobierno nacional, en porcentajes del total

	1945-46	1947-51	1952-55
Defensa nacional	51	24	10
Viviendas, sanidad y otras inversiones en serie	15	18	13
Transporte	26	27	29
Energía y comunicaciones	3	17	24
Agricultura	1	1	2
Industria	1	2	6
Otras	3	11	16

Fuente: Alejandro Díaz, Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1970, p. 121.

No obstante, el sector militar siguió siendo privilegiado en sus ingresos y Pa rón trató de mantenerlo como aliado, cosa que logró. La jerarquía castrense fue una permanente adicta al gobierno, aunque su adhesión se hizo más pasiva a medida que aumentaba el descontento interno.

La reducción a nueve años del tiempo necesario para llegar a las máximas jerar quías creo cierto malestar, ya que aunque se agilizaba la carrera militar tam bién aumentaba considerablemente el número de oficiales en situación de retiro. Pero el elemento más irritativo fue la política de democratización interna. El gobierno facilitó, mediante la adjudicación de becas, el acceso al Liceo Militar de jóvenes provenientes de sectores populares. Aunque la carrera militar ya era un medio de ascenso social, el acceso de un gran porcentaje de aspirantes prove nientes de capas bajas de la población amenazaba con destruir el status de la institución. También creo conflictos con la adjudicación de innumerables bene ficios para los suboficiales, que fueron diluyendo la neta diferenciación jerár quica existente. Aunque nunca se llegó a concretar, el gobierno proyectaba inau

gurar un sistema que permitiría a la suboficialidad acceder a los rangos superiores. Estas medidas no tendían a minar la estructura militar sino a cambiar su signo de clase, para hacerla representativa de los sectores medios, más proclives a la política oficial.

La conformación del ejército incluía a los hijos de suboficiales o de individuos provenientes de los sectores medios que buscaban lograr, mediante su carrera, un ascenso social. A su vez, en los rangos superiores y en los puestos de mando predominaban sujetos provenientes de las familias tradicionales, lo que era aceptado por un conjunto que trataba de acceder, o por lo menos de acercarse, a ese nivel social. El control del aparato militar por parte de una élite minúscula fue posible gracias a una estructura piramidal que cuenta con un bajísimo porcentaje de oficiales superiores en relación con la base.

El peronismo trató de atenuar la influencia de estos sectores para contar con un ejército de ideología más nacional, más popular y, por lo tanto, también más acorde con su propio proyecto. Pero sobre todo necesitaba de unas Fuerzas Armadas subordinadas al Estado, que lo aceptaran como ente superior y rector de todos los demás.

Los oficiales acusaban al gobierno de amenazar la independencia de las Fuerzas Armadas al tratar de convertirlas en una rama más del movimiento peronista. Aunque es indiscutible que la política económica, social y sindical del justicialismo ofrecía sobrados elementos para la reacción militar, no se puede olvidar la importancia que tuvo el descontento interno por la democratización, desjerarquización, politización y subordinación de las Fuerzas Armadas ^{cohesionar a} para los sectores rebeldes. La propaganda golpista dirigida a la oficialidad aludía, en especial, a la falta de dignidad de los jefes que aceptaban la subordinación a un gobierno que calificaban de corrupto y dictatorial.

Una vez más los militares se movían en defensa de sus propios intereses que coincidían, ahora sí, con los de la gran burguesía rural y con los de la partido cracia desplazada.

"No olviden los argentinos que el militarismo, por todos rechazado, es resultado tanto de las ambiciones de algunos militares, como de las miserias políticas",²⁰ decía el general Pedro Eugenio Aramburu, a menos de un año de la Revolución Libertadora.

²⁰ Pedro Eugenio Aramburu, La revolución libertadora, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1956, p. 134. Discurso pronunciado el 17 de agosto de 1956, "La misión de los militares".

CAPITULO III

LOS HIJOS DE LA REVOLUCION LIBERTADORA

(1955-1962)

CAPITULO III

LOS HIJOS DE LA REVOLUCION LIBERTADORA

Una vez asentada la organización nacional en bases que no permitan la subversión de los órdenes democráticamente jerárquicos, la Revolución ha de desaparecer con la misma dignidad con que vino.

General Pedro Eugenio Aramburu

Marco histórico

Cuando el 16 de septiembre de 1955 se consumó el golpe contra Perón, las Fuerzas Armadas, aunque instigadas y aplaudidas por todos los partidos políticos (radicales, conservadores, comunistas, socialistas) asumieron sobre sí la responsabilidad del hecho. Nombraron presidente al general Lonardo (ejército), secretario general de gobierno al capitán de navío Rial (armada) y en la cartera de relaciones exteriores al comodoro Krause (aeronáutica). Como si esto no fuera suficientemente claro, tres cadetes, uno por cada arma, fueron los encargados de entregar al nuevo presidente los símbolos militares que lo instituían como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cargo más que nada nominal de los presidentes argentinos. "La aeronáutica, la marina y el ejército, que limpiaron los cielos, el mar y la tierra, enfrentan el juicio de los argentinos... Las tres Fuerzas Armadas, en coincidencia histórica, aspiran a la misma solución. El ejército, hermana mayor, sabrá cumplir el compromiso contraído", decía el general Aramburu en uno de sus acostumbrados discursos públicos. ¹

¹ Pedro Eugenio Aramburu, op. cit., p. 62.

Los militares tenían un acuerdo sustancial, su antiperonismo, que les permitía posponer el momento de dirimir sus divergencias, aunque éste no se haría esperar demasiado. Al igual que en 1943, inmediatamente después del pronunciamiento se perfilaron las diferencias, que provocarían un cambio de figuras, un minigolpe que un sector militar daba contra otro.

Por una parte, el presidente nucleaba a una tendencia nacional católica, de corte paternalista, que se proponía la modificación del camino emprendido entre 1943 y 1946, del que rescataba ciertos elementos. Para Lonardi, el gran error de entonces había sido permitir el surgimiento del peronismo, pero ya en 1955 lo que cabía no era su destrucción sino asimilarlo a la vida política nacional hasta lograr que se diluyera en el conjunto de las demás fuerzas. La consigna que levantó Lonardi fue "ni vencedores ni vencidos" y su estrategia consistió en permitir la participación peronista en la política y aun en el gobierno, claro está que sin Perón.

Las líneas generales de acción que se formularon fueron la lucha contra la inflación, contra la burocracia sindical y estatal, contra la corrupción y la anulación de los contratos firmados por Perón con la California.

En ese momento existía la opinión generalizada de que una vez desaparecido el líder y desbaratadas las estructuras demagógicas y dictatoriales, el peronismo se desmoronaría como un castillo de naipes, "muerto el perro se acabó la rabia". Por su parte, el grupo liderado por Rojas representaba a los sectores "duros": los "gorilas" de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos tradicionales. Su ideología era liberal democrática y se constituyeron en "guardianes" de la Revolución. Curiosamente, a pesar de proclamarse paladines de la democracia eran quienes estaban más dispuestos a pasar por sobre las mayorías peronistas mediante la intolerancia política, la intervención sindical y la abolición de la legislación social. Este grupo encarnaba los intereses últimos de la Revolución, y si bien estuvo dirigido por los "duros" de las Fuerzas Armadas, dio cabida a

las fuerzas políticas, mediante la formación de una Junta Consultiva, creada a este fin, y que presidía el contralmirante Rojas.

Ambas tendencias se fueron definiendo dentro del proceso. Mientras que los primeros sostenían una política de no intervención de la CGT, prometían que no había confiscación de bienes ni disolución de la central obrera, y aseguraban el respeto a las conquistas sociales; los "duros" reprimían en los barrios populares, ocupaban militarmente las zonas obreras de Rosario, Avellaneda, Berisso y Ensenada (eminente industrial), los empresarios afines a su política sancionaban a los delegados sindicales y en algunos establecimientos inclusive se suprimían los beneficios laborales otorgados durante el peronismo. Este grupo, que expresaba a los militares desplazados durante el peronismo y a los partidos políticos liberales derrotados en las urnas, encarnaba el odio social hacia el peronismo como movimiento cada vez más representativo de una clase específica, una vez rota la alianza que le diera origen. Paulatinamente fue ganando posiciones dentro del gobierno, a pesar de la resistencia que ofreció el presidente y algunos miembros de su equipo, quienes intentaban una política más conciliadora. Sin embargo, la crisis se desató en los primeros días de noviembre. El día 9 el ministro de Ejército, Bengoa, renunció a instancias del grupo ultraliberal, puesto que apoyaba la apertura al aparato sindical peronista, se oponía a la intolerancia y también a la reintegración masiva de la oficialidad antiperonista a las filas del ejército. Al día siguiente renunció el secretario de Prensa, acusado de filonazi. Este declaró que sus enemigos querían "convertir a la revolución en un desquite de desplazados desde la fecha clave del 4 de junio de 1943". El 11 de noviembre Lonardi, solidarizado con Bengoa, declaró en un discurso público que no había que "erigir a una parte de la República en juez de otra parte de la misma", y lo que era más grave para los ultraliberales: "En ningún caso dividiré a la clase obrera para entregarla con defensas debilitadas a las fluctuaciones de nuestra economía y de nuestra política".²

² Gerardo López Alonso, Cincuenta años de historia argentina, Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1982, p.151.

Al día siguiente, Lonardi separó en dos ministerios el hasta entonces único de Interior y Justicia, a fin de aumentar su fuerza dentro del gabinete, colocando a dos ministros adictos a su política. Esto desencadenó la renuncia casi en pleno de la Junta Consultiva, presidida por Rojas, y el pedido de renuncia al presidente por parte de las Fuerzas Armadas.

El día 13 Lonardi dio a conocer un comunicado poco difundido entonces, en el que afirmaba: "Comunico al pueblo que no es exacto que haya presentado mi renuncia al cargo de presidente provisional, o que mi salud tenga algo que ver con mi retiro de la casa de gobierno. El hecho se ha producido exclusivamente por decisión de un sector de las Fuerzas Armadas." ³

Enseguida fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu. El nuevo presidente formó de inmediato un Consejo Militar Revolucionario, organismo que garantizaba la participación de los militares en las decisiones del gobierno, en la formación del gabinete y que dictó las "Directivas básicas del gobierno revolucionario".

El programa propuesto en las Directivas fue "Suprimir todo vestigio de totalitarismo para restablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y de la democracia". ⁴ El gobierno se proponía destruir el aparato propagandístico y represivo del Estado autoritario, para lo cual buscaba "desintegrar el estado policial" y "establecer la libertad sindical" para posteriormente llamar a elecciones, una vez que se hubiera "saneado" la sociedad. "Entiende el gobierno que es parte de su mandato transitorio no dar un solo paso atrás, mientras desmonta la terrible máquina de opresión construida por el régimen depuesto y pone al cuerpo electoral en condiciones de actuar normalmente", afirmaba el contralmirante Rojas en su discurso ante la sesión inaugural de la

³ Gerardo López Alonso, op. cit., p. 153

⁴ En Alain Rouquié, op. cit., p. 129.

Junta Consultiva, el 11 de noviembre de 1955.

El sindicalismo estaba en la mira; tres días después del desplazamiento de Lonardi se intervenía la CGT, al tiempo que el general Aramburu justificaba la medida diciendo: "La firme decisión de asegurar a los trabajadores las conquistas sociales logradas y de acrecentar en lo posible su bienestar material y espiritual han motivado, entre otras causas, la intervención de la CGT, medida fundada en la convicción de que la clase obrera requiere un instrumento gremial democrático y vigoroso". ⁵

Como reacción hubo un intento de huelga general infructuoso y, finalmente, se designó a un marino como interventor del organismo y se revocó y encarceló a las autoridades anteriores.

En el mes de noviembre se disolvió el partido peronista y la CGE. También se produjeron más arrestos de dirigentes justicialistas y se dictó una prórroga de las convenciones colectivas de trabajo, que representó el congelamiento virtual de los salarios. Las medidas afectaban a la clase obrera, tanto en su situación económica como en sus instancias de organización y representación.

En el mes de junio de 1956, militares peronistas intentaron dar un golpe para derribar al gobierno. Por primera vez el juego tantas veces repetido se castigó con una desacostumbrada dureza. Los viejos golpistas condenaron a los nuevos golpistas a la pena de muerte. En un juicio sumario, que duró menos de 24 horas se condenó a fusilamiento al general Valle, jefe del levantamiento y a otras 36 personas, entre las que se contaban varios civiles. Luego se demostraría que algunos de ellos ni siquiera habían participado en el complot. Las fuerzas políticas no protestaron, Frondizi responsabilizó de los "tristes acontecimientos" i a los muertos!, por haberse levantado contra el orden instituido. ⁶

⁵ Pedro Eugenio Aramburu, op. cit., mensaje público.

⁶ Arturo Frondizi, Ni odio ni miedo: reconstruir al país, Buenos Aires, S.E.P.A.

Desde el exilio, Perón sostenía: "Hoy impera la dictadura y la fuerza. No es nuestra hora. Cuando llegue la contienda de opinión, la fuerza bruta habrá muerto. Si se nos niega el derecho a intervenir, habrán perdido la batalla definitivamente... Esta revolución, como la de 1930 también septembrina, representa la lucha de la clase parasitaria contra la clase productora... Cuando llegué al gobierno de mi país había gente que ganaba veinte centavos al día, peones que ganaban quince pesos al mes... En un país que poseía 45 millones de vacas, los habitantes se morían de debilidad constitucional. Era un país de toros gordos y peones flacos... las jubilaciones insignificantes cubrían sólo a los empleados públicos y a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Instituímos jubilaciones para todos los que trabajan, incluso para los patrones. Creamos pensiones de vejez e invalidez, desterrando del país el triste espectáculo de la miseria en medio de la abundancia. Legalizamos la existencia de la organización sindical... y promovimos la formación de la CGT con seis millones de afiliados cotizantes. Lo dejo [al país] fabricando camiones, tractores, automóviles, locomotoras, etcétera. Dejo recuperados los teléfonos, los ferrocarriles y el gas, para que vuelvan a venderlos otra vez." ⁷

En abril de 1956 se anuló la Constitución de 1949 y se reimplantó la de 1853. En junio se anunció que para fines del año siguiente se llamaría a elecciones generales. Pero antes, en abril de 1957, se convocó a elecciones constituyentes para reformar la Constitución de 1853, que servirían como preliminares de las nacionales.

La asamblea constituyente representaba una instancia de legitimación para el nuevo gobierno y de ejercitación "democrática" para preparar la "sucesión" de la Revolución Libertadora.

Pero un nuevo problema aparecía para los "gorilas". El radicalismo, partido que parecía confiable por su importancia de segunda fuerza política y por su clara

⁷ En Milcíades Peña, op. cit.

militancia antiperonista, sufría una crisis interna que había ocasionado en noviembre de 1956 la separación de un ala, la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Este sector representaba al liberalismo antiperonista de las filas del partido, que se separaba pues la conducción había sido ganada, casi por sorpresa, por los intransigentes, liderados por el doctor Arturo Frondizi. Estos proponían una política de conciliación con el peronismo a fin de heredar su caudal electoral y con la esperanza de absorber aquel movimiento en sus propias filas. Tal objetivo los llevaba a una política muy conciliadora que alarmaba a las Fuerzas Armadas y a los sectores liberales, los que interpretaban este viraje como una traición a los ideales y principios de la Revolución Libertadora. El gobierno militar no quiso intervenir directamente en el conflicto interno de los radicales, pero dio su apoyo abierto a la UCRP, liderada por Ricardo Balbín, con miras a dejar en sus manos la sucesión del gobierno. Como anticipo, entregó los ministerios del Interior, Educación y Comunicaciones a miembros de esta fracción.

El 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones convencionales para la reforma constitucional, con proscripción del peronismo. Estos comicios se proponían, ante todo, realizar un "recuento globular" del electorado, para evaluar la relación de fuerzas antes de la elección presidencial. La votación debía reflejar el esperado deterioro del peronismo, que ya no contaba con sus aparatos de coerción estatal. Además, colocaba en una posición difícil a los intransigentes, por obligarlos a participar en un acto electoral que proscribía a sus posibles aliados.

Los resultados fueron desastrosos para el gobierno. El peronismo, que había dado la orden del voto en blanco, obtuvo la primera mayoría con 2 115 861 votos y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) 1 847 603, pero, por el sistema de representación provincial que se había aplicado, los radicales del pueblo obtuvie

ron 75 bancas, mientras que los intransigentes, aunque con menos votos en números absolutos, lograron 77 representantes, con lo que obtenían la mayoría en la asamblea constituyente. Este éxito indirecto le permitió a la UCRI dar un segundo golpe a la política militar e impugnar la legitimidad de la convención y retirarse de la misma con lo que rompió la maniobra para llevarla a un enfrentamiento con el peronismo. Luego se retiraron otros grupos de la asamblea que, a pesar de su mermada representatividad, declaró la nulidad de las reformas de 1949. Poco después, al retirarse los conservadores se perdió el quorum y quedó disuelta. Cabe señalar que los grupos que permanecieron fieles hasta el fin a la convocatoria militar fueron la UCRP, que esperaba obtener la sucesión presidencial, los socialistas y los comunistas.

Una vez liquidada la instancia de la constituyente, el gobierno debía pasar a preparar la contienda electoral para la que faltaban sólo tres meses. La venta ja que en números absolutos habían obtenido los radicales del pueblo en las elecciones para la asamblea, ya que el peronismo no contaba, deben haber hecho suponer a los militares que, con una buena campaña se podría aumentar, quedando en sus manos la continuación del proceso. Aunque las aproximaciones de Frondizi hacia el peronismo eran más que claras, hasta último momento no pensaron que éste llegara a la concreción de un pacto con Perón, lo que constituía la consumación de la traición.

En efecto, en enero se selló una alianza electoral entre Perón y los intransigentes. El 1 de febrero de 1958 llegó a la Argentina la consigna de que el peronismo debía votar por Frondizi. El 23 de ese mismo mes se realizaron las elecciones, de las que resultaron las siguientes cifras: UCRI 3 989 478, UCRP 2 526 611, otros 1 400 000.

El triunfo rotundo de la intransigencia fue más celebrado por el peronismo que por ninguna otra fuerza. A pesar del desconcierto que produjera en sus filas la orden de votar por Frondizi, una vez más quedaba claro que la mayoría les per

necía.

Las condiciones para este apoyo, aunque en ese momento aún no eran públicas, habían sido el compromiso de los intransigentes a restituir la legalidad del peronismo y a reorganizar la CGT manteniendo su conducción y su identidad peronistas.

Aunque algunos sectores militares se negaban a entregar el gobierno, el 1 de mayo asumió Frondizi. Según sus propias palabras, "continuistas y quedantistas deliberaron sobre si debían o no entregar el poder a la inmensa mayoría triunfante en los comicios. Acepté, entonces, recibir el poder en forma condicionada".⁸ Muchos años después, en una entrevista con Félix Luna, él mismo declaró: "Mi mayor error fue aceptar el gobierno".⁹

Para los militares, la partidocracia y la gran burguesía, el gran pecado de Frondizi era haberse aliado con el peronismo, lo que amenazaba los objetivos de la Revolución Libertadora.

El nuevo presidente habría de tener una política muy contradictoria que en definitiva resultó eminentemente antipopular, sin embargo cumplió con rapidez los compromisos contraídos con el peronismo: una semana después de asumir a su cargo elevó al congreso un proyecto de amnistía general y en el mes de agosto entró en vigencia la nueva ley de asociaciones profesionales que reconocía a un único sindicato por rama y por industria, lo que garantizaba la continuidad de la conducción peronista en el ámbito sindical e impedía la atomización de la estructura en gremios diferentes y pequeños. Tanto la izquierda como la derecha criticaron la ley por atentar contra la libertad de agremiación.

Además, el 13 de mayo, a escasas dos semanas de haber asumido, se decretó un

⁸ En Gerardo López Alonso, op. cit., p. 165.

⁹ En Alain Rouquié, Le mouvement Frondizi et le radicalisme argentin, Centre d'étude des relations internationales, Recherches, núm. 11, 1967.

60 % de aumento a los salarios vigentes desde febrero de 1956. Sin embargo, esas medidas habrían de contrapesarse con otras, que tendían a establecer acuerdos con los sectores antiperonistas.

En el mes de junio se remataron y adjudicaron las empresas estatales del grupo DINIE, lo que se enmarcó en una política de privatización próxima a los grupos liberales. En julio se anunció una nueva política petrolera que se proponía lograr el autoabastecimiento con base en la firma de contratos con compañías extranjeras. La cuestión del petróleo ocupó el primer lugar de la escena puesto que en ese momento la importación de hidrocarburos representaba un gasto importante para el país. Por ello se intentaría lograr el autoabastecimiento y destinar este monto a la adquisición de bienes de capital. Se decía que la utilización de capitales extranjeros permitiría lograr, según las hipótesis frondicistas, un autoabastecimiento más rápido. Se firmaron entonces 13 contratos con las compañías Esso, Shell, Pan American Oil, Tenesse y otras. Los sectores nacionalistas atacaron la decisión que resultaba totalmente incoherente con la función desplegada por el propio Frondizi cuando Perón firmó los contratos con la California, e incluso con las promesas de la campaña electoral que hablaban del desarrollo de la empresa estatal para la explotación petrolera. Pero si la política oficial resultaba irritativa, el hecho de que los contratos no se sometieran al congreso hizo suponer que además existía peculado en toda la operación. En medio del malestar por la cuestión petrolera, en el mes de septiembre estalló el conflicto por la ley de enseñanza. La misma debía definir si el gobierno aceptaría la enseñanza privada o no, lo que estaba íntimamente relacionado con los intereses de la Iglesia.

Contrariamente a lo que esperaban los partidos, el poder ejecutivo se definió por la enseñanza libre, es decir admitir la participación de escuelas privadas, para lograr un acercamiento con la Iglesia, sector importante de poder que había sido contrario a Frondizi desde la campaña electoral. Esto provocó grandes

60 % de aumento a los salarios vigentes desde febrero de 1956. Sin embargo, es tas medidas habrían de contrapesarse con otras, que tendían a establecer acuer dos con los sectores antiperonistas.

En el mes de junio se remataron y adjudicaron las empresas estatales del grupo DINIE, lo que se enmarcó en una política de privatización próxima a los grupos liberales. En julio se anunció una nueva política petrolera que se proponía lo grar el autoabastecimiento con base en la firma de contratos con compañías ex- tranjeras. La cuestión del petróleo ocupó el primer lugar de la escena puesto que en ese momento la importación de hidrocarburos representaba un gasto impor tante para el país. Por ello se intentaría lograr el autoabastecimiento y desti nar este monto a la adquisición de bienes de capital. Se decía que la utiliza- ción de capitales extranjeros permitiría lograr, según las hipótesis frondicig- tas, un autoabastecimiento más rápido. Se firmaron entonces 13 contratos con las compañías Esso, Shell, Pan American Oil, Tenesse y otras. Los sectores na- cionalistas atacaron la decisión que resultaba totalmente incoherente con la fu ria desplegada por el propio Frondizi cuando Perón firmó los contratos con la California, e incluso con las promesas de la campaña electoral que hablaban del desarrollo de la empresa estatal para la explotación petrolera. Pero si la po- lítica oficial resultaba irritativa, el hecho de que los contratos no se some- tieran al congreso hizo suponer que además existía peculado en toda la operación. En medio del malestar por la cuestión petrolera, en el mes de septiembre estalló el conflicto por la ley de enseñanza. La misma debía definir si el gobierno acep- taría la enseñanza privada o no, lo que estaba íntimamente relacionado con los intereses de la Iglesia.

Contrariamente a lo que esperaban los partidos, el poder ejecutivo se definió por la enseñanza libre, es decir admitir la participación de escuelas privadas, para lograr un acercamiento con la Iglesia, sector importante de poder que ha- bía sido contrario a Frondizi desde la campaña electoral. Esto provocó grandes

manifestaciones estudiantiles de oposición y finalmente una decisión que no sa tisfizo a nadie: las universidades privadas podrían expedir títulos pero la ha bilitación para el ejercicio profesional sería otorgada por el Estado.

La agitación reinante fue la razón que se esgrimió para reimplantar el estado de sitio. Poco después, en el mes de noviembre, estalló una huelga petrolera en Mendoza, que se generalizaría a los demás puntos del país. El presidente respon sabilizó del hecho a los comunistas y a los socialistas.

Pero aunque con esto trataba de aproximarse a los intereses y a la ideología de conservadores y militares, Frondizi ya no podía gozar de su confianza. En cambio, sería cada vez más susceptible a sus presiones.

Como resultado de dichas presiones, en el mismo mes de noviembre renunció Frigerio a su cargo de secretario de Asunto Económicos y Sociales, aunque permane ció como asesor de la presidencia. Frigerio, caracterizado como la figura de iz quierda del gobierno de Frondizi, atraía los ataques de los sectores gorilas, espantados por el "comunismo" gubernamental.

A su vez, como parte de este juego de presiones cada vez más desfavorable para el ejecutivo, pocos días después Frondizi forzó la renuncia del vicepresidente Gómez mediante una acusación de conspiración. Se supuso entonces que la manio- bra tendía a impedir un golpe institucional que exigiera la renuncia de Frondi- zi y dejara en su lugar a Gómez, más próximo a las orientaciones militares. La nueva situación planteaba que al carecer de vicepresidente, un alejamiento del presidente implicaría un llamado a elecciones, que seguramente era algo que se debía meditar con mayor cautela y que resultaba muy peligroso con el peronismo legalizado.

Hacia fines del año se aprobó la ley de inversiones extranjeras y se anunció un nuevo plan económico, basado en las recomendaciones del FMI. El mismo consistía en no dar aumentos salariales que no se basaran en un aumento de la productivi- dad, achicar la burocracia estatal, privatizar sectores para disminuir el gasto

público, hacer una reforma impositiva, orientar el crédito a la industria y no emitir moneda. Casi de inmediato Frondizi viajó a Estados Unidos para solicitar capitales y consiguió préstamos por 329 millones de dólares otorgados por el FMI y el Eximbank.

Con todas estas medidas impopulares, 1959 fue un año de ascenso progresivo de poder por parte de los militares y de aislamiento creciente del gobierno tanto con respecto al peronismo como a la izquierda e incluso en relación con los propios desarrollistas.

Desde el comienzo del año, el enfrentamiento con el peronismo fue abierto y comenzó la llamada Resistencia, que consistió fundamentalmente en la desestabilización del gobierno mediante el sabotaje a la producción. Hacia mediados de año, tanto Frigerio como ciertos ministros intransigentes renunciaron a sus cargos, en coincidencia con un levantamiento militar en Córdoba y seguramente como consecuencia de los planteos castrenses. Casi de inmediato se nombró a Alvaro Alsogaray como ministro de Economía. Se trataba de una figura de confianza para los militares y la Sociedad Rural, que o bien fue impuesta, o bien escogida por Frondizi, para ejecutar la política del FMI. El proyecto desarrollista quedaba liquidado.

Pero no por esto el gobierno se hacía más potable para las Fuerzas Armadas. La publicación del pacto Frondizi-Perón por parte de este último reeditó todas las desconfianzas y afirmó la suposición de los sectores castrenses de que debían vigilar a este gobierno.

Se sucedieron ininterrumpidamente una serie de planteos militares con sucesivos enfrentamientos entre los comandantes en jefe (que representaban los mandos militares de tropa) y los secretarios de las armas, quienes eran sus voceros dentro del gobierno. Los secretarios, aunque impuestos por las Fuerzas Armadas, dada su cercanía con el gobierno trataban de ser mediadores y terminaban resultando irritativos para los mandos militares. El general Toranzo Montero, comandante

te en jefe del ejército designado a raíz de uno de estos pronunciamientos, se dedicó a hostigar al gobierno de Frondizi con innumerables reclamos y pronunciamientos, de una manera inédita hasta entonces.

En 1960, el incremento del sabotaje en Córdoba y la aparición de un grupo guerrillero en la provincia de Tucumán, fueron las razones que se esgrimieron para instaurar el Plan Connintes, instancia especial para circunstancias de conmoción interna del Estado, que en realidad se convirtió en una herramienta de poder para las Fuerzas Armadas al permitirles actuar directamente en la represión social, sobre todo de las innumerables huelgas. El Connintes daba amplias facultades a los jefes de unidad y expresaba el poder creciente de los militares, al mismo tiempo que lo incrementaba.

En Córdoba se produjo un incidente más que significativo de este avance. El poder judicial se negó a entregar al ejército unos presos que éste le reclamaba. A raíz de la negativa, el ejército ocupó las cárceles, lo que dio lugar a una protesta del gobernador de la provincia. El incidente entre las fuerzas civiles y las militares terminó en la intervención de la provincia por parte del ejecutivo (1) y la separación del gobernador de su cargo. La actitud del presidente, que cada vez cedía más fácilmente a las presiones militares, lejos de amenguar las permitió el ensoberbecimiento creciente y la interferencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en el gobierno.

En 1960, la cuestión cubana estaba en su punto álgido y se realizó la reunión de cancilleres de la OEA. La posición oficial de la Argentina consistió en el rechazo explícito del comunismo pero al mismo tiempo ponía de manifiesto la relación existente entre subversión y pobreza, y desalentaba una unidad que implicará la intervención norteamericana a Cuba.

No obstante, el general Toranzo Montero, quien ni siquiera había sido invitado a la reunión, se presentó y expuso ante el auditorio una ponencia de solidaridad anticomunista, de corte claramente macartista, de acuerdo con la posición

del sector gorila y contraria a la actitud oficial. Este virtual desafío de la autoridad presidencial culminó hacia fines de ese mismo año en un pronunciamiento público de Toranzo contra el presidente. En marzo del año siguiente se lanzó la Alianza para el Progreso, que se concretó en agosto, y de la que Cuba no participó. Frondizi trató de ser aceptado como mediador entre Estados Unidos y Cuba, cosa que no consiguió. Este intento llevó a la realización de la reunión Frondizi-Che, con el consentimiento de los norteamericanos pero con gran escándalo por parte de las Fuerzas Armadas, lo que dio lugar a nuevos pronunciamientos y presiones.

En 1962 la Argentina se abstuvo de las sanciones contra Cuba. Pero al mismo tiempo, el delegado argentino ante la Junta Interamericana de Defensa votaba por la expulsión de ese país, lo que puso de manifiesto una vez más, la autonomía que tenían las Fuerzas Armadas y su desacato al poder político. Como el ministro argentino se abstuvo en la votación de Punta del Este aunque la mayoría se pronunció por las sanciones a Cuba, los militares exigieron su destitución y la ruptura de relaciones con el país antillano. Frondizi se negó y buscó, en un ardoroso discurso, el apoyo de las fuerzas políticas pero todo el país le dio la espalda. Finalmente, como ya era su costumbre, cedió y rompió relaciones diplomáticas con la isla.

Sería demasiado largo mencionar la enorme cantidad de conatos de levantamiento, planteamientos y desacatos de las Fuerzas Armadas. Lo importante es que se produjo un incremento de los mismos frente a los que el Presidente, por su inconsecuencia política en relación con los planteos electorales y su incapacidad para defender a sus aliados fue quedándose solo.

La celebración de elecciones parciales en 1961, que arrojaron resultados positivos para el oficialismo, por una parte permitió al gobierno ciertas libertades, como deshacerse del probablemente impuesto ministro de Economía, pero al mismo tiempo llevaron a Frondizi a un error de cálculo fatal: abrigar la espe-

ranza de ganar las elecciones provinciales que se llevarían a cabo al año siguiente.

En marzo de 1962 llamó a elecciones para gobernadores. El presidente insistió en permitir la participación peronista. Hay diferentes versiones sobre este hecho, desde una posible sobreestimación de su fuerza hasta un supuesto acuerdo con dirigentes justicialistas que habrían estado dispuestos a retirarse de la contienda a último momento, maniobra que según estas interpretaciones habría roto Perón a última hora.

Lo cierto es que el peronismo fue a las elecciones. Sobre 18 distritos, ganó 11; la UCRI triunfó en cinco; la UCRP en uno y los demócratas en otro. Inmediatamente los militares exigieron la intervención de las provincias en las que ganó el peronismo, cosa que el presidente hizo al día siguiente. No solamente aceptó intervenir las provincias sino que renovó su gabinete con figuras más potables para la cúpula castrense. No obstante, ésta presionó para obtener su dimisión. El general Aramburu declaró que "la renuncia del presidente no significará la quiebra del orden constitucional", y en una carta pública se la solicitó explícitamente. Los distintos sectores estaban de acuerdo con esta salida.

Dado que Frondizi se negó a renunciar, once días después de las elecciones los militares dieron el golpe. En su consumación se evidenciaban dos sectores: los que se proponían una sucesión "legal" a través de la figura de Guido, titular provisional del senado, y los que proponían que el poder fuera asumido en forma directa por las Fuerzas Armadas. Finalmente triunfó la primera opción. Falta un camino que recorrer hasta que los militares argentinos asumieran sin disimulo el gobierno de la nación.

Marco económico

Este periodo se caracterizó por la vigencia de un nuevo modelo de acumulación, que aunque tuvo su origen a partir de 1950, se definió con claridad después de la Revolución Libertadora.

En la nueva modalidad de reemplazo de la mano de obra por capital, con una explotación intensiva de la primera coincidían por lo menos dos intereses: el de la gran burguesía industrial (puesto que era el camino para aumentar sus tasas de ganancia) y el de los capitales extranjeros, en especial el norteamericano (puesto que era el proveedor de la maquinaria y la tecnología necesarias).

A esta alianza se unió la gran burguesía agroexportadora, cuyo proyecto exportador no se discutía y que seguía siendo la clase sostenedora de la economía nacional. Es necesario recordar que si la burguesía industrial necesitaba divisas para importar, era precisamente la gran burguesía agrícola ganadera quien las tenía, como producto de su exportación. Así pues se creaba una relación de dependencia de la primera respecto de la segunda.

Este frente que unía a la oligarquía, a la gran burguesía industrial y a los capitales extranjeros tenía por obvio oponente a los sectores populares y obreros que resultaban perjudicados con el nuevo modelo de acumulación.

Cabe señalar que cuando hablamos de burguesía industrial nos referimos a los grandes capitales nacionales que eran los que estaban en condiciones de hacer este viraje en su modalidad productiva. La pequeña y mediana industria fueron absorbidas por los capitales mayores, capaces de hacer la transformación.

Otro fenómeno característico fue la aceleración del proceso inflacionario, ya desencadenado, pero que se agudizó notablemente a partir de 1955. Datos significativos son los siguientes: entre 1946 y 1949 el aumento del costo de la vida había sido del 98 %; en cambio entre 1958 y 1962 el mismo índice ascendió a 323 %, lo que demuestra la aceleración del ritmo inflacionario. Se ensayaron distintas

políticas para detenerlo, pero sin éxito.

Es difícil explicar el origen del ciclo de inflación que se desató en Argentina y que tiene, a grandes rasgos, las siguientes características.

El aumento del nivel de los ingresos producido durante el gobierno peronista provocó un incremento en la demanda interna de productos agropecuarios. Esto dio lugar al aumento de la producción industrial y a la reducción de las exportaciones de esos productos. Al mismo tiempo, la reactivación industrial implicó un aumento de las importaciones necesarias para el equipamiento de la planta fabril. Estas dos circunstancias, aumento de las importaciones y reducción de las exportaciones, por el consumo interno, causaron un deterioro de la balanza de pagos y un agotamiento de las divisas del Banco Central.

Deficit del intercambio comercial en millones de dólares

1955	244
1956	183.8
1957	339.8
1958	359.9

Evolución de la deuda pública interna en millones de pesos

1954	41 306
1955	51 468
1956	63 703
1957	71 482
1958 (abril)	76 624

Evolución de las reservas de oro

1955	371.5
1956	371.5
1957	182.3
1958	125.5

Fuente: Presidencia de la Nación, Panorama económico y soluciones, Buenos Aires, 1958.

En consecuencia, se devaluó el peso y se aplicaron políticas monetarias y fiscales, que a su vez representaron un aumento de precios internos de los productos agrícolas (que se fijan según el mercado internacional) así como de aquellos productos industriales que utilizaban insumos importados. Esto significó un desplazamiento del ingreso en favor de los productores agropecuarios y en detrimento de los sectores asalariados. La reducción del valor adquisitivo del salario disminuyó la demanda global, lo que afectó al sector industrial. Con la desactivación del mercado, también se desalentó la inversión, lo que ocasionó un proceso recesivo. La disminución de las importaciones y la disminución del consumo equilibraron nuevamente la balanza de pagos.

Junto a la inflación, el otro fenómeno característico de este período fue el de las devaluaciones de la moneda, que en realidad representaron una transferencia de riqueza hacia el sector agropecuario, que es el sector exportador dentro de la economía argentina. Las devaluaciones desalientan a los sectores monopólicos que requieren de cierta estabilidad para radicarse y permanecer en un país y constituyen un mecanismo de liquidación de las pequeñas y medianas empresas, que no pueden cubrir sus deudas en divisas extranjeras y pasan a manos de capitales más fuertes, que a su vez tienden a asociarse con capitales extranjeros para modernizar sus equipos. Esto dio lugar a un proceso de concentración de capital.

Así comenzó el estancamiento de las industrias vegetativas y el aumento paulatino de la producción de las ramas más dinámicas, que tienen mayor concentración de capital. Al disminuir la capacidad de la industria para ocupar mano de obra, ésta pasó a incorporarse al sector terciario. Pero el incremento de este sector encubre formas de desempleo, ya que su participación en el producto bruto no aumentó.

Distribución sectorial de la población total ocupada (en porcentajes)

	1953	1963	1969
Agropecuario y pesca	26.7	22.8	20.3
Minería	0.6	0.6	0.6
Industria manufacturera	23.6	19.4	18.7
Construcción	6.2	5.9	7.5
Comercio	13.3	14.1	14.7
Transporte y comunicaciones	6.4	6.9	7.4
Electricidad, gas y agua	0.7	0.9	0.8
Gobierno	9.4	11.8	11.5
Otros servicios, bancos y vivienda	13.1	17.6	18.6
Población ocupada total	100.0	100.0	100.0

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 116.

El aumento de la desocupación se intensificó en el interior del país, donde habia mayor concentración de industrias vegetativas. Este proceso tuvo su comienzo también en la década de los 50 pero se acentuó durante los 60.

Tasas de desocupación urbana por regiones (en porcentajes de la población económicamente activa)

	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Gran Bs.As.	6.9	5.3	5.9	6.3	5.3	4.4
Córdoba	9.5	7.5	6.9	8.1	5.8	4.6
Santa Fe	7.6	7.2	6.6	6.5	5.5	5.6
Tucumán	9.2	6.0	8.4	9.9	11.9	12.2
Mendoza	9.2	5.4	3.3	2.5	2.5	2.7
Resto del país	15.6	12.0	15.4	13.8	13.0	10.3
Total	10.6	8.2	9.7	9.3	8.4	6.9

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 119.

Podríamos decir que del proceso de renovación tecnológica se desprende el fenómeno de la desocupación, el que a su vez redundó en una baja general de los salarios y por lo tanto en una menor participación de éstos en el PBI. Pero en realidad es necesario precisar una diferenciación que se estableció en este periodo en el aspecto salarios. Así como las industrias vegetativas se distanciaron tecnológicamente de las dinámicas, de igual manera esta diferenciación se manifestó en los salarios que ambos tipos de empresa pagaban, de lo que resultó una heterogeneidad creciente en las remuneraciones de la clase obrera. Esta misma diferenciación se repitió en un sentido geográfico, coincidente con el lugar de asentamiento de unos y otros centros productivos. Así, Buenos Aires, Córdoba y Rosario nuclearon a la población obrera mejor remunerada, en tanto que las demás ciudades del interior a la que recibía percepciones menores. Así pues coincidieron cuatro factores: alta tecnología, altos salarios, alta concentración de capital y escasa mano de obra.

Por el otro lado: equipos obsoletos, bajos salarios, escasa inversión de capital y abundante mano de obra.

La tendencia general, que ya señalamos, consistió en una absorción de estas últimas empresas por parte de las primeras, elemento que confluó a acentuar la concentración de capital. Así por ejemplo, el censo industrial de 1963 demostró que el 4 % de las empresas producía el 52.70 % de la producción industrial, ocupando el 32.55 % de la mano de obra.

También aumentó considerablemente el número de empresas extranjeras, lo que constituye otra de las características principales de la etapa. Estas se radicaron sobre todo en las ramas más concentradas, tal como puede apreciarse en el cuadro.

Participación de las empresas extranjeras en la producción manufacturera, 1963
Valor de producción de empresas extranjeras

	Valor de producción total de las ramas respectivas
Rama concentrada	32.4 %
oligopólica	52.9 %
parcial/oligopólica	20.4 %
Rama medianamente concentrada	1.9 %
Total	24.6 %

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 128

En resumen, podemos decir que en 1955 se inició un proceso de concentración industrial asociado a la penetración del capital extranjero. Esto favoreció la acumulación monopólica que beneficia a la burguesía industrial monopólica puesto que puede introducir nueva tecnología para recuperar altos niveles de ganancia, mediante el reemplazo de mano de obra por capital fijo. Estas circunstancias tendieron al debilitamiento de la burguesía nacional.

Así pues desde 1955 se impulsó una política devaluatoria, que favoreció a la gran burguesía agroexportadora, tal como se señaló y, al mismo tiempo, se inten

tó controlar la inflación para favorecer a la gran burguesía industrial, lo que explica la coincidencia de intereses de estos dos sectores durante esos años. Aunque también es obvio que ambas políticas tienden a ser contradictorias entre sí, puesto que las devaluaciones alientan en forma casi automática la inflación. Estas orientaciones generales tuvieron momentos diferentes. El golpe de 1955 reivindicó abiertamente a la gran burguesía agraria "La actividad rural argentina, fundamento y fuente de la riqueza nacional... ha sido una de las principales víctimas de los años de abuso a los que la Revolución Libertadora ha puesto fin"¹⁰; se podía leer en documentos oficiales. Dos miembros del flamante gabinete pertenecían a la Sociedad Rural Argentina, y pronto lograron acabar con la sobrevaluación del peso mediante una devaluación de más del 100 % (de 8.8 a 22 pesos por dólar) y la supresión de cambios múltiples.

Por otra parte, cabe señalar que el sistema de explotación de la tierra era bastante moderno si se considera que ya en 1951 el trabajo familiar representaba sólo el 25 % del trabajo agrícola; en tanto que un 75 % estaba compuesto por mano de obra asalariada y una buena cantidad de arrendatarios, quienes habían mantenido la vigencia de sus contratos por la prolongación de los mismos que había asegurado el gobierno peronista.

La Revolución Libertadora trató enseguida de implementar el Plan Prebisch que consistía básicamente en un proyecto neoliberal, de ortodoxia monetarista y mantenimiento de una moneda sana con respeto del libre juego de la oferta y la demanda. Proponía también un aumento de las exportaciones, un incremento de la productividad y la privatización de empresas estatales, tendiendo a una política de austeridad y de disminución del gasto público. Según esta explicación, la inflación se debía a los aumentos salariales excesivos, dados a costa de los productos agropecuarios y de las clases medias, y al dirigismo estatal, que interfería en la producción de manera ineficiente. En definitiva algo no muy distinto

¹⁰ Presidencia de la Nación, Memoria del gobierno provisional de la Revolución Libertadora, p. 83.

de las propuestas actuales del FMI, lo que no es extraño puesto que precisamente en junio de 1956 Argentina ingresó a este organismo y al Banco Mundial. Poco después se ratificó la carta de la OEA y se entró de lleno en la política prounorteamericana.

Pese a las previsiones de Prebisch no se pudo controlar la incidencia de la devaluación sobre los precios puesto que los empresarios quisieron resarcirse del control sufrido durante años y a su vez el sector obrero defendió sus salarios, lo que desató la inflación. De todas formas, la relación del salario con el ingreso nacional bruto descendió de un 47 % en 1955 al 42 % en 1957.

Por su parte, el valor de las exportaciones aumentó sólo un 7 % dado que se produjo una baja de precios internacional que desalentó la producción para exportación. Al mismo tiempo la importación creció de manera descontrolada, de forma que en 1958 hubo que reimplantar las restricciones. A su vez la inversión disminuyó y sólo se ahorró un 16 % del aumento del ingreso nacional lo que significa que la redistribución constituyó simplemente un aumento del consumo de los sectores acomodados.

En 1958, con el gobierno de Frondizi se ensayó el proyecto desarrollista. Este consistía básicamente en impulsar un complejo industrial, sobre todo de industrias básicas; en fortalecer el desarrollo regional, con una política de integración nacional; en desechar el papel de proveedores de materia prima en el mercado internacional; en lograr un desarrollo agrícola mediante la tecnificación del campo y no mediante una reforma agraria y en atraer el capital extranjero, en el supuesto de que no ocasionaría una situación de dependencia puesto que se usaría en las áreas que requiriera el desarrollo nacional. Este último punto era central y por eso la primera preocupación del gobierno fue ganarse la confianza de los inversores internos y de la comunidad financiera internacional. En este sentido, el ministro Alsogaray, impuesto o no por las Fuerzas Armadas, resultaba más que pertinente por sus vinculaciones con el mundo financiero y,

en especial, con los Estados Unidos.

Los primeros meses del gobierno de Frondizi fueron de un desorden económico tan grave que Sorrouille llega a preguntarse si lo que estaba tratando de lograr era provocar una crisis lo suficientemente grave que diera cabida al desarrollismo como proyecto salvador.

Frondizi procuró destensar la economía para lograr una simpatía popular que, en realidad terminó por colocarlo en una situación mucho más comprometida. Otorgó un aumento general de salarios del 60 %. Reactivó la inflación, con lo que el índice del costo de la vida aumentó un 35 % entre los meses de mayo y diciembre de 1958. Esta cifra que hoy parece modesta, era para entonces una tasa sin precedentes. Dio una gran flexibilidad monetaria y fiscal y el deficit del presupuesto nacional alcanzó a casi el 5 % del PBI.

En diciembre de 1958 el FMI impuso un plan de reordenamiento, de corte liberal, que dio inicio a una etapa de austeridad y significó una especie de mutación en la política oficial, que habría de ahondarse a lo largo del gobierno.

En 1959 el Estado eliminó toda financiación para la vivienda, suprimió los controles de precios, liberó el tipo de cambio, congeló los salarios y estableció una política fiscal favorable a las inversiones, con exenciones impositivas que llegaban, en algunos casos al 100 %. Con la desaceleración de la inflación y el resto de las medidas expuestas se logró la entrada del capital extranjero y también ciertas repatriaciones de fondos argentinos.

En julio de ese año se otorgaron concesiones petrolíferas a compañías extranjeras, la mitad en zonas ya exploradas, lo que disminuía los gastos de explotación. A dichas empresas se les permitía operar como nacionales y repatriar sus utilidades sin ninguna traba. Con este costo, en 1959 se logró duplicar la producción de petróleo alcanzada en 1946, que en 1962 se volvería a duplicar, logrando abastecer el 95 % de la demanda interna. El logro era importante, pero es imprescindible ponderar el costo terriblemente alto del mismo.

Se logró una reducción real de los gastos del Estado y la privatización de ciertas empresas estatales. Todo hacía parecer confiable el proyecto desarrollista, así es que el Eximbank y el FMI le otorgaron préstamos.

Pero con la liberación de precios, el de la carne aumentó más que el de los granos, por lo que los productores usaron las tierras de cultivo para pastoreo y retuvieron el ganado. Esto hizo bajar las exportaciones y ocasionó una pérdida de divisas del Banco Central que redundó en una baja de la confianza, agudizada por los graves problemas con los sindicatos, en rebelión por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y por las racionalizaciones.

La estrategia económica de asfixia de los ingresos populares fue creando problemas políticos crecientes, lo que restó confianza al gobierno aun frente a los sectores que beneficiaba. También hubo una falta de consecuencia con el proyecto del FMI. Así por ejemplo, para las elecciones de 1961, el gobierno rompió una serie de compromisos asumidos con organismos internacionales, en aras de una supuesta política "popular", a raíz de la cual la Argentina fue declarada en violación del stand by con Estados Unidos.

Como rasgo fundamental de la presidencia de Frondizi podemos decir que fue el momento de mayor penetración del capital extranjero. En 1958 las inversiones extranjeras eran de 14 millones de dólares, en 1959 llegaban a 209 millones y tomando todo el periodo frondicista de 1958 a 1962 alcanzaron los 550 millones en inversiones directas.

En cuanto a las importaciones, más del 50 % de las que entraron al país entre 1959 y 1963 lo hicieron libres de cargos aduaneros. También es importante señalar que durante este periodo se logró un reequipamiento de la planta industrial; que se inauguró el primer alto horno de SOMISA y que en 1963 el país producía ya un millón de toneladas de acero.

La siderurgia quedó a partir de ese momento bajo control militar.

Por otra parte se sentaron las bases para la industria química pesada y petro-

química, que permitió la fabricación de explosivos y equipos militares. Obsérvese cómo este gobierno acrecentó el poder material de las Fuerzas Armadas y cómo esta circunstancia económica aun unida a la defensa de los intereses de aquellos sectores más ligados a los grupos militares, la oligarquía y el capital monopolístico industrial, no alcanzó para obtener el apoyo de las mismas. Esto se debió a que la política desarrollista fue incongruente consigo misma, pero no es menos cierto que los factores políticos y aun ideológicos son determinantes en la realización de alianzas. Pocos gobiernos favorecieron tanto, más allá de su discurso, a los militares argentinos y a los sectores ligados con ellos, y pocos gobiernos también fueron tan cercenados y condicionados por las Fuerzas Armadas.

Los partidos políticos

Al producirse la Revolución Libertadora todos los partidos políticos, con excepción del propio peronismo, dieron vivas al movimiento militar. Todos, al mismo tiempo, se autoproclamaban demócratas sin que esto les produjera ninguna contradicción con el hecho de estar desplazando al partido mayoritario. A pesar de ello en el seno mismo de la Revolución se perfilaron dos tendencias. Por una parte la de Lonardi, quien se proponía la integración del peronismo, naturalmente sin Perón, y esperaba el agotamiento de esta corriente una vez despojada del aparato del poder. Por otro lado, la tendencia liderada por Aramburu, que se hacía eco de las posiciones "gorilas", es decir de las más intransigentes y duras dentro de las Fuerzas Armadas, que proponían una limpieza general de elementos peronistas en las filas del ejército, del gobierno y la reivindicación de los personajes desplazados por el régimen anterior. Los partidos políticos iban a la cola de las Fuerzas Armadas. Si en el 43 los militares habían actuado por sí

mismos, ahora volvían a hacerlo pero con el apoyo unánime de los partidos. Haciendo gala de su inconsecuencia y cortedad política los mismos partidos que a bucheaban a los militares en 1945, habían acudido ahora a rogar la intervención militar. Dice Rouquié; "Contra Perón exigían, en 1945, la salida de los milita res; contra Perón reclamaban, en 1955, la toma del poder por los militares".¹¹ Cada uno rindió su acto de fe. Representantes de todos los partidos participaron en los festejos. La UCRP, para que no quedaran dudas emitió un documento público de apoyo; su dirigente Arturo Frondizi aseguró : "El alzamiento fue el único recurso a que se vio compelido un pueblo privado de toda posibilidad de resolver en paz y concordia los angustiosos problemas de su existencia nacional".¹²

El Partido Comunista, en ese entonces vocero de la izquierda nacional más radical, para no perder la oportunidad histórica de equivocarse una vez más declaró por boca de su secretario general "Entre las varias corrientes en lucha por el predominio en el poder, para imprimir al gobierno una u otra orientación política, se destacan hasta ahora, dos fundamentales: una, la que encabeza el general Lonardi, que sufre una fuerte influencia clerical y pro imperialista yanqui que lo empuja hacia la derecha; otra, la que encabeza el contralmirante Rojas que se inclina hacia posiciones democráticas y de cierta resistencia al imperia lismo".¹³ La inclinación hacia posiciones democráticas quedaría demostrada poco después en los fusilamientos de José León Suárez y la resistencia al imperia lismo en el ingreso al FMI y al Banco Mundial, así como en la ratificación de la carta de la OEA.

Pero una vez hechas las declaraciones de amor restaba un problema que en ese mo

¹¹ Alain Rouquié, op. cit., p. 134.

¹² Arturo Frondizi, Ni odio ni miedo: reconstruir el país, Buenos Aires S.E.P.A., 1956, p. 43.

¹³ Victorio Codovilla, Perspectivas de desarrollo de la situación política argentina, Nueva Era, año VII, núm. 5, oct-nov 1955, p. 7.

mento quitó el sueño a más de un político argentino. ¿Quién heredaría el caudal electoral peronista? Socialistas y comunistas disputaban el espacio en los sin dicatos con la ilusión de acceder por fin a la huidiza clase obrera argentina. Dentro del radicalismo se libraría de inmediato una batalla entre quienes permanecían muy fieles a los principios de la Revolución Libertadora atacando los abusos de la demagogia y quienes estaban dispuestos a recurrir a la demagogia que fuera necesaria con tal de llevar el agua peronista a su propio molino. Tal fue el caso de Frondizi, líder de la corriente intransigente del partido. Este sector criticaba al peronismo desde una posición supuestamente más radicalizada. Sostenía que la política petrolera del 54 había sido una traición a la soberanía nacional, que la actitud del peronismo de frenar la formación de un sistema panamericano obedecía más a sus lazos con Inglaterra que a una voluntad antiim perialista y postulaban la necesidad de realizar modificaciones más profundas que las impulsadas por el peronismo. Intentaban transformarse así en herederos "por la izquierda" del peronismo; retomaban sus banderas y se proclamaban defen sores de los intereses nacionales y populares. Eran antiimperialistas por exce lencia aunque en realidad, una vez que llegaran al gobierno, darían una ingeren cia a los capitales extranjeros inédita hasta entonces.

Esta posición, que rompía con los acuerdos de la Libertadora y se acercaba pe- ligrosamente al enemigo peronista, resultaba sospechosa para los militares y pa- ra sectores del propio radicalismo. Así, a raíz de un conflicto interno se pro dujo una fractura que formó la UCRP, fracción que desde ese momento pasó a cum plir el papel de "sucesora" de los militares.

La alarma de muchos sectores de la sociedad por el "contubernio" de Frondizi con el reciente enemigo, hizo que aquél reformulara su política y que fuera a comodándola en un giro más que notable.

Una vez transcurrida la Asamblea Constituyente y preparando ya el campo electo ral, la UCRI pasó de proponerse como el representante del pueblo, liderado por

la clase obrera, a intentar fungir como representante de la burguesía nacional, clase dirigente de la alianza con los obreros, para lograr el desplazamiento de los terratenientes y de los intereses ingleses. Según su proyecto, en el frente nacional la clase obrera estaría representada por el peronismo; la burguesía nacional, que ostentaría la hegemonía, estaría representada por la intransigencia. Tales virajes resultaban poco confiables para todos. Pero lo cierto es que con este gran esquema y un programa más que indefinido que no hablaba de reforma agraria, ni de nacionalizaciones, ni de independencia en la política exterior fue como la intransigencia ganó las elecciones presidenciales. Claro que en realidad su triunfo se debió a un programa no difundido entonces, pero no por eso menos real: los acuerdos hechos con Perón, que le aseguraron el voto de su partido. Los mismos consistían en la promesa de una normalización sindical que mantuviera la hegemonía peronista en el movimiento obrero; la legalización política del partido y el levantamiento de las medidas restrictivas que contra él se habían impuesto.

Las elecciones en las que ganó Frondizi tuvieron la peculiaridad de que todas las fuerzas políticas votaron a un partido, no en virtud de su plataforma, sino en representación de un tercero que no participaba en la contienda. Es que en realidad se seguía librando el enfrentamiento entre el peronismo y las Fuerzas Armadas de la Revolución Libertadora y ninguno estaba representado electoralmente. En efecto, los votos por la UCRP eran los votos por la continuidad gorila; a su vez, la mayor parte de los votos por Frondizi eran los votos peronistas que no apoyaban al candidato desarrollista más que para lograr sus objetivos y, desde el punto de vista de Perón, cortar el posible avance de las corrientes neoperonistas que habían comenzado a proliferar en la situación de proscripción. Se dio pues un hecho paradójico y es que un candidato radical, cuyo juego había sido utilizar el caudal de votos peronistas suponiendo una posible absorción de esa fuerza, terminaba ganando gracias al peronismo, que celebraba este triunfo

como propio, pero no en virtud de su incorporación al desarrollismo sino con una voluntad de poder renovada.

Otro aparente contrasentido, pero que en realidad no muestra más que la debilidad interna del proyecto desarrollista, lo constituye el hecho de que el comunismo apoyó su candidatura ya que tenía fuertes vínculos con Frigerio, hombre de confianza del presidente, pero a pesar de ello fue precisamente durante su gobierno que, a instancias del ejecutivo, se elevó al parlamento un proyecto de ley contra los partidos de izquierda.

Mucho se habló de traición en el caso de Frondizi pero más bien se debería ver la inconsecuencia de un proyecto político que por carecer de solidez interna pasó de una imagen popular en el momento de las promesas a una política cada vez más sujeta a los factores de poder en el momento de las realizaciones.

Todo parece indicar que al desarrollismo le faltó fuerza interna en la formulación y sostenimiento de un programa. Esto le restó los pocos aliados sinceros que tenía, puesto que muchos de ellos eran menos que circunstanciales. No obstante, no sólo no supo mantener el apoyo de estos últimos sino que fue perdiendo el de sus propios hombres, a quienes tampoco dudó en abandonar ante el miedo de ser derrocado.

Frondizi se fue aislando, favoreciendo, en lugar de retrasar las posibilidades de un golpe contra su gobierno. No hubo presidente en la Argentina que padeciera las amenazas de golpe que sufrió el frondicismo en cuanto a cantidad. Pero algo realmente claro durante el periodo fue la complicidad desplegada por los sectores políticos y cómo ellos mismos utilizaron el golpe como el instrumento de presión con el que se podía asustar al gobierno.

Ya aun antes de que asumiera Frondizi, estando electo, Julio A. Noble, político de la Junta Consultiva, señaló ante la alianza con el peronismo: "Si el futuro gobierno constitucional... surge a impulsos de un gobierno signado por la demagogia, si la movilización ciudadana que lo cree se logra con promesas exagera-

das, con afirmaciones destinadas a exasperar los instintos y pasiones primarias de las masas, no tendrá estabilidad y estará a tiro del golpe de estado".¹⁴

La otra rama del radicalismo, la UCRP no ahorró declaraciones golpistas. El 25 de agosto del mismo año 1958, Crisólogo Larralde, presidente del comité nacional de la UCRP dijo "El radicalismo no desea pronunciamientos, pero está seguro que será el gobierno quien los provoque si no escucha al país".¹⁵ En septiembre del mismo año, Zavala Ortiz, dirigente del mismo partido sostenía "...estamos en un estado totalitario... ¿Cuál es la legalidad cuyo acatamiento se nos recomienda?"¹⁶ y como broche de oro Ricardo Balbín, máximo líder de los radicales del pueblo, en ese mismo mes y año se atrevió a decir, muy revolucionario él, que "Quienes hablan de golpismo pretenden ante todo desacreditar a la revolución como derecho natural de las sociedades".¹⁷

Estas declaraciones se hacían durante el primer año de gobierno. El tono de civiles y militares fue subiendo a lo largo de los cuatro años siguientes.

El peronismo, aunque no hizo declaraciones golpistas, era indudablemente el elemento de fondo que provocaba el temor de las Fuerzas Armadas y los partidos liberales. Su actitud durante el periodo consistió en recuperar un espacio legal, primero, lo que logró con los sindicatos y hacia el final del gobierno con la participación victoriosa en las elecciones. Fue una etapa de reconstitución de sus fuerzas y de pase de una situación de derrota a lo que el propio movimiento llamó de "resistencia". Esta resistencia, hecha fundamentalmente en las fábricas mediante el sabotaje a la producción intentaba recuperar de alguna manera el espacio perdido por el movimiento obrero en cuanto a la negociación de sus condiciones económicas. También lograba de hecho una presencia contundente en la escena política nacional. Fue la época de los "caños" (explosivos caseros) que estallaban en toda la ciudad dirigidos especialmente al sabotaje del aparato productivo.

¹⁴ Alain Rouquié, op. cit., pp. 160-165

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

El accionar sindical contribuyó a la debilidad del gobierno constitucional y seguramente alentó de manera indirecta a los planteos y posiciones golpistas. Es indudable que el peronismo en ningún momento se planteó sostener al gobierno (no digo apoyarlo sino sostenerlo) y que desarrolló una oposición lo más desestabilizadora posible mientras contemplaba cómo caía por la acción de los mismos que habían derrocado antes a su gobierno.

Cuando en 1962 Frondizi fue derrocado todos los sectores políticos consultados, entre los que no figuraba el peronismo, por supuesto, estuvieron de acuerdo. Un grupo de académicos importantes publicó en el diario La Prensa "Las Fuerzas Armadas... se vieron obligadas a derrocar la nueva dictadura que se había entronizado subrepticamente, gracias a las alianzas inconfesables y el apoyo del comunismo internacional". 18

Finalmente, las fuerzas políticas habían sido incapaces de manifestarse y disputar el poder en su terreno. Aun con la proscripción del partido mayoritario eran impotentes para estructurar un proyecto en común o por lo menos para establecer un pacto de respeto a sus respectivas alternativas. No existía una propuesta política coherente que continuara la Revolución Libertadora y pudiera disputar la hegemonía política. Tampoco existía un proyecto de la izquierda radical. Sólo el peronismo se mantenía como una especie de gigante del que no se veían más que las fuerzas puesto que, condenado a la oposición y sin participación como se encontraba, tampoco debía poner en juego su capacidad de estructurar una nueva propuesta política. La Argentina se alejaba gradualmente de lo que había sido en 1943. Era preciso definir nuevas políticas para concretar las grandes consignas peronistas que seguían vigentes: independencia económica, soberanía política y justicia social.

18 Alain Rouquié, op. cit., p. 189.

Los sindicatos

Desde el punto de vista sindical este periodo estuvo signado, en una primera e tapa, por un retroceso violento de las conquistas de la clase obrera y de su ca pacidad de participación en las decisiones políticas nacionales. Esta marginación provocó como respuesta las formas de organización semiclandestinas y la re activación del movimiento sindical, pero bajo pautas diferentes

Es necesario considerar que se trataba de un movimiento que nació y creció al amparo del gobierno, es decir con el apoyo oficial. A partir del golpe de 1955 el sindicalismo argentino hizo su aprendizaje de lucha a contramano del poder. Durante este periodo se convirtió en el portavoz más importante del peronismo, en una especie de bastión inexpugnable. Perdidas las esperanzas de un movimiento militar después de los fusilamientos de 1956, y marginados los dirigentes po líticos por la proscripción, el sindicalismo era el canal de expresión más acce sible para el peronismo y por otra parte constituía un terreno que nadie podía disputarle.

Al producirse el golpe de 1955, y con la implantación del Plan Prebisch, se su primió de inmediato la ley de asociaciones profesionales que consistía básicamente en el sindicato único y se reglamentó el derecho de huelga. Pasada la sorpresa inicial, casi de inmediato se comenzaron a multiplicar los conflictos de trabajo y las huelgas en defensa de los sindicatos intervenidos. Aunque estos conflictos no tuvieron resultados satisfactorios, contribuyeron a crear en el sector obrero conciencia de su unidad y de la importancia que podía llegar a tener el movimiento sindical para permitir o impedir una estabilidad política.

En 1955 en la Capital Federal se registraron 21 conflictos, que involucraron a 11 990 trabajadores con la pérdida de 144 120 jornadas de trabajo; en 1956 los conflictos ascendieron a 52 y participaron en ellos 853 994 trabajadores, con

lo que se perdieron 5 167 294 jornadas de trabajo.

Al año siguiente se formó el Comando Sindical Peronista para reconquistar los gremios intervenidos. Este comando tenía una orientación ortodoxa y anticonciliacionista y fue el germen de las 62 Organizaciones que existen hasta la fecha. Al mismo tiempo se comenzó a perfilar una corriente conciliadora con el gobierno a la que se llamó CGT negra, pero que era minoritaria.

Al convocar el gobierno al congreso extraordinario de la CGT en 1957, las representaciones fueron las siguientes: las 62 Organizaciones llevaron 52 sindicatos y 80 delegaciones regionales con un total de 1 206 285 afiliados; las 32 Organizaciones (adictas al gobierno) llevaron 9 sindicatos y 194 750 afiliados; el MUCS (Partido Comunista) 5 sindicatos con 52 960 afiliados; los sindicatos independientes 11 sindicatos con 492 124 afiliados y varios pequeños gremios que contaban con 86 205 afiliados en total. Además, si se toma en cuenta al proletariado industrial, las 62 Organizaciones representaban el 95 % del mismo.

Al asumir Frondizi, las huelgas no disminuyeron sino que aumentaron considerablemente, sobre todo durante 1959, después del lanzamiento del plan económico del gobierno. Las luchas no sólo se intensificaron sino que cobraron un sentido político de oposición, junto con lo que se llamó la Resistencia que culminaría años después en el Plan de Lucha de la CGT. Proliferaron las huelgas insurreccionales entre las que se destacó la de los frigoríficos, reprimida por el ejército, y las metalúrgicas, acompañadas de sabotaje sistemático. La respuesta del gobierno fue la represión y la instalación del estado de sitio primero y del Plan Conintes más tarde; ostentaba ante la clase obrera la firmeza de la que carecía ante las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto las tendencias conciliadoras se fueron desarrollando de manera que, cuando en 1960 se encaró la normalización de la CGT, se procedió a una representación cuya mitad era peronista y la otra mitad era independiente, lo que no reflejaba la relación de fuerzas real. El peronismo aceptó entonces la impo

sición de compartir la dirección con grupos minoritarios, y esto no frenó la ola de huelgas y conflictos. Mientras tanto se desarrollaba el caudillismo sindical, que mediante ciertos líderes como Vandor y Taccone comenzaría a cuestionar el liderazgo de Perón. Ya en 1961, por los manejos del vandorismo, el peronismo se presentó dividido a las elecciones para gobernador en la provincia de Santa Fe, lo que ocasionó la pérdida de los comicios.

Estos serían signos que Perón habría visto con alarma y que determinaron la presentación de candidatos peronistas a las elecciones de 1962, en lugar de una decisión de voto en blanco que daba lugar al surgimiento de caudillos menores. La disputa por la hegemonía dentro del movimiento sindical iría conformando ciertos grupos de mayor poder interno que, no casualmente coincidían con aquellos sindicatos que además de numerosos representaban a las industrias más dinámicas y, por lo tanto eran también los mejor remunerados. De esta fecha data la importancia que mantiene hasta el presente la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lugar de nacimiento de aquel vandorismo y posteriormente centro de la burocracia sindical más recalcitrante.

Las Fuerzas Armadas

Al producir la Revolución Libertadora, los militares "redimían" al país una vez más. "El gobierno revolucionario desea que todos los argentinos que tengan culpas las admitan en el grado en que las tengan y aprendan la lección. Los unos por haber engañado, los otros por dejarse engañar y los más por haber permitido el engaño", sentenciaba el general Aramburu. 19

19 Pedro Eugenio Aramburu, op. cit., Mensaje del litoral, p. 46

Pero más allá de la exortación al examen de conciencia, el nuevo gobierno se mostraba dispuesto a "dar lecciones", tal como lo demostraría con la sublevación del general Valle.

El peronismo, que contaba con aliados dentro de las Fuerzas Armadas, para no escapar a la lógica golpista generalizada, también pensó en la recuperación del go**bi**erno mediante un golpe favorable. En 1956 se produjo una rebelión armada en varios puntos del país, especialmente en La Plata y en la Escuela de Soboficiales Sargento Cabral. El levantamiento fracasó y se inició un procedimiento sumario a los líderes y simples sospechosos, que en menos de 24 horas habían sido fusilados. Las ejecuciones fueron 38. Era la primera vez que un intento de golpe se reprimía de esta manera que, después de los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955 constituía el segundo acto sangriento de la Revolución contra los peronistas. Cabe decir que entre los fusilados figuraban personas que ni siquiera habían participado del complot. Rojas y Aramburu avalaron los fusilamientos, que fueron otra de las heridas que no cerrarían fácilmente en la vida nacional. Si la política gorila era dura en la erradicación del peronismo, en este caso debería serlo doblemente puesto que el hecho reunía algunas de las características más irritativas del peronismo. Por una parte, se habían dado manifestaciones de subalternos contra oficiales, en particular en la Escuela de Mecánica donde los suboficiales arrestaron a sus jefes; por si esto fuera poco, los insurrectos estaban complotados con los sindicalistas. En el mismo hecho se reunían por lo menos dos de las "fobias" castrenses.

Una vez efectuada la ofensiva gorila, la aparición de la intransigencia en un pacto con el enemigo desplazado despertó los temores de las Fuerzas Armadas, quienes por este solo hecho jamás confiaron en el gobierno de Frondizi. Ante el triunfo electoral intransigente se perfilaron dos posiciones: la gorila que proponía no entregar el gobierno y la legalista, representada por el general Aramburu, que quería dar el gobierno pero mantener el poder. Esta última

fue la que se impuso.

Durante el mandato de Frondizi, las Fuerzas Armadas hicieron entre 32 y 34 "planes" que significaron en todos los casos una amenaza más o menos abierta de golpe. No tendría sentido aquí ponernos a detallarlos todos, ni siquiera los más sobresalientes, lo determinante es que lograron imponer sus decisiones, en la esfera económica, en la política, en las relaciones exteriores del país, contando con un gobierno terriblemente débil que cedió terreno en forma ininterrumpida y con un conjunto social que permitió y alentó la interferencia.

Una característica saliente de este periodo fue la mayor diferenciación entre las armas, proceso en el que cada una trató de extender su dominio y de ganar espacios. Podríamos decir que se dio una pugna en procura de poder entre las tres armas. Este fue el momento de desarrollo de cada uno de los servicios de informaciones, con autonomía entre sí. Esta independencia, sumada a la necesidad de cada arma de ganar espacios, ocasionó una suerte de hipertrofia de los respectivos servicios que alcanzaron un gran poder. También comenzaron a perfilarse algunas características diferenciadoras entre las tres armas

Mientras la marina representó a las fuerzas ultraliberales, asociadas con las posiciones gorilas del contralmirante Rojas, la aeronáutica expresaba a la derecha católica nacionalista, que poco tenía que ver desde un punto de vista ideológico con la primera. El Ejército, por su parte, albergaba en su seno desde sectores de la oficialidad joven, profundamente gorilas, hasta otros más moderados como el lonardismo, sin contar a la oficialidad peronista que fue rápidamente desplazada. A un mes de la Revolución Libertadora ya se había pasado a retiro a 44 generales peronistas, Estas modificaciones internas se superpusieron durante el periodo con otras también importantes y que estaban relacionadas con las condiciones internacionales.

El generalizado auge del liberalismo facilitó el desplazamiento de las tareas de la defensa nacional hacia un segundo o tercer plano. Las Fuerzas Armadas, de

garantes de la sobreanía territorial pasaron a ser garantes de la soberanía continental, en virtud de la aproximación a Estados Unidos y de su política continental. Aramburu fue condecorado en la reunión de presidentes celebrada en julio de 1956 en Panamá. La Argentina suscribió la declaración conjunta, cuyo artículo cuarto decía "En un mundo en que la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales y los valores espirituales de la humanidad están gravemente amenazados por fuerzas totalitarias ajenas a la tradición de nuestros pueblos y sus instituciones, América mantiene el designio supremo de su historia: ser baluarte de la libertad del hombre y de la independencia de las naciones".²⁰

La defensa nacional pasó a diluirse en la defensa del mundo occidental, es decir en un objetivo supranacional. Por fin, Argentina reconocía la hegemonía norteamericana no sólo en el campo económico sino también en el terreno político e ideológico.

La nueva coyuntura internacional, sobre todo después de la revolución cubana, ponía a las Fuerzas Armadas ante una forma de guerra diferente, no convencional, entre oriente y occidente, por lo menos en términos de la doctrina formulada por ellas mismas. Para enfrentarla era necesario manejar la contrainsurgencia y, por lo tanto, se estrecharon los vínculos con el ejército francés y se intensificaron los intercambios con el de Estados Unidos.

En términos nacionales, los militares identificaban peronismo, comunismo y totalitarismo, como variantes que pretendían destruir el liberalismo. La democracia en cambio, por su propia debilidad era hasta cierto punto responsable del avance de estas doctrinas. Por lo tanto, respaldaban una democracia restringida y de "mano fuerte".

La concepción, un poco paranoica, les permitía autoadjudicarse un papel de gran importancia en virtud de la magnitud del peligro, "a grandes males, grandes remedios".

El coronel Rómulo Menéndez, en un artículo publicado en la Revista Militar en

²⁰ Pedro Eugenio Aramburu, op. cit., p. 110.

1961, afirmaba con toda seriedad: "Es oportuno mencionar que Kruschew dijo recientemente que la República Argentina sería el próximo país que caería en manos comunistas"²¹ lo que justificaba la vigilancia persistente sobre el gobierno para impedir la infiltración enemiga.

Junto a esta misión de garantizar las fronteras continentales, y aprovechando todos los espacios sobre los que pudieran avanzar, los militares interfirieron en el orden económico y social y actuaron en la represión, entrometiéndose sin descanso en las decisiones de cualquier orden. La imposición de sus opiniones en la esfera del poder civil significó una vuelta de tuerca más en su escalada de acrecentamiento de poder dentro de la estructura social argentina. Vetaron medidas económicas, derribaron gobernadores, impusieron sus lineamientos en la política exterior, ocuparon fábricas y reprimieron directamente cuando lo consideraron necesario, condicionaron los gabinetes y, finalmente, anularon elecciones de carácter nacional y derribaron al presidente. Sin embargo, aún carecían de un proyecto para gobernar por sí mismos.

²¹ En Alain Rouquié, op. cit., p. 157.

CAPITULO IV

EL PODER MILITAR SE CONSOLIDA

(1962-1966)

CAPITULO IV

EL PODER MILITAR SE CONSOLIDA

El ejército argentino se organizará y preparará para ser instrumento de la disuasión, amenaza directa, presión indirecta o violencia en la consecución del Crecimiento Nacional.

Teniente coronel Mario Horacio Orsolini

Marco histórico

A pesar de haber dado cuatro golpes en el lapso de 32 años (con un promedio de ocho años entre uno y otro) el aparato militar no tenía una posición homogénea. Por el contrario enfrentaba grandes diferencias internas que incluso hacían peligrar la unidad de la institución. El estado deliberativo propiciado durante la presidencia de Frondizi había generado corrientes de opinión divergentes que desbordaban, en algunos casos, la estructura jerárquica. Desde el momento de decidir la sucesión de Frondizi habían irrumpido las contradicciones entre lo que se perfilaba como dos sectores, perfectamente diferenciados:

Los ultraliberales, representados por una fracción minúscula del ejército (sobre todo de infantería) y por la marina, se proponían instaurar un régimen militar presidido por ellos mismos, intervenir de inmediato todas las provincias, proscribir al peronismo y al frondicismo (que se había revelado como su aliado) y reformar la ley de asociaciones profesionales que mantenía la continuidad de las conducciones peronistas en los sindicatos.

En cambio, sectores importantes de la caballería, preocupados por el riesgo que representaba para el ejército la politización de su estructura, desaprobaban a quella opción e impulsaban el nombramiento de Guido. La "operación Guido" contaba además con el apoyo de dirigentes intransigentes y del presidente de la cámara de diputados, lo que cubría ciertos requisitos legales. Estos militares proponían un gobierno de fachada civil que resultaría más potable, sobre todo para Estados Unidos, (cuyo presidente, John Kennedy, había apoyado la experiencia frondicista), y se planteaban una estrategia política que permitiera integrar al peronismo, con la exclusión de Perón. En definitiva, estaban convencidos de que las masas podrían ser manejadas a su antojo y conducidas hacia un proyecto potable al quedar alejadas de su peligrosos dirigente.

Estas diferencias de opinión llevaron a múltiples amenazas, presiones y enfrentamientos, que culminaron en la adopción de una salida legalista en cuanto al ejecutivo.

En un primer momento, Guido formó su gabinete con los antiguos ministros de Frondizi, buscando una imagen que diera cierta continuidad al orden constitucional. Pero el 24 de abril, a menos de un mes de la asunción del nuevo presidente, se dictaba el decreto de anulación de las elecciones, que provocó la renuncia del gabinete y la formación de otro con participación de radicales del pueblo en las carteras clave, como Interior y Defensa. La designación de los nuevos ministros no daba lugar a dudas sobre los sectores representados en el nuevo gobierno: de un total de ocho, seis de ellos pertenecían al Jockey Club (centro social de la gran burguesía agroexportadora argentina) y dos eran ganaderos. Por su parte, el ministro del Interior, doctor Jorge Walter Perkins, se proponía encontrar una solución política al problema del peronismo. Su proyecto consistía en dar a luz una corriente que incluyera a los sectores peronistas, integrándolos con otras fuerzas, como forma de absorber el movimiento y separarlo de su líder, figura que se consideraba no sólo irritativa sino además peli-

grosa. En definitiva, una nueva versión de la intentona frondicista, pero partiendo de la total exclusión de Perón. La propuesta se basaba en la posibilidad de derrotar democráticamente al peronismo, debilitándolo con la inclusión de sectores importantes de él dentro del Frente Nacional. Además se planteaba una reforma electoral; un sistema de representación indirecta permitiría la alianza de los electores de diferentes partidos contrarios al peronismo, para lograr su derrota.

Esta línea de acción encontraba una fuerte resistencia en los sectores duros de las Fuerzas Armadas, que presionaban al gobierno. La existencia de dos líneas contradictorias en el aparato militar provocaba una pugna permanente por el logro de la hegemonía, que se fue agudizando paulatinamente. Sólo 20 días después de la asunción de Guido, el 20 de abril de 1962, se produjo el primer choque directo entre los dos sectores: el general Rauch desplazó al comandante en jefe del ejército, general Poggi, mediante el despliegue de tropas y tanques.

El 24 de junio, por las presiones de los sectores ultraliberales y ante la imposibilidad de controlar al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIDE) que había crecido durante el frondicismo y ahora actuaba por su cuenta, sin acuerdo del Ministerio del Interior, se produjo la renuncia del ministro, rápidamente reemplazado por un radical allegado a las posiciones "duras".

El funcionario que se designó en su lugar logró la aprobación de un estatuto de los partidos políticos que proscribía al peronismo y eliminaba las posibles candidaturas de dirigentes sindicales. También se aprobó la limitación del derecho de huelga en los servicios públicos.

Estos cambios eran la expresión institucional de la lucha que se estaba librando en el ámbito castrense.

En el mes de agosto, el general Toranzo Montero, ultraliberal, se declaró en rebeldía por considerar que las posiciones del secretario de ejército eran demasiado tolerantes con el peronismo. Representaba a un sector minoritario del ar

ma, pero contaba con el apoyo de la marina y la aeronáutica.

La intervención del presidente provisional permitió salvar el problema sin llegar al enfrentamiento directo. Como consecuencia, renunció el secretario del arma y el presidente colocó en su lugar a uno de los jefes rebeldes. El general Onganía, líder de los legalistas se pronunció entonces en contra de los sublevados, condenándolos de manera pública. Los legalistas no perdonaban al otro bando que hubiera: dado ingerencia a la marina en los problemas internos del ejército. La invasión de jurisdicciones resultaba inaceptable para los militares argentinos, quienes guardan celosamente sus espacios de poder.

Pocos días después, Campo de Mayo, guarnición de primera importancia, alineada con las fuerzas legales, exigió la renuncia de dos oficiales superiores que habían sido reincorporados, en contra de las normas de la institución, que prohíben tal procedimiento. Su posición se debía más que al hecho de que los oficiales eran rebeldes, a lo que entendían como la defensa de la institución militar mediante el respeto a sus reglamentaciones y jerarquías. Las posiciones legalistas trataban de impedir, antes que nada, el desmembramiento de las instituciones armadas.

El pronunciamiento de Campo de Mayo desencadenó un enfrentamiento abierto entre ambos sectores, con cuatro días de escaramuzas, en los que se definieron los dos bandos: azules y colorados.

Los primeros proponían la subordinación de las Fuerzas Armadas a las civiles y el retorno al profesionalismo militar, como única vía para salvar a la institución. Insistían en el principio de disciplina interna, que se veía resquebrajado por los constantes pronunciamientos con los consecuentes desbordes de las jerarquías, lo que minaba a la institución. Se adjudicaban el papel de defensores de la legalidad y su estrategia consistía en la asimilación del peronismo, por lo que proponían el llamado a elecciones libres y apoyaban, bajo cuerda, el proyecto de crear un frente que incluyera y neutralizara al peronismo.

Por su parte, los colorados eran golpistas y promovían la intervención de las Fuerzas Armadas en la esfera política, lo que daba lugar a un estado deliberativo de las mismas. Se identificaban con los sectores "gorilas" y ultraliberales. Las distintas posiciones sobre la situación interna de las Fuerzas Armadas y el grado de ingerencia que éstas debían tener en la vida política nacional fueron decisivas, aunque se las debe interpretar como diferencias de tipo coyuntural más que de principios, puesto que aun los defensores más acérrimos de las posiciones azules participarían, sólo cuatro años después, en otro golpe de estado. Lo que sí parece haber sido una importante divisoria de aguas entre los dos grupos fue la actitud a asumir en relación con el peronismo. Los azules siempre buscaron el entendimiento y la alianza con sectores de este partido, en tanto que los colorados proponían la marginación y represión del movimiento, al que caracterizaban como antidemocrático, y por lo tanto no aceptaban su inclusión en el juego constitucional.

El hecho de que la actitud ante el peronismo fue el eje de las diferencias y no la ingerencia en el poder civil queda bastante claro por las buenas relaciones que mantuvieron los radicales del pueblo con el sector colorado, a pesar de que la UCRP era una fuerza política que aspiraba a librar la contienda electoral. Se podría decir que los azules tuvieron la virtud de poseer un pensamiento más político, menos compulsado por el temor de las masas y seguramente más conciente de las contradicciones internas del peronismo, puesto que siempre jugaron a la división del mismo y a la capitalización de ciertos sectores para sus propios proyectos, cosa que efectivamente consiguieron.

Por su parte, los colorados parecen haber comprendido desde un principio que el peronismo constituía una fuerza política terriblemente amenazante para su proyecto. Desde el primer momento de la Revolución Libertadora, los ultraliberales se propusieron una respuesta represiva puesto que nunca creyeron en la autodesaparición del peronismo, por efecto de la caída de su aparato de Estado.

En este aspecto su visión fue mucho más acertada. De la misma manera comprendían el contenido de clase que el movimiento tenía, cada vez más definido, y el peligro que esto entrañaba. Si proponían la proscripción era porque en definitiva sabían que nunca podrían ganar electoralmente al peronismo, lo cual se demostró como cierto, aunque es importante señalar que su actitud tenía el efecto contrario del buscado. En lugar de desintegrar al peronismo, lo unía y radicalizaba de manera creciente.

Las diferencias entre azules y colorados afectaban al proyecto político nacional y tenían serias repercusiones en el orden y las perspectivas de la institución militar.

Al producirse el enfrentamiento, la aeronáutica tomó primero una actitud neutral, para después apoyar a los azules. La marina permaneció neutral puesto que dentro de sus filas no había una posición homogénea, aunque sectores importantes simpatizaban con los colorados. De hecho, 19 almirantes renunciarían al producirse el triunfo azul.

En el ejército, el arma de caballería, de gran poder interno, era netamente azul; la artillería y la infantería se inclinaban por los colorados.

La composición de los oficiales colorados que se sublevaron era la siguiente: de 62 oficiales, 35 pertenecían a infantería, 20 a artillería y sólo 7 a caballería.

Los enfrentamientos dieron el triunfo completo a los azules, con lo que se ratificó la decisión de llamar a elecciones para presidente. Se emitió entonces el comunicado 150 de Campo de Mayo, en el que se consagraba el profesionalismo castrense y el retorno a las funciones específicas así como la restauración de la jerarquía y la disciplina. Entre sus puntos más importantes reafirmaba el derecho a votar de todo el pueblo, la imposibilidad de un retorno al pasado (en obvia alusión a que no se permitiría un regreso del peronismo en su versión conocida).

que ninguna corriente ostentaría el monopolio de lo político y la subordinación del poder militar al poder civil, elegido por el libre sufragio.

Con la derrota de los colorados se volvió a instalar a Matínez (del gabinete de Frondizi) en el ministerio del Interior y se reflató el proyecto de formación de un frente para las elecciones que se celebrarían en el primer semestre del año siguiente. El frente se proyectaba como una alianza de productores que abarcaba a industriales y obreros bajo el ala protectora de un ejército industrialista. El peronismo participaría a través de la Unión Popular, nucleamiento neoperonista que tenía la aprobación de Perón.

Pero el proyecto frentista contaba con una fuerte oposición. Los sectores colorados de las Fuerzas Armadas se oponían radicalmente a la legalización de la Unión Popular; los radicales atacaban la propuesta del frente puesto que les quitaría votos en los comicios y un sector del sindicalismo peronista, conciente del intento de asimilación de su partido, se oponía y denunciaba al frente como un proyecto militar.

El 18 de marzo de 1963, ya sobre la fecha de las elecciones, la marina pidió públicamente que se dejara sin efecto la personería gremial de la Unión Popular, afirmando que no se oponía a las elecciones pero sí a la posibilidad de un gobierno peronista. Al mismo tiempo, un viejo político ligado con los colorados, el doctor Zavala Ortiz denunció que se le había ofrecido la vicepresidencia del Frente Nacional y Popular, que declinó; también denunciaba que el proyecto frentista consistía en rodear al peronismo con partidos de diversas orientaciones para restar peso a Perón y facilitar la aceptación de las Fuerzas Armadas. Estas revelaciones provocaron la renuncia de Martínez y el comienzo de desintegración del frente.

Se produjo entonces un nuevo levantamiento encabezado por el general Menéndez, con apoyo de la marina y el sector nacionalista de la aeronáutica. La lucha fue sangrienta, con un saldo de 15 muertos y 50 heridos, y culminó con el triunfo

de los azules. En esta oportunidad los colorados no sólo reaccionaban contra el proyecto de formación del Frente Nacional sino que negaban los postulados del comunicado 150 de Campo de Mayo y pedían el no retorno al régimen constitucional. Pero sobre todo los colorados se proponían demostrar que no eran un sector despreciable, y pretendían hacer sentir su voz. De hecho, el comunicado que emitieron los azules una vez aplacado el levantamiento, insistía en que habría elecciones pero ponía énfasis, al mismo tiempo, en que el peronismo no podía retornar. Un mes después, el 19 de mayo se dio a conocer un decreto que limitaba la participación de la Unión Popular. En junio la Corte Suprema ratificaba la prohibición de presentar electores a la Unión Popular. En el mismo mes se vetaron todas las listas en las que participaban peronistas o ex peronistas. Así, nuevamente se adoptaba una posición negociada que no ponía en peligro la unidad de las Fuerzas Armadas: se mantenía la promesa electoral, punto principal de los planteos azules, pero se impedía la participación peronista, punto principal de los planteos colorados. En definitiva, se abrió un "impasse" para volver a definir una posición hegemónica. Mientras tanto, los mandos seguían en manos de los jefes azules.

Las fuerzas políticas importantes se retiraron del Frente, que virtualmente se desintegró.

La UCRP, la UCRI y la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), liderada por el general Aramburu, presentaron candidatos propios: Frondizi y Perón, antiguos integrantes del Frente, dieron la orden de voto en blanco y pocas horas antes de las elecciones, Solano Lima, candidato del Frente, anunció que su agrupamiento votaría también en blanco.

Los resultados electorales fueron los siguientes:

Partido	Votos	Porcentaje	Electores
UCRP	2,441,064	25.15	168
UCRI	1,593,002	16.40	110
UDELPA	726,861	7.49	72
En blanco	2,058,131	21.21	

Fuente: Darío Cantón, Elecciones y partidos políticos en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 277.

Por primera vez se usaba el sistema de elección indirecta. La participación electoral fue muy elevada, ya que votó el 85.5 % de los ciudadanos. El porcentaje de votos en blanco disminuyó en relación con los comicios de 1957 y 1960, también con proscipciones, puesto que buena parte del electorado quiso asegurar la derrota de UDELPA, agrupamiento que representaba la continuidad de la Revolución Libertadora. Por primera vez los peronistas obtuvieron bancas en el congreso, después de 1955, a través de nucleamientos neoperonistas provinciales. Los electores de los distintos partidos decidieron dar su apoyo al partido más numeroso y nominaron al doctor Arturo Illia, candidato de la UCRP, a la presidencia de la Nación.

El gobierno del doctor Illia se caracterizó por la escasa participación de los demás partidos y la deficiente comunicación con ellos, en gran parte como consecuencia de una práctica de partidocracia cerrada, a la que se vio obligado el presidente por no ser el líder real del partido que representaba.

La UCRP, ante el proyecto frentista, había nominado un candidato de segunda línea, para no desgastar a su dirigente nacional, el doctor Ricardo Balbín, en unas elecciones que daba por perdidas y cuya realización misma era dudosa. Esto provocó una serie de divergencias internas que el partido gobernante debía atender para mantener su unidad. Por otra parte, la comunicación con los sindicatos

y con las Fuerzas Armadas también eran deficientes.

En el caso de estas últimas, los radicales tenían mejores relaciones con los colorados que con los azules, pero su poder no era suficiente como para lograr la reintegración de sus aliados y desplazar a los azules. Sin embargo, fueron colocando a los militares más afines a su política en los puestos de confianza del aparato estatal, aunque las jerarquías castrenses permanecieron en manos de los azules. Esta circunstancia creó una situación de cierta hostilidad por parte de las Fuerzas Armadas, a la que se sumó la escasa relación con los partidos políticos y el hecho de que los radicales no contaban con mayoría en las cámaras. Por su parte, la relación con los sindicatos no ofrecía menos dificultades. Illia había asumido la presidencia el 12 de octubre y ya en el mes de diciembre la CGT realizaba duras críticas, que fueron subiendo de tono hasta que, en febrero de 1964, anunció el Plan de Lucha en el que se ocupó un total de 11,000 establecimientos en el término de dos meses, con la participación de casi cuatro millones de trabajadores. El enfrentamiento con el gobierno era tan desafiante que el dirigente sindical Alonso, líder de la industria del vestido, declaró públicamente que las ocupaciones de fábricas constituían actos legítimos. Al mismo tiempo se comenzó a desplegar la campaña por el retorno de Perón, a la que se le dio una gran difusión. Perón tenía interés en acortar las distancias con su movimiento para no perder el control sobre él en momentos en que el vandorismo comenzaba a tomar vuelo propio.

A su vez, esta fracción creía conveniente hacer un público intento de retorno del general, que seguramente sería abortado por el gobierno, para demostrar a las bases peronistas que el regreso del líder era impracticable y lograr así debilitar la imagen de Perón para ganar independencia en sus propias decisiones. El 2 de diciembre, el general Perón emprendió el viaje de retorno a la Argentina, y su avión fue detenido en Río de Janeiro y obligado a regresar a España. La intervención de las autoridades brasileñas en un asunto eminentemente nacio

nal debilitó la imagen del gobierno argentino y agigantó la de Perón, que resultaba una víctima de los acontecimientos. La burocracia sindical tampoco logró aumentar su influencia sino que se la responsabilizó por el fracaso del operativo.

En 1965 se celebraron elecciones legislativas sin proscripciones, para la renovación parcial de las cámaras. El resultado fue la victoria del peronismo, a través de la Unión Popular, aunque con un escaso margen. La UP obtuvo 2,848,000 votos y la UCRP 2,600,000; los intransigentes, que constituyeron la tercera fuerza quedaron muy atrás con sólo 587,000 votos. Esta victoria del peronismo representaba un pésimo augurio para las elecciones presidenciales que debían realizarse dos años después.

Como si esto fuera poco, en octubre de ese mismo año llegó al país la segunda esposa de Perón, en calidad de representante del dirigente. El gobierno radical permitió el ingreso de la señora de Perón, con la esperanza de que las contradicciones internas del peronismo se agudizarían con su presencia y que tal vez lograría frenar el avance de Augusto Timoteo Vandor, tan molesto para el gobierno radical por sus irreductibles posiciones en la lucha sindical, y para entonces con fuertes vínculos con los militares golpistas, que curiosamente no eran los colorados, sino los propios jefes azules.

El enfrentamiento dentro del peronismo no se hizo esperar. En marzo de 1966, seis meses después de la llegada de Isabel Perón, el choque entre Vandor y el jefe del movimiento era notorio. El desafío se hizo patente en oportunidad de las elecciones de Mendoza. El vandorismo apoyó a Serú García como candidato, sin el acuerdo previo de Perón. Isabel, por su parte, hizo nominar a Corvalán Nanclares como representante del peronismo. Los cómputos indicaron la victoria de un tercer candidato, el conservador, pero Corvalán Nanclares obtuvo más votos que Serú García. El resultado era claro: las divisiones debilitaban pero la mayoría seguía apoyando al general exilado.

Este suceso profundizó los lazos del vandomismo con los militares y algunos políticos desarrollistas cercanos, instalados en la desestabilización. El vandomismo ya estaba enrolado en el golpe de estado, que difundía a voz en cuello, y cuya cuenta regresiva había comenzado varios meses antes, más precisamente en noviembre de 1965. En aquel momento, el general Juan Carlos Onganía, comandante en jefe y hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, había sido prácticamente obligado a pasar a situación de retiro. Onganía había destituido a un subordinado sin consultarlo antes con el secretario de Guerra, a raíz de lo cual éste presentó su renuncia. El presidente Illia impuso entonces a un subordinado de Onganía en el puesto vacante, lo que convertía al general de superior en subordinado del nuevo secretario. Esta circunstancia, inaceptable en los códigos de ética militar, forzó la renuncia de Onganía. Desde ese mismo momento, el general "agraviado" comenzó a preparar el golpe de estado que derrocaría a Illia y que modificaría las reglas del juego existentes para intentar la aniquilación de la antinomia peronismo-antiperonismo e impedir las elecciones de 1967. La acción no se debía emprender en una fecha demasiado cercana a las elecciones para no hacer este hecho tan ostensible. El derrocamiento del gobierno se debatía abiertamente. Los medios de difusión, los partidos, las declaraciones y la opinión pública se referían en forma permanente al golpe, al que veían con la naturalidad de los hechos acostumbrados e inevitables. Cuando finalmente se produjo, no constituyó una sorpresa para nadie. En una actitud de provocación, el comandante en jefe del ejército, general Pistarini, pronunció ante Illia un discurso de claro tono golpista. El presidente no dio respuesta pero convocó poco después a todos los comandantes en jefe, quienes acudieron a la entrevista, a excepción del general mencionado. Este desacato provocó su destitución y la asunción del presidente al cargo de comandante. Era lo que el ejército esperaba para proceder. En efecto, dio seis horas al doctor Illia para presentar su renuncia, cosa a la que el primer mandatario se negó. Los golpistas hicieron desalojar al presiden-

te por medio de la policía. En medio de la pasividad de la sociedad entera, Arturo Illia era el octavo presidente de la nación derrocado en el lapso de 36 años.

El mismo 28 de junio el general Onganía asumía la presidencia de facto. Era el general azul que apenas cuatro o tres años antes se erigía en defensor de las instituciones y de la supremacía del poder civil.

¿A qué obedecía el cambio? ¿El contacto con el poder resultaba irresistible para nuestros hombres de armas? ¿Las Fuerzas Armadas constituían el único sector capaz de delinear alternativas de poder en un país cuyas fuerzas políticas mayoritarias seguían resultando amenazantes? ¿La democracia liberal estaba efectivamente agotada en Argentina? Todas estas razones, por lo menos, se conjuntaban e incidían de manera real aunque variable. Detrás el viejo fantasma: cómo ejercer al peronismo. Una nueva alternativa se dibujaba en el proyecto de los nuevos iluminados. Tal vez el corporativismo y la ruptura del sistema democrático fueran la solución del viejo problema. La espiral dibujaba un nuevo círculo.

Marco económico

En 1962 bajó la exportación de granos a raíz de una sequía en la zona pampeana. Para alentar la producción de agricultores y ganaderos se devaluó el peso en un 65 % , lo que ocasionó un aumento de los costos industriales. Esto, sumado a la escasez del crédito y del consumo deterioró la situación de la producción manufacturera: entre mediados de 1962 y mediados de 1963 la cantidad de llamados a convocatoria y quiebras duplicó a las registradas en 1958. El índice de la producción industrial se redujo a 74, tomando para 1961 el valor 100. Las importaciones se gravaron con tasas más altas, que se sumaban a las dificultades que la devaluación había creado para la industria. Una de ellas, de gran importan-

cia, era el aumento de las deudas que las empresas habían contraído en dólares en el exterior, que provocó la liquidación de pequeñas y medianas industrias y su traspaso a manos extranjeras o bien la asociación con capitales foráneos. Sin embargo, aunque los rasgos característicos del periodo siguieron siendo la penetración extranjera y la concentración de capital, el gobierno de Arturo Illia representó un estorbo para esos avances. Sin llegar a afectarlos seriamente, sin embargo, por plantearse la ampliación del mercado interno, el aumento de salarios, la reducción de la desocupación y sobre todo restricciones para el avance de las empresas extranjeras significó una molestia para el capital foráneo y un pequeño respiro para la pequeña y mediana industria, en medio de un marcado proceso de concentración.

El 1963 Illia rescindió los contratos petroleros firmados por Frondizi, en especial los concertados con compañías norteamericanas. Se produjo un distanciamiento de los organismos financieros internacionales y se desalentaron las inversiones extranjeras. Mientras que durante el gobierno de Frondizi, éstas habían alcanzado de 100 a 120 millones de dólares anuales, en 1963 sólo entraron al país 34.6 millones de dólares y en 1964 33.8 millones.

Durante el gobierno radical se intentó poner en práctica un modelo de acumulación basado en la ampliación del mercado interno.

A partir del plan de desarrollo implantado en 1964 se logró un crecimiento del PBI del 8 % anual, que resulta más importante aún si se considera que fue la producción industrial la que aumentó en forma más notable su volumen.

Al mismo tiempo, el plan congelaba las tarifas públicas y establecía precios máximos para los productos de primera necesidad. Estas medidas tendían claramente a la reactivación del mercado interno.

La participación del Estado en el mercado de trigo, la limitación de las importaciones de bienes y equipo y la supresión de las deducciones impositivas para las inversiones agropecuarias resultaban irritativas para los sectores poderosos.

so tanto del agro como de la gran industria.

En suma, el gobierno radical tomaba medidas favorables a la pequeña y mediana industria, es decir a la pequeña y mediana burguesía, que representaba su base de apoyo social.

La Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina no tardaron en protestar por el intervencionismo estatal. También se apresuraron a declarar que se oponían a la ley de salario mínimo, vital y móvil (que consistía en el ajuste anual del sa lario según el costo de vida), porque tendría efectos inflacionarios.

La gran industria sabotó los planes de recuperación económica y hacia fines de 1965 ya se registraba una disminución en la tasa de inversión y cierta recesión industrial.

En 1966 el PBI cayó en 1.2 % y el ingreso per capita perdió alrededor de tres puntos. ¹

En un país con una alta penetración del capital norteamericano, con una considerable concentración de capital y con una burguesía agroexportadora fuerte y li gada al capital extranjero, el proyecto de la pequeña industria parecía haber perdido oportunidad, sobre todo estando huérfano de un movimiento político poderoso en el que asentarse.

A pesar de las intenciones e intentos del gobierno radical, la situación global era la siguiente:

La tasa de incremento anual acumulativo del volumen de la producción por rama de industria indicaba el desarrollo de las industrias dinámicas y el retroceso de las vegetativas que, como se puede observar en el cuadro, tenían índices de crecimiento inferiores al índice global.

¹ Alain Rouquié, op. cit., p. 242.

Tasa de incremento anual acumulativo del volumen de la producción por rama de industria: 1962-1967

Indice general	4.3
Alimentos y bebidas	3.3
Tabaco	0.5
Textil	5.6
Calzado y vestido	2.6
Madera	4.2
Papeles y derivados	2.9
Imprenta y editoriales	2.9
Cueros y pieles	1.1
Caucho	4.3
Productos químicos	7.2
Derivados del petróleo	5
Minerales no metálicos	4.9
Metalúrgica básica	6
Vehículos y maquinarias	4.3
Maquinaria y aparatos eléctricos	2.1
Varios	2.1

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 114.

Entre 1963 y 1969 se observó un desplazamiento de la mano de obra hacia los servicios y transporte, con disminución en el agro y en la industria.

Distribución sectorial de la población total ocupada (en porcentajes)

	1953	1963	1969
Agropecuario y pesca	26.7	22.8	20.3
Minería	0.6	0.6	0.6
Industria manufacturera	23.6	19.4	18.7
Construcción	6.2	5.9	7.5
Comercio	13.3	14.1	14.7
Transporte y comunicaciones	6.4	6.9	7.4
Electricidad, gas y agua	0.7	0.9	0.8
Gobierno	9.4	11.8	11.5
Otros servicios, bancos y vivienda	13.1	17.6	18.6

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 116.

Las empresas extranjeras producían el 34 % del total producido por las industrias dinámicas y sólo el 16 % de las vegetativas, lo que mantenía la tendencia

à la desaparición de la burguesía nacional.

Participación de las empresas extranjeras en el total del valor producido por cada rama industrial, 1963

Valor producción empresas extranjeras	Valor de producción total de cada rama en porcentajes
Total ramas vegetativas	16
Alimentación	15.3
Bebidas	24.1
Tabaco	93.4
Textiles	14.2
Calzado y confección	10.4
Madera y corcho	0.5
Muebles y accesorios	1.2
Papel y derivados	25.7
Imprenta, editoriales, etcétera	1.5
Cuero y pieles	1.5
Industrias varias	2.4
Caucho	72.1
Productos químicos	34.9
Petróleo y derivados	31.2
Productos minerales no metálicos	9.2
Metálicas básicas	21.1
Productos metálicos	8.9
Maquinaria, excluida eléctrica	35.6
Maquinaria eléctrica y aparatos	27.6
Material de transporte	44.4
Total ramas dinámicas	34
Total industrias manufactureras	23.8

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 130

A su vez, por la alta concentración de la industria, la rama concentrada reunía la mayor parte de la producción de la empresa extranjera.

Participación de las empresas extranjeras en el total de la producción nacional manufacturera, según grado de concentración, 1963

Valor de producción de empresas extranjeras	
	Valor de producción total de las ramas respectivas
Rama concentrada	32.4 %
oligopólica	52.9 %
parcial/oligopólica	20.4 %
Rama medianamente concentrada	11.9 %
Rama escasamente concentrada	1.9
Total	24.6 %

Fuente: Mónica Peralta Ramos, op. cit., p. 128.

Así pues, las medidas tomadas por el gobierno radical en beneficio de los capitales pequeños y medianos no lograron revertir el proceso general de concentración de capital, de penetración de capital extranjero y de desocupación creciente.

Los partidos políticos

En 1962 el peronismo representaba antes que nada a la clase obrera, sobre todo en las jurisdicciones con alto desarrollo industrial. Desde un punto de vista electoral estos distritos eran los más importantes en virtud de la concentración de población en Buenos Aires, principalmente, y en Córdoba y Rosario en se

gundo lugar. No se puede olvidar que prácticamente la mitad de la población argentina se concentra en la capital y su cordón industrial.

Por su parte, en el interior del país comenzaron a proliferar dirigentes neoperonistas, que representaban a caudillos con una voluntad de participación electoral y de independencia del jefe ausente. Para ellos era importante ofrecer una imagen del peronismo diferente de la de un partido de clase. Su identificación como peronistas les aseguraba una aproximación a los sectores populares pero sus buenas relaciones con la partidocracia tradicional les permitía esperar una tajada de la contienda electoral, sin poner en peligro los objetivos de "normalización" del gobierno.

Al mismo tiempo que proliferaban estos dirigentes, en el centro mismo del peronismo crecía una nueva tendencia. Durante el periodo anterior, la proscripción política del partido hizo que todo su accionar se canalizara por la actividad gremial, lo que había ocasionado un crecimiento y politización importante del aparato sindical. El poder político de los sindicatos y la necesidad de acordar con ellos una salida nacional, les había hecho concientes de su fuerza. Para ciertos dirigentes que crecieron a la luz de estas circunstancias, su dependencia del liderazgo de Perón resultaba ahora incómoda puesto que entorpecía sus manejos. Este era el caso de Augusto Timoteo Vandor y de otros sindicalistas que consideraban haber cumplido la mayoría de edad política.

La corriente vandorista, aunque era expresión de una clase social perfectamente delimitada se proponía, al igual que el neoperonismo, el logro de acuerdos que le permitieran una participación política. El vandorismo pretendía potabilizar al peronismo y mantuvo buenas relaciones con sectores azules del ejército.

Podría decirse que fue en esta etapa cuando se comenzó a dibujar con bastante claridad la existencia de proyectos disímiles dentro del peronismo.

El neoperonismo y el vandorismo buscaban soluciones negociadas con los militares. Para ambos la presencia de una autoridad superior en la figura de Perón a

fectaba sus planes.

Por otra parte, los sectores que se dieron en llamar ortodoxos mantuvieron su fidelidad al líder y persistieron en una actitud más intransigente.

Al mismo tiempo, Framini, el candidato de las elecciones anuladas por Frondizi, se volcaba hacia la izquierda al tiempo que era reemplazado en sus funciones de delegado personal de Perón.

Hacia fines de 1963 regresó al país John William Cooke, una de las figuras más radicalizadas del peronismo, después de haber vivido tres años en Cuba y de haber intentado infructuosamente que Perón viajara a ese país. También de esa época datan las primeras propuestas de lucha armada y de uso de la violencia, como en el caso del grupo Tacuara (Baxter), alineado en la derecha peronistas hasta entonces. En 1964 se fundó el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP), precursor de lo que sería la línea revolucionaria.

El abanico de corrientes internas en el peronismo comenzaba a abrirse y con él surgían las disensiones. El matonaje vadorista cobró una de sus primeras víctimas al asesinar a Rosendo García, también sindicalista.

Perón mantenía su política de conciliación y preservación del conjunto, dando poder alternativamente a unos y otros según las coyunturas que se fueran presentando. Su figura, terriblemente controvertida, representaba cosas diferentes para cada quien. Para los militares, aun los azules, era un elemento irritativo e inaceptable dentro de cualquier acuerdo con el peronismo y su preocupación principal era desembarazarse de él. Este elemento cobró importancia ya que Perón siempre representó la no claudicación ante los militares, entre otras cosas porque los propios militares no podían aceptar ningún tipo de acuerdo con él.

Para el movimiento peronista, en especial para las bases trabajadoras, Perón representaba la unidad y su papel de conducción era incuestionable. Para los dirigentes peronistas, de cualquier signo, el líder constituía la imposibilidad de

volar por sí mismos; el general aceptaba todo menos el cuestionamiento de su conducción.

En este período se libró la lucha con el vandomismo, corriente que resultó desplazada aunque no destruida. Su condición de minoría dentro del justicialismo lo arrastraba a una política de acuerdo negociado y golpista con el poder militar al tiempo que quedaba desplazado de la contienda electoral, punto fuerte del sector ortodoxo.

Por su parte, en el radicalismo existían en ese momento tres sectores internos: el balbinismo, el alvearismo y el sabatinismo. A este último pertenecía el doctor Arturo Illia, quien ni siquiera era la figura principal de su corriente. Esta condición de personaje secundario lo obligó durante su presidencia a dedicar un gran esfuerzo en la obtención de acuerdos internos, que debilitaron su capacidad de decisión como primer mandatario. El triunfo electoral había sorprendido no sólo a sus oponentes sino al propio partido radical. Así fue como Arturo Illia llegó a la primera magistratura sin que su partido tuviera una propuesta política relativamente estructurada. En el momento de ganar las elecciones, la dirigencia interna del radicalismo del pueblo sólo coincidía en tres aspectos: la defensa de las instituciones, la desautorización de las prácticas y del programa de gobierno de Frondizi (a quien no le perdonaba su calidad de disidente) y la rehabilitación de los militares colorados. Es importante resaltar que el primero y el último de estos objetivos sólo parecen contradictorios si se olvida que los colorados representaban el freno más importante para el peronismo y que, en esta medida, anulaban al oponente más temido por los radicales. A raíz de estas divisiones internas y de la falta de un programa, el gobierno radical se caracterizó por su inconsistencia y fue blanco fácil de los ataques de casi todos los sectores. Sin embargo, si bien le faltó una orientación política clara, mantuvo al país en un clima de convivencia democrática, lo que no es poco en el caso de Argentina, y tuvo rasgos de signo antiimperialista como el rechazo de las condiciones del FMI y la anulación de los contratos petrole-

ros firmados por Frondizi.

Por su parte, la intransigencia se dividió en dos fracciones, como consecuencia de diferencias surgidas a raíz de la formación del Frente. La UCRI quedó liderada por Oscar Alende y el grupo que respondía a Frondizi se separó formando el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Este nucleamiento fue uno de los que impulsó la política frentista y desde su creación, y hasta el presente, mantuvo fuertes vínculos con sectores militares.

El fracasado proyecto del Frente, como ya se explicó, buscó la neutralización del peronismo como vía de su integración y asimilación, tratando de hacerlo a-séptico, es decir desvanecer la característica de clase que lo impregnaba. La democracia fue el partido que asumió la fachada política frentista, por su vinculación con el sector militar. Sin embargo, al fracasar la propuesta por la presión de los sectores colorados quien encarnó una alternativa militar no fue este partido sino uno de los generales más prestigiosos entre los azules y de más destacada actuación desde la Revolución Libertadora. El general Pedro Eugenio Aramburu se dio a la tarea de presentar una alternativa electoral, con la evidente ilusión de constituir para la sociedad civil la opción que parecía encarnar entre sus pares. Así nació a la vida política un nuevo nucleamiento, la Unión Democrática del Pueblo Argentino (UDEPA) con el objeto de presentarse a las elecciones presidenciales de 1963. La presencia de Aramburu, figura clave de la Revolución Libertadora, logró reunir los votos, pero en su contra.

Un buen número de peronistas y de frondicistas desobedeció las directivas de voto en blanco impartidas por sus conducciones para inclinarse a favor de los candidatos que no darían su apoyo a Aramburu en el colegio electoral. Así la nueva agrupación obtuvo apenas el 7.7 % de los votos y desapareció, sin alcanzar a constituirse en una opción, unos años después.

Las elecciones que dieron el gobierno a Illia fueron una demostración de la desintegración política del país: el partido mayoritario permanecía proscrito;

los ganadores apenas obtuvieron los votos de una cuarta parte del electorado; el segundo lugar, con un 21 %, correspondió a los votos en blanco; la intransigencia, tercera fuerza política del país, acababa de fracturarse. Fracasado el proyecto de asimilación del peronismo, sólo quedaba la posibilidad de marginarlo, lo que minaba la legitimidad de cualquier proceso electoral. Pero las fuerzas políticas no eran capaces ni de neutralizar al peronismo ni de ofrecer una alternativa que le arrebatara el consenso y fuera, al mismo tiempo, viable para las clases dominantes. Los factores reales de poder quedaban escindidos de la representación política institucional.

De estas elecciones surgió el presidente constitucional que entró a la casa de gobierno con un menor número de votos propios. No obstante, Arturo Illia no asumió en un clima de hostilidad, sino más bien con el beneplácito de grandes sectores. Para todos representaba el mal menor. La izquierda, conservadores y democristianos oscilaron entre la indiferencia y el apoyo, pero en ningún momento tuvieron un rechazo evidente. El peronismo cuestionaba la legitimidad del gobierno, pero sabía que éste no encarnaba a su adversario principal. Sólo el frondicismo era un enemigo jurado, dispuesto a tomar la revancha de las intrigas que había sufrido durante su gobierno.

Pero la falta de un sustento político real, el aislamiento creciente en relación con los partidos políticos, los sindicatos y, en general, todos los sectores que no fueran el propio partido, el impulso de una política económica irritativa para Estados Unidos y la oposición a la fracción azul, el grupo de mayor peso dentro del ejército, permitieron el desarrollo y la proliferación de las concepciones golpistas.

Apenas un año después de la asunción de Illia, la posibilidad de una asonada militar se discutía abiertamente en todo el país. Se creó una especie de debate público, que fue subiendo de tono y pretendía culpar al gobierno por sus errores y fallos, del golpe que surgiría como respuesta "natural" a la ineficacia

radical.

Muchos sectores comenzaron a plantear el golpe como un acto de justicia originado en los errores del gobierno.

El frondicismo entró de lleno en la campaña. Los medios de prensa de esta corriente, así como los relacionados con el frustrado proyecto del Frente también se plegaron a ella. Incluso se crearon medios de prensa, como el semanario Primera Plana, cuya función principal parece haber sido la formación de un clima marcadamente golpista. Se orquestó una verdadera campaña en torno al carácter caduco de los partidos y de la democracia representativa, a la que se asoció con un modelo anticuado y poco eficiente, en contraposición con el moderno autoritarismo militar.

Si se satura a la opinión pública con un tema, se puede lograr la "normalización" o "naturalización" del mismo. Este mecanismo, que parecen manejar muy bien los medios informativos argentinos, es el que se puso en marcha para preparar el golpe militar. De tanto repetir que los errores del gobierno ameritan la intervención de las Fuerzas Armadas, esta posibilidad se incorporó a la lógica colectiva como una variable "normal".

Al mismo tiempo el dispositivo golpista formó los núcleos de irradiación de su "filosofía" en aquellos sectores que consideraba importantes para su política marcadamente antiliberal, antidemocrática y, aunque no quería admitirlo, de corte corporativista. Pero como el modelo no estaba claramente explicitado, cada grupo lo amoldó a sus propias expectativas, entró en la argumentación que lo sustentaba y, en el mejor de los casos, favoreció la lógica que daba pie a la nueva aventura: la Revolución Argentina.

La izquierda daba por agotado el sistema democrático y representativo, conveniencia de que su derrumbe daría paso inexorable y trágicamente al socialismo (las leyes históricas lo garantizaban).

Los desarrollistas verían por fin concretarse la unión de los sindicatos y em-

presarios bajo la mano protectora de los gendarmes.

Los sindicalistas próximos al vandorismo lograrían soslayar su condición de mi noría y acordar en forma directa su cuota de poder en el poder, que además pro metía ser mayor de la que le adjudicaban los gobiernos civiles. Unos y otros se equivocaban. Los militares estaban perfectamente dispuestos a salvarlos a todos, a pesar de sí mismos. Esta vez la salvación tenía un nombre, corporativismo, que no se atrevían a pronunciar. También tenía un caudillo: Juan Carlos Onganía, ge neral de caballería, hijo de italianos poco distinguidos, pero muy bien relacio nado, por vía matrimonial, con las buenas familias de doble apellido.

Para poner en marcha el movimiento se formó una corriente de opinión que lo im pulsara y se adoctrinó a los grupos sociales que serían su eje. Los militares no improvisaban.

En la Escuela Superior de Guerra se impartieron cursos que promovían entre los oficiales la eficiencia desarrollista; en el Instituto para el Desarrollo de E jecutivos de Argentina se propiciaba la formación cívica, política y comunitaria de los administradores de empresas, uno de los sustentos del proyecto, y en la Escuela para Dirigentes de la CGT se dictaban clases para los sindicalistas nacionales, que desacreditaban las teorías clasistas.

El clima para el golpe estaba creado; la sociedad en su conjunto participó. Pe ronistas y antiperonistas, intransigentes y democristianos, desarrollistas, iz quierdistas, no hubo sector político que no pusiera su granito de arena. Un di putado democristiano afirmó públicamente: "El gobierno se merece un golpe",²

En el congreso, la bancada opositora bloqueó el presupuesto, con lo que parali zaba al gobierno y favorecía el clima de desestabilización. Los partidos poli ticos querían otro golpe. Y lo tuvieron. Un golpe que, esta vez los barrería, sin contemplaciones, del escenario político. La sociedad en su conjunto miraba

² En Alain Rouquié, op. cit., p. 247..

sin ser capaz de reaccionar ni tener cómo hacerlo. El gobierno de Illia cayó, expulsado por la fuerza represiva menos jerárquica: la policía. Nunca el poder civil había valido tan poco en Argentina.

Los sindicatos

El peso creciente de los sindicatos expresa en definitiva la escisión cada vez más marcada entre el aparato político y los factores reales de poder en la Argentina. Este hecho es determinante para explicar tanto el avance del poder sin dical como el militar en términos de ausencia de propuestas en el nivel de lo político.

El sindicalismo de los años 60 había crecido con un pecado original de desobediencia: la participación en las elecciones sindicales convocadas por la Revolución Libertadora, a las que Perón había dado la orden de boicotear. Sin embargo, una vez reconocidos, estos dirigentes mantuvieron su pertenencia al peronismo, no sólo por sus propias convicciones sino porque ésta era la identificación mayoritaria de sus bases. La relación con Perón, siempre que no se discutiera su liderazgo, permitía una independencia de movimiento bastante amplia, de manera que servía de respaldo político sin interferir en las decisiones y acuerdos de los nuevos dirigentes. Sin embargo, en la medida en que, por su propio peso las decisiones de los dirigentes sindicales interfirieron con las técnicas planteadas por Perón para el conjunto del movimiento, la situación entró en crisis. Ya en 1962, en el momento de concretarse el golpe contra Frondizi, existía una nueva versión de líderes sindicales. Su máximo exponente era Augusto Timoteo Vandor, dirigente metalúrgico que encarnaba un nuevo tipo de conducción, representaba a una burocracia que mantenía buenas relaciones con la patronal, sobre todo en el caso de las empresas grandes y modernas. Recogía del peronismo la i

dea de colaboración de clases, muy acorde en ese momento con los postulados de arrollistas y con las propuestas azules en el seno de las Fuerzas Armadas. Siendo una figura de primer orden, Vandor no asumía sobre sí la conducción de la CGT sino que simplemente aparecía como dirigente del gremio más importante: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En 1963, el Congreso Normalizador de la CGT designó un secretariado encabezado por José Alonso, dirigente de la industria textil (perteneciente a las ramas ve getativas) que si bien había tenido gran desarrollo en la industria argentina, estaba ahora relativamente estancada.

Alonso, aunque era un dirigente importante no se planteaba la proyección de Van dor, ni tenía el peso suficiente como para proponérselo.

Para 1964 el vandorismo ya se había definido como un claro opositor del gobierno de Illia, convencido de su futuro derrocamiento e interesado en lograr una participación conveniente con los sucesores. En este marco se lanzó el Plan de Lucha de la CGT, que consistía en la ocupación pacífica de las plantas industriales. El Plan de Lucha fue aprobado por Alonso pero había sido programado por Vandor. Se planteaba la legítima defensa del salario real, que a partir de 1955 se había visto constantemente deteriorado. Sin embargo, el contenido golpista del plan parecía evidente si se toma en cuenta que de inmediato el congreso vo tó la ley del salario mínimo, vital y móvil y, no obstante, los dirigentes man tuvieron las medidas de fuerza aduciendo que la nueva ley no resolvía el problema inflacionario.

Poco después del lanzamiento del Plan de Lucha se comenzó a hablar de la operación de retorno de Perón, que el vandorismo publicitó intencionalmente. Esta e ra una nueva forma de desestabilizar al gobierno, al tiempo que se demostraría la impracticabilidad del retorno del general exilado.

En diciembre de ese mismo año se realizó la operación retorno con los resultados ya expuestos. Perón regresó a España, pero su figura pareció salir fortale

cida del suceso, en tanto que las bases peronistas culparon del fracaso del operativo a las conducciones del país, por la poca discreción con que habían manejado el proyecto. Vandor sabía perfectamente que la figura de Perón era inadmisibles para los militares, quienes en efecto presionaron a gobierno para que impidiera la entrada del general en el territorio nacional. De esta manera Perón era expulsado por los radicales y les evitaba a ellos librar la lucha interna. Sin embargo el enfrentamiento estaba planteado y el general tenía muchas cartas que aún no había jugado. En marzo del año siguiente desconoció un acuerdo electoral firmado por Vandor y el MID (Frondizi) para las elecciones legislativas parciales. Al mismo tiempo dio la orden de votar por la Unión Popular y logró la victoria.

En octubre llegó al país la segunda esposa de Perón, María Estela Martínez de Perón, con el seudónimo de Isabelita. El gobierno no sólo no se opuso a su ingreso sino que esperaba que éste produjera una fractura dentro del peronismo, dándole así una tregua. Isabel se dedicó a recorrer todo el país ganando aliados que, en muchos casos, aunque tuvieran buenas relaciones con Vandor se apresuraban a dar su apoyo a la esposa de Perón para no perder el reconocimiento del jefe ausente, puesto que la situación no estaba definida y el triunfo de Vandor resultaba incierto. En efecto, la señora de Perón fue ganando aliados con una política cauta. Poco después Alonso enfrentaba a Vandor, acusándolo de traidor y forzándolo a definiciones precisas.

En 1965 se realizó el Congreso de Avellaneda, en el que quedó sellada la escisión. El peronismo se dividió en las 62 Organizaciones neoperonistas que nucleaban al vandorismo y las 62 Organizaciones de Pie Junto a Perón, que representaban a los sectores ortodoxos, leales a Perón.

En 1966 se produjo el enfrentamiento electoral al que ya nos referimos entre el vandorismo y la ortodoxia, en la provincia de Mendoza. Cuanto más se imponía Perón en el terreno electoral, más se respaldaban los neoperonistas en su relación con los militares y en la posibilidad de un golpe que prometía darles la cuota

de poder que seguramente no alcanzarían en las urnas. La connivencia con los militares fue abierta y la CGT se convirtió en una emisora furibunda de comunicados antigubernamentales. En este caso el golpe militar estaba alentado no sólo por los partidos políticos sino incluso por sectores de la dirigencia obrera con influencia sobre ramas muy importantes del sindicalismo. Se formaba a los cuadros gremiales para participar concientemente en la nueva propuesta militar, que esta vez no se conformaba con desplazar a un gobierno para convocar a la ciudadanía, aunque fuera con exclusiones. Ahora los militares pretendían tomar el poder y quedarse en él. Ya eran capaces de esbozar un proyecto político y económico, de definir los sectores sociales en los que pretendían apoyarse y de decir, sin ruborizarse, que intentarían quedarse en el gobierno unos diez años para "enderezar" al país.

Las Fuerzas Armadas

En 1962 la Argentina era una realidad escindida. Por una parte, la gran burguesía agroexportadora y la gran burguesía industrial monopólica hegemónicas en términos de poder económico, no tenían una representación política a nivel institucional y mucho menos un proyecto ni, en consecuencia, un discurso capaz de unificar socialmente para asegurar su hegemonía real sobre el conjunto. Por su parte, las masas populares, es especial la clase obrera, lograron una representación mayoritaria a través del peronismo. Pero no contaban con la fuerza necesaria para sostener su consenso más allá de la vía electoral. Su propuesta política afectaba al modelo de acumulación del grupo dominante por lo que se la proscribía lisa y llanamente. Las fuerzas políticas existentes eran incapaces de incorporar al peronismo ha-
ciendo de él una variable aceptable, o bien de desintegrarlo.

Así el país se enfrentaba a una minoría sin votos y a una mayoría derrocada y proscrita, lo que agudizaba la crisis del sistema representativo democrático. Las Fuerzas Armadas no eran ajenas a tal situación, sino que habían tenido un papel protagónico en las circunstancias que la originaron. Desde 1930, año de su primera irrupción, el país había tenido doce presidentes, ocho de los cuales eran militares y los cuatro restantes, civiles. Pero ninguno de estos últimos había completado su mandato y los doce afrontaron conspiraciones o golpes militares. El ejército había facilitado el gobierno a una burguesía agroexportadora incapaz de conquistarlo, en 1930; había ensayado un proyecto nacional en 1943; había desplazado al movimiento que era hijo, legítimo o no, de su proyecto nacional, en 1955; y en 1962 se había visto "obligado" a interrumpir el primer gobierno electo después de la Revolución Libertadora, en vista de lo ingobernable del fenómeno "maldito" del peronismo.

En resumidas cuentas, en 1962 la Argentina era un país con un alto grado de desintegración que alcanzaba a sus fuerzas políticas y también a sus Fuerzas Armadas, involucradas en este largo proceso de desgaste en el que habían tenido un papel protagónico. Además, a partir de 1955, o quizás ya desde 1946, el país estaba dividido entre peronistas y antiperonistas. La contradicción parecía insalvable. En el terreno electoral el triunfo indiscutido era de los primeros; en el terreno armado la victoria pertenecía a los últimos.

Para los militares no cabía duda de qué lado estaban alineados: el antiperonismo. Pero en cambio, la forma de enfrentar a este viejo enemigo, es decir si debían destruirlo, neutralizarlo o integrarlo, eran causa de múltiples conflictos y divisiones internas que amenazaban con minar la estructura militar.

El teniente coronel Mario Horacio Orsolini, en su libro La crisis del ejército, sostenía que existían en ese momento dos ejércitos: uno nacional y profesional (azules) y otro partidario e ideológico (colorados). Estos últimos, ideológicamente anticomunistas y políticamente antiperonistas no comprendían, siempre se

gún Orsolini, que la politización del ejército podía llevarlo a su destrucción. Por eso no dudaban en buscar apoyo en otras armas o incluso en los partidos políticos rompiendo con la disciplina interna y el respeto de las jerarquías. También se atribuía a esta concepción el crecimiento desmedido de los servicios de informaciones que se finmiscuían cada vez más en la problemática política.

Por el contrario, el grupo azul promovía el retorno a la vida institucional y, sobre todo, al profesionalismo, elemento éste de primera importancia para hacer del ejército un sector con una dinámica autónoma. Su primera preocupación era preservar a las Fuerzas Armadas, pero en realidad las diferencias subyacentes eran sobre todo de orden político: qué hacer frente al peronismo.

Sin embargo, el conflicto entre azules y colorados no se debe interpretar como una pugna entre dos posiciones perfectamente conformadas que tratan de obtener la hegemonía interna, sino precisamente como la imposibilidad de lograr tal hegemonía por el alto grado de divergencia. Por ello, los distintos enfrentamientos entre las facciones arrojaban como resultado la adopción de medidas intermedias entre ambas posiciones. En aquel momento, para los militares más lúcidos era preciso excluir los elementos de desunión y así recuperar la unidad de acción, factor determinante para emprender después cualquier política, del signo que fuera. Al respecto, el 2 de mayo de 1963, el general Onganía decía: "El ejército en función de gobierno tiende a transformarse paulatinamente en una institución deliberativa y de esa manera a destruirse, porque se corrompe la disciplina. Sin disciplina no hay jerarquía ni mando. Sin mando hay anarquía. La anarquía en el ejército llevaría a la nación al caos".³

Los militares azules, aunque antiperonistas de la primera hora por su cercanía con la gran burguesía agraria y la aristocracia militar, sin embargo pensaban que el peronismo podía significar un freno para el comunismo, si se lo sabía ma

³ En Alain Rouquié, op. cit., p. 214.

nipular. Se negaban a la identificación comunismo-peronismo y decían que si se acusaba a todo el mundo de ser comunista, en caso de un real enfrentamiento, no se contaría con aliados. Se proponían excluir tanto el "totalitarismo" como el "rencor gorila", es decir que comprendían que en el fondo de la crisis se encontraba la vieja división entre peronistas y antiperonistas, que no permitía un punto de estabilidad.

Por su propia ideología, altamente elitista, tendían a creer que no les sería difícil manipular a las masas, a las que en realidad menospreciaban en un alto grado. Pertenecían sobre todo al arma de caballería, que era la más poderosa dentro del ejército, aunque no demasiado numerosa.

El poder de la caballería provenía, precisamente, de sus lazos con las grandes familias que les confería una relevancia especial, reconocida por las demás armas ya que representaba política e ideológicamente al sector que pretendían representar los hombres de armas y al que aspiraban a acceder, en muchos casos precisamente a través de la institución militar.

Los valores políticos e ideológicos que enunciaban los azules conformaban una concepción nacionalista, católica y tradicionalista. Se jactaban de un nacionalismo "modernizante", que los acercaba al frondicismo y en especial a su proyecto industrial monopólico y moderno, en el que lo nacional en realidad sólo aparecía en términos de los objetivos últimos. Para estos militares el nacionalismo era una cuestión de fronteras territoriales o ideológicas. Su defensa de la nacionalidad pasaba por la vigilancia de los brasileños, los chilenos o bien por la defensa continental antes que por la custodia del patrimonio o la soberanía nacionales.

Por su parte, los colorados reflejaban más las posiciones de las clases medias. Su evolución había sido similar a la de esos sectores. Descubrieron el peligro peronista más tardíamente que los azules, pero fueron mucho más furibundos al atacarlo puesto que lo identificaban con el comunismo y sostenían que expresaba

un resentimiento de clase que consideraban peligroso. Su antiperonismo era social e incluso étnico, a pesar de provenir ellos mismos de estratos más bajos. Mantenían buenas relaciones con el radicalismo, partido de clase media, cuya relación con el peronismo era igualmente "escandalizada". Pertenecían principalmente a la infantería y a la artillería, armas más numerosas que la caballería pero de menor peso relativo dentro de la estructura militar.

Al producirse los enfrentamientos que ya describimos en el marco histórico, se disputaba sobre el futuro de la institución y su participación en la vida nacional. Casi de inmediato el predominio fue azul. Sin embargo, los azules parecen haberse dado el tiempo suficiente como para no provocar rupturas internas e ir ganando posiciones dentro de las Fuerzas Armadas hasta imponer totalmente un proyecto propio, cosa que lograrían con el golpe de 1966. Los tres años que transcurrieron hasta la concreción de la Revolución Argentina les permitieron ganar el espacio con que no contaban en 1963 e ir definiendo en forma paulatina y con más precisión un proyecto propio.

En 1964, poco después del triunfo azul, a pesar de que la caballería sólo representaba el 16 % del ejército, ya contaba con la mitad de los puestos del alto mando, con la dirección de las escuelas de cuadros y con una importante fracción de los comandos de unidad. Ese año el 50 % de los ascensos del ejército pertenecieron a esta arma. Además se produjo una reestructuración institucional, en virtud de la cual cada unidad de infantería quedaba encuadrada por una de caballería.

Una vez consolidado el triunfo azul de los legalistas y consagrado el profesionalismo que, en última instancia, aseguraba la unidad interna antes que ninguna alianza política con otros sectores, el proyecto militar se puso en marcha. Era preciso acabar con la antinomia peronismo-antiperonismo y a su vez con el modelo de la democracia representativa que conducía, recurrentemente a esa con

tradición. Todo el sistema institucional quedaba cuestionado y debía ceder el paso a un nuevo modelo propuesto e impuesto por los militares. "El ejército argentino se organizará y preparará para ser instrumento de la disuasión, amenaza directa, presión indirecta o violencia en la consecución del Crecimiento Nacional. Como tal, apoyará a los gobiernos que representen y asuman dicho objetivo, asegurará la continuidad en su ejecución y colaborará activamente en la eliminación de sus obstáculos estructurales y circunstanciales y en la negociación, desarme o derrota de sus guarniciones y del enemigo del crecimiento".⁴

Al mismo tiempo se ponía en marcha la difusión ideológica del nuevo modelo. Se dictaban cursos en la Escuela Superior de Guerra, se daban cursillos de cristiandad y se comenzaba el trabajo de descrédito de las instituciones de la democracia forma. "La preparación de las condiciones que... harían posible su acceso al poder [del comunismo] corre por cuenta... de los propios gobiernos democráticos",⁵ decía el teniente coronel Orsolini en su libro Ejército argentino y crecimiento nacional, publicado precisamente en 1965 y en el que exponía, casi con descaro, los fundamentos del golpe que se estaba preparando.

Es importante destacar que los mismos militares que diez años después, asesinarían a miles de personas en la supuesta defensa de las instituciones amenazadas por la guerrilla, fueron los que en 1966, antes que ningún otro sector, se habían apresurado a dar por liquidada a la democracia representativa.

No se trata de suponer que los azules se habían propuesto, desde un primer momento, la toma del poder con un proyecto corporativista, sino más bien que constituyeron el único grupo con unidad interna como para ir dando respuesta a las diferentes situaciones y, por último, ser capaz de esbozar una propuesta de poder aceptable para el conjunto de las Fuerzas Armadas. Una propuesta que des-

⁴ Mario Horacio Orsolini, Ejército argentino y crecimiento nacional, Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1965, p. 278.

⁵ Ibid., p. 273.

preciaba a la partidocracia para recurrir a dos grupos también marginados por la dinámica electoral, el frondicismo y el vandomismo, y que se veía "obligada" a asumir "responsabilidades que no cumple ni deja cumplir una minoría dirigente en el ocaso y convocando a la acción, superada la etapa larval de su gestación, a una minoría que asumirá... Ella y el ejército harán incontenible el Crecimiento Nacional".⁶

Por fin, los militares asumían sobre sí toda la responsabilidad. Se atrevían a la ruptura total para permitir el avance de su propuesta arrolladora, salvadora, casi apocalíptica: "al orden ficticio seguirá un desorden promisorio, cuya violencia subirá de tono en proporción directa con la eficacia de las medidas de gobierno y con la proximidad de la victoria definitiva. Por supuesto las Fuerzas Armadas habrán de servir a este desorden y no a aquel orden".⁷

El golpe de 1966

Al analizar el golpe de 1966 se tiene la impresión de estar observando, en muchos aspectos, el reverso de lo que fuera aquél de 1943, del que hablamos en el segundo capítulo. Con una alta programación y previsión, con una preparación que incluyó la acción psicológica desplegada a través de la prensa ya existente y de otra creada especialmente a estos fines, con el pretencioso nombre de Revolución Argentina, parecía iniciar un proceso tendiente a transformar de manera profunda la sociedad nacional. En efecto, éste era el propósito del nuevo gobierno, aunque en verdad lograría resultados mucho menos trascendentes y de signo contrario, que el bastante más improvisado movimiento de 1943.

⁶ Ibid., p. 281.

⁷ Ibid., p. 274.

Por primera vez en el país, los militares ocupaban el poder para permanecer en él; no se trataba de un tránsito para lograr la "normalización" y posterior entrega del gobierno a los civiles. En esta oportunidad las Fuerzas Armadas se hacían responsables de un proyecto político, económico y social que pretendía cambiar la fisonomía nacional, a tal punto que se permitían destituir al presidente, al vicepresidente, a gobernadores e intendentes, clausurar el Congreso nacional y las legislaturas provinciales, disolver los partidos políticos, prohibir su actividad y confiscar sus bienes. Las instituciones serían cambiadas por un nuevo modelo corporativo.

El documento fundacional del nuevo gobierno, el Acta de la Revolución Argentina, justificaba las medidas en virtud de un supuesto "vacío de poder" creado por las "rígidas estructuras políticas y económicas anacrónicas", que afectaban a la "tradición occidental y cristiana" que el nuevo gobierno defendería.

En 1943 los militares habían salido, de alguna manera, a defender las instituciones democráticas desvirtuadas por los diez años de fraude conservador, se erguían pues en defensores de la legalidad constitucional; 23 años después impulsaban un movimiento que significaba la ruptura de las instituciones democráticas argentinas, decretando además su agotamiento e ineficiencia.

Los militares se proponían a sí mismos como agentes modernizadores y prometían un "cambio de las estructuras" que, en realidad, se reducía a la anulación de las formas de representación y participación vigentes, para reemplazarlas por su modelo corporativo. El mismo consistía en suprimir un sistema participativo que resultaba desestabilizante y ensayar en su lugar un esquema basado en la simulación de las fuerzas sociales por vía de los grupos que concentraban un poder real e intereses propios: organizaciones empresarias, Iglesia, sindicatos, Fuerzas Armadas.

Así se soslayaba la confrontación con el peronismo, obviando la molesta instancia electoral y reemplazándola por la participación y consulta de las "fuerzas

vivas". Esta mecánica ofrecía un interlocutor mucho más dócil: el vandomismo, dispuesto a ganar un espacio dentro del movimiento usando el respaldo oficial ya que no podía triunfar en el enfrentamiento directo con Perón.

Gran parte del espectro político apoyó de inmediato al gobierno. A escasos dos meses del golpe, Augusto Vandor firmaba en la Casa de Gobierno el nuevo contrato colectivo de trabajo de su gremio, como muestra de respaldo mutuo. Los partidos políticos que habían participado en la preparación del clima golpista, veían con alivio la instalación de los militares en la Casa Rosada. La Central General de Empresarios, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina apoyaron el movimiento castrense desde el primer momento y varias entidades empresarias asistieron a la asunción del nuevo presidente. La Iglesia también dio su aprobación, por boca de monseñor Caggiano, quien exclamó: "¡Es una aurora! ¡Nuestro país, gracias a Dios, marcha hacia su grandeza!"⁸ En resumidas cuentas la Revolución Argentina contaba desde su inicio con un consenso envidiable para un gobierno de facto. Si en 1943 nadie sabía qué pretendía aquel golpe militar, en 1966 todos creían saberlo, acomodándolo a sus propias expectativas.

Peró las propuestas del nuevo modelo resultaban demasiado esquemáticas, muy propias del gusto militar, como para funcionar socialmente. Se emprendió una aparatosa reestructuración del Estado que consistía en la creación de un sistema de planeamiento, un sistema de consulta (un consejo de asesores) y un sistema de decisión (los ministerios sujetos a la verticalidad en relación con el Ejecutivo). Proclives a las trilogías, los militares habían dividido su revolución en tres tiempos, que se sucederían a medida que cada uno iba quedando "resuelto", eran: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político, un prolijo y mecánico recorrido de infraestructura a superestructura jurídico política. Sin embargo, el proyecto militar no era cosa de risa.

El plan económico, que se puso en marcha a partir de 1967, año en que Adalbert

⁸ En Alain Rouquié, op. cit., p. 256

Krieger Vassena se hizo cargo del ministerio de economía, pronto mostró inclinaciones que no agradaron a la Sociedad Rural. Tendió a deteriorar el poder económico de la oligarquía terrateniente y asentar las bases para que la burguesía industrial monopólica se convirtiera en el sector hegemónico.

Por primera vez una devaluación no favoreció a los sectores agroexportadores. Se establecieron impuestos a la exportación de productos tradicionales y esas retenciones se canalizaron hacia la industria a través del Estado. Como si esto fuera poco se puso un impuesto a la propiedad de la tierra.

Pero el proyecto industrial trataba de implantar un modelo de acumulación que beneficiara a la burguesía monopólica, no a la pequeña industria. Para ello se reforzó el proceso de concentración industrial y se promovió el desarrollo de las industrias básicas y de capital, con la eliminación de las empresas "ineficientes", es decir, las pequeñas. También se favoreció la operación de las empresas extranjeras ya radicadas en el país. A fines de 1957, el 51 % de las 50 mayores empresas instaladas en la Argentina eran extranjeras; a su vez, la empresa argentina más importante ocupaba el lugar 14. Los militares azules, los "hombres de a caballo" vinculados con las grandes familias, ahora trataban de imponer un proyecto industrial desarrollista con la hegemonía de la burguesía monopólica.

De inmediato se redujo el salario, su participación en el PBI pasó del 42 % en 1967 al 39 % en 1969. Se reprimió a la oposición sindical que permanecía fuera del control de los gremios participacionistas, así como a los conflictos laborales que ésta impulsó. Las jornadas perdidas por huelga pasaron de 1 664 800 en 1966 a 242 953 en 1967 y no precisamente porque mejoraran las condiciones laborales, como lo demuestra la tendencia decreciente del salario.

En términos continentales, Onganía definió la política de fronteras ideológicas, desde la posición occidental y cristiana. A diferencia del nacionalismo predominante en 1943, ahora la perspectiva era continental, lo nacional quedaba circ

cunscrito a algunos enunciados del discurso.

Las Fuerzas Armadas impulsaban un proyecto de transformación total de la sociedad, prescindiendo del país institucional y ensayando su modelo corporativo. Sin embargo, y aunque el proyecto les pertenecía por completo, instauraron un gobierno que, siendo militar, no estaría conducido por las Fuerzas Armadas como conjunto, sino por uno de sus miembros.

El general Juan Carlos Onganía fue un presidente con plenos poderes, otorgados por determinación de los tres comandantes en jefe, pero en carácter personal. Gozar de autonomía fue una de las condiciones que impuso para aceptar el cargo de guía de la revolución. Esta vez, las Fuerzas Armadas no deliberaron sino que acataron las órdenes de los mandos. La Junta de Comandantes en Jefe era la fuente de poder, pero lo delegó en la persona de un miembro más carismático: el general Onganía. Este hecho quedaba perfectamente claro y se explicitaba en el artículo 10 del Acta de la Revolución Argentina: "Para el caso de incapacidad o muerte del Presidente su sucesor será designado de acuerdo común por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas".

Aún faltaba recorrer un tramo para llegar a la asunción del poder por parte de las Fuerzas Armadas sin emisarios ni mediadores. Pero a partir de ahora el camino quedaba abierto en la conciencia del país y en la de los propios militares.

Diez años más tarde se consumaría un golpe que no sólo alcanzaría los máximos niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas sino que incluso supondría una redistribución del país, sus ministerios y hasta su territorio a imagen y semejanza de la estructura militar. En el golpe de 1976 hasta la ciudad de Buenos Aires fue dividida a efectos de la "caza de subversivos" en zonas que correspondían a ejército, Marina y Aeronáutica. También los ministerios se repartieron de manera similar.

Se intentaba una cirugía más sobre la sociedad argentina, tan profunda en lo político como en lo económico, se volvía a plantear la necesidad de que los militares cambiaran de cara a nuestra sociedad, que aplicaran aún otro tratamiento de shock. Se trataba de imponer un nuevo modelo de acumulación, una nueva estructura social, nuevas leyes del juego político y, como siempre, una nueva moral.

Es indudable que el golpe de 1976 fue más brutal, cuando menos en su cuota de sangre, que el de 1966. Pero fue en junio de 1966 cuando las Fuerzas Armadas se asumieron como responsables totales, no ya de impedir transitoriamente la desintegración nacional, sino de trazar el rumbo que debería tomar el país. De allí en más, se trataría de precisar variantes, más o menos brutales, que favorecieran a tal o cual sector, que se apoyaran en unos estratos de la sociedad civil o en otros, pero que, en definitiva, partirían del funcionamiento del sector castrense como un verdadero partido militar.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

En 1943, la estructura económica argentina descansaba, sin lugar a dudas, sobre una clase social perfectamente definida: la gran burguesía pampeana. Sin embargo, ya para entonces, su acceso al gobierno por medio de los mecanismos liberales de una república que ella misma había fundado constituía un dilema. El partido conservador, que había sido su representante histórico, se mostraba impotente ante las fuerzas del radicalismo. Por eso, desde 1930 las mayorías habían sido sistemáticamente desplazadas por el fraude. El sistema de representación democrática se tornaba ineficaz para la clase dominante. Se verificaban así por lo menos dos de las características de una crisis de hegemonía: la crisis de dominación política del bloque en el poder y el desfasaje entre la dominación económica y la política ideológica.

Pero en 1943 se incorporarían otros elementos que agudizarían tal escisión. Las Fuerzas Armadas hacían su aparición en la arena política, como una nueva variable. Si en un primer momento el movimiento del 43 no resultaba amenazante para la gran burguesía, el posterior nacimiento del peronismo constituiría una fractura insalvable. La industrialización del país con el consecuente crecimiento de la clase obrera, la organización de ésta a través de un sindicalismo poderoso y su identidad política marcadamente peronista, junto a su capacidad de sumar tras de sí a las fuerzas que constituirían el bloque popular aislaba de manera definitiva a la poderosa burguesía agroexportadora de alguna posibilidad de triunfo en el terreno electoral. Por otra parte, la fisonomía nacional se transformaba y el país era una realidad que ya no podía ser "pensada" en los términos válidos a lo largo de los años 30. La ideología y el proyecto conservador resultaban ineficientes para comprender una Argentina bastante más compleja. Así pues, a la crisis política del bloque dominante se sumaba una verdadera

crisis ideológica que desplazaba los valores y justificaciones sobre las que se había asentado la República liberal oligárquica.

El notable consenso logrado y mantenido por el peronismo selló el divorcio de las clases dominantes con el sistema de representación democrática. Como contrapartida, éstas clausuraron la vía electoral para el peronismo, mediante la proscripción. Esta doble situación dio lugar a un sistema político que carecía de una representación real y que jugaba como un escenario de utilería, detrás del cual se movían las fuerzas sociales reales. La escisión entre éstas y los partidos políticos abrió una nueva instancia de representación: la que ofrecían las grandes corporaciones, mediadoras entre los grupos de poder y el Estado. Es a partir de esta realidad que se debe interpretar el protagonismo de las Fuerzas Armadas durante el periodo. Cerradas las posibilidades de representación por vía de la partidocracia, el ejército se constituyó en un verdadero receptáculo de las alternativas que ensayaron diversos sectores del bloque dominante intentando recuperar el consenso y, por sobre todo, mantener el poder. Por eso las Fuerzas Armadas fungieron como un partido militar que sumó al poder propio aquél que le otorgaba la representación de sectores decisivos pero que sólo podían acceder al gobierno con su intermediación. Así, la gran burguesía agroexportadora, la gran burguesía industrial y el capital monopólico se convirtieron en sus aliados, alternativa o simultáneamente. Su capacidad de negociación con diferentes sectores muestra cómo las contradicciones del bloque en el poder repercuten en el seno del ejército y se cristalizan en grupos que apoyan a una u otra fracción del bloque dominante. A su vez, esta misma capacidad le brindó al aparato militar una independencia creciente que explica su papel protagónico en el periodo 1943-1966. Algunos de los rasgos de esta evolución son:

1. Aceleración de su intervención en la vida política: La sola enumeración de los sucesivos golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966) muestra la persistencia del accionar militar en la vida política argentina. Pero además, la

secuencia pone de manifiesto que los periodos comprendidos entre una intervención militar y la siguiente fueron cada vez más cortos. Trece años transcurrieron desde el golpe contra Irigoyen hasta el movimiento nacionalista de 1943; doce para que se produjera la Revolución Libertadora; siete hasta el derrocamiento de Frondizi y sólo cuatro para dar inicio a la Revolución Argentina, que permaneció durante siete años en el gobierno. Pero la duración de los gobiernos civiles fue aun menor y mantuvo la siguiente frecuencia: nueve años para el peronismo, cuatro para el frondicismo y apenas tres para los radicales del pueblo. Al tiempo que se observa la aceleración del intervencionismo militar se comprueba la disminución de su "tolerancia" hacia los gobiernos civiles.

2. Monopolio de la iniciativa: Un dato importante es que cada uno de los periodos analizados se inició y terminó a instancias de las Fuerzas Armadas. En ninguno de los casos los militares fueron "arrojados" del gobierno, sino que lo cedieron a los civiles con fuertes condicionamientos y con grados variables de desgaste.

En el periodo 1943-1955 llamaron a elecciones, tal como lo habían prometido; se negaron a la renuncia de su presidente, Farrell, y ganó las elecciones el general Perón que aunque no era el candidato de las Fuerzas Armadas, representaba la continuidad del proceso iniciado con el golpe de 1943.

La etapa 1955-1966 se caracterizó por el peronismo de los "libertadores", quienes permitieron elecciones con proscripción del partido mayoritario. Cuando el gobierno surgido de esta proceso condicionado les resultó molesto, fue desplazado.

El lapso 1962-1966 se podría decir que abarca desde la crisis de hegemonía interna del ejército hasta su superación con el proyecto de la Revolución Argentina. Las elecciones que dieron la presidencia a Illia no sólo fueron condicionadas sino que incluso se impuso en ellas un nuevo sistema electoral para ase-

gurar los resultados.

Todo esto muestra que, además de los años de permanencia física en el gobierno, los militares fueron una fuerza determinante en los periodos de gobiernos civiles ya que condicionaron el momento y la forma de su ascenso además de las presiones que ejercieron sobre ellos, una vez instalados en el sillón presidencial. Aunque presidido por un general, o quizás precisamente por ello, el gobierno que alcanzó mayor independencia fue el peronista. No obstante, en el momento en que las instituciones armadas consideraron peligrosa su política, lo derrocaron. Se puede decir que todos éstos han sido procesos abiertos y cerrados por la dinámica militar a pesar de que los actores, en más de un caso, hayan cobrado una independencia inesperada. Sin embargo, el general Perón fue tan hijo del golpe de 1943 como Arturo Frondizi lo fue de la Revolución Libertadora. El doctor Illia, por su parte, permitió cubrir, sin riesgos, una presidencia que el ejército aún no podía asumir, hasta tanto superara la crisis que amenazaba con destruir la institución. Pero el mismo Illia, antifrondicista, antiperonista, próximo a los colorados, encarnaba a la perfección a los militares golpistas de 1962.

El hecho de haber iniciado y clausurado por decisión propia cada uno de los procesos, así como su capacidad para imponer condicionamientos y sucesiones tanto en los periodos de gobiernos militares como en los civiles muestra que las Fuerzas Armadas prácticamente ostentaron el monopolio de la iniciativa del bloque en el poder a partir de 1955. A su vez, el bloque popular, también desde esa fecha se vio obligado a una política de interpelación contestataria y hostigamiento que sólo en algunos casos tomó la iniciativa sobre todo por medio de su aparato sindical. Aunque su accionar obligó a rectificaciones y sobre todo impidió el afianzamiento de los sucesivos gobiernos, sin embargo no pudo intervenir de manera activa en las políticas del Estado, cuya definición quedó en manos de las Fuerzas Armadas. Este monopolio de la iniciativa política, distintivo de

los grupos hegemónicos, nos remite necesariamente a otro: la inoperancia del sistema partidario.

3. Inoperancia del sistema político: La sucesión golpe de estado-gobierno militar-apertura a un gobierno civil-nuevo golpe de estado se repite como parte de una espiral que no se cierra y que se siguió constatando aun después del período analizado, con el brutal proceso abierto en 1976. La actuación de los partidos políticos y de la sociedad civil en general posibilitaron y favorecieron esta alternancia entre civiles y militares. En verdad, si se revisa cada una de las coyunturas de golpe de estado, se puede comprobar que los partidos se mostraron incapaces para librar el juego democrático que teóricamente debían sustentar y para el que habían sido constituidos. A pesar de ser hijos de la democracia representativa, temían a las mayorías en las que ésta se sustenta. Curiosamente, en 1943 los radicales, impotentes ante el fraude conservador, apoyaron la asonada militar para que reimplantara un sistema electoral que en verdad los sepultaría de forma irremediable. En 1955, asumiéndose como minoritarios, promovieron la destitución del peronismo por la fuerza. En lugar de intentar un consenso, renunciaban a él para respaldar la acción armada que les devolvería un gobierno carente de legitimidad.

En el 43 desplazando a un partido minúsculo y en el 55 a un movimiento mayoritario, sin embargo, en ambas situaciones los militares actuaban ante la falta de respuesta del sistema político como tal.

A partir de 1955 los golpes tuvieron un nombre: proscripción, que en verdad era reflejo de una terrible disyuntiva para los grupos gobernantes: proscripción o peronismo. Los partidos aceptaron como válida esta disyuntiva y optaron por una proscripción que les permitiera acceder al gobierno. La democracia no resultaba confiable tampoco para ellos, puesto que las mayorías quedaban fuera de su control. Las circunstancias que rodearon a cada golpe se caracterizaron por la im

posibilidad de los partidos para ofrecer una salida consistente con las necesidades de las clases dominantes y que contara, al mismo tiempo, con un consenso electoral.

El drama de las clases dominantes argentinas consistía en su incapacidad para crear tal consenso. Estaban, pues, ante una crisis de hegemonía. Por eso, desde 1930 las mayorías habían sido sistemáticamente desplazadas por el fraude, la proscripción o el golpe, todos mecanismos de ruptura del orden democrático, que sólo resulta eficiente si permite el acceso de las clases dominantes al aparato del Estado. Si se lo cierra o lo dificulta, deviene inoperante.

4. Interiorización del papel del Estado: De simples representantes de la burguesía agroexportadora en 1930 a instauradores de un proyecto nacional en 1943, reinstaladores de un liberalismo elitista en 1955-1962 y promotores de un modelo corporativo tecnocrático en 1966, los militares asumían sobre sí la responsabilidad de sostener un Estado que debía clausurar las expectativas abiertas por el peronismo. El experimento populista, relativamente aceptable en la coyuntura de la Segunda Guerra, se volvía inoperante para una acumulación monopólica y, sobre todo, resultaba socialmente peligroso.

La unificación del aparato militar, o más bien la existencia de mecanismos propios de ciertas corporaciones, como la disciplina y el orden jerárquico, le permitió alcanzar un grado de unidad de acción que no tenían los agrupamientos políticos, en franco proceso de crisis. La búsqueda de unidad interna, el mantenimiento de las jerarquías y la prioridad de estos elementos sobre la actividad deliberativa que defendieron los "azules" constituían la única garantía para que las Fuerzas Armadas conservaran y ampliaran su autonomía relativa de los diferentes sectores sociales.

La diversidad de los proyectos que impulsaron muestra que no se puede concebir al aparato militar como brazo armado de tal o cual sector sino más bien como u

na cámara de resonancia de las distintas fracciones del bloque en el poder que, sumidas en una profunda crisis, no atinaban a conformar un proyecto nacional coherente ni encontraban las mediaciones para su expresión política.

Ligados con los grupos nacionalistas industriales en 1943, con la gran burguesía agroexportadora en 1955 y con los desarrollistas y el capital monopólico en 1966, los militares fueron capaces de sumar tras de sí a sectores sociales que no eran los beneficiarios directos de estos proyectos, aunque se veían representados en ellos en uno u otro sentido. Tal fue el caso de amplios sectores de las clases medias en 1955 o del sindicalismo vanguardista en 1966. A su vez, la profunda relación con la gran burguesía agraria por intermedio de la caballería, la vinculación con el desarrollismo, la proximidad a corrientes del sindicalismo peronista, la existencia de una base económica propia que los vincula, a través de Fabricaciones Militares, con el resto de la industria nacional, les ofreció un espectro lo suficientemente amplio como para no depender de ninguno de estos sectores y, al mismo tiempo, como para influir sobre cada uno de ellos, permeándolos con sus propias concepciones. Pero además, estas vinculaciones muestran la capacidad del aparato militar para reflejar en sus propias filas a corrientes atomizadas que aceptan, por vía de la disciplina y la jerarquía, una unidad y una subordinación al sector dominante, según el proyecto de turno, cumpliendo la función del aparato estatal. Este rasgo es de primera importancia dentro de una sociedad en que las clases dominantes no han logrado forjar una alianza estable. La atomización política y económica se compensa entonces, hasta cierto punto, por la unidad del aparato armado.

La suma del poder militar en tanto aparato central del Estado y el que le otorgaba esta múltiple representación, adjudicada tácitamente, está profundamente asociada con la alta independencia que alcanzó la estructura militar con respecto a cada una de las fracciones del bloque dominante. El proceso de autonomía relativa creciente llevó a las Fuerzas Armadas a asumir con bastante niti-

dez el papel del Estado, de su preservación y de su reproducción. En el marco de una sociedad cuyas fuerzas políticas no podían diseñar una propuesta que unificara al bloque en el poder y le otorgara hegemonía social, los militares asumieron sobre sí dicha hegemonía.

5. Posesión de un discurso hegemónico: Hablar de hegemonía implica también hablar de un discurso hegemónico. En el caso de los militares argentinos este discurso no ha sido el que se usó para justificar cada una de las irrupciones castrenses en particular, sino otro mucho más general y generalizado: aquél que convalida la intervención militar, que la sustenta apoyándose en la impotencia de la sociedad civil. La suposición de que el ejército estaba "obligado" a interrumpir los distintos gobiernos se vio respaldada por el discurso y la lógica de los propios partidos políticos, que justificaron su accionar en la medida en la que ellos mismos descreían del orden democrático. Por eso no hubo una sola fuerza política que no hubiera participado o propiciado alguna intentona castrense. Radicales del pueblo, intransigentes, conservadores, peronistas, socialistas y comunistas se asociaron con los militares y sus asonadas, en diferentes coyunturas.

La connivencia de los partidos con la mecánica golpista se debe explicar en su propia crisis y desintegración, fruto de la escisión existente entre el aparato político y los factores reales de poder. Esta escisión, como ya dijimos, provenía de la ausencia de un partido que representara los intereses de la gran burguesía agraria y las clases dominantes sumada, a partir de 1955, a la proscripción del peronismo, que asumía la representación popular.

No sería correcto afirmar que toda la sociedad civil convalidó la interferencia militar. Por cierto, los sectores populares siempre se vieron perjudicados con la misma. Sin embargo, el aparato político, las clases dominantes, amplios sectores de la numerosa clase media y parte de la jerarquía sindical propiciaron

el accionar golpista y le dieron una base de legitimidad y consenso propagando y reproduciendo en el conjunto social una lógica eminentemente autoritaria.

La aceleración del intervencionismo militar, el monopolio de la iniciativa política del bloque dominante en manos militares a la vez que se constataba la inoperancia del sistema político para mantener y reproducir el sistema, la interiorización del papel del Estado por parte de las Fuerzas Armadas y la posesión de un discurso hegemónico que justificara su accionar son elementos que apuntalan la hipótesis de una alta autonomía del aparato militar, que alcanzó su máxima expresión con la Revolución Argentina. En ese momento todos estos rasgos, desarrollados a lo largo del periodo analizado, encontraron su máxima expresión aunque aún habrían de profundizarse con posterioridad.

La persistencia de esta dinámica enfrentó al país a un doble problema: la militarización de la sociedad y la politización de sus Fuerzas Armadas. Estas "aprendieron" el poder en su cercanía con él. Aunque el juego político podía afectar su estructura y el desgaste que suponía el ejercicio del gobierno tal vez haya sido una de las razones de sus múltiples "aperturas democráticas", sin embargo constataron que su poder tenía bases lo suficientemente sólidas como para sobrevivir a los descréditos coyunturales. A su vez, tanto la práctica partidaria como la sindical, exponentes de la actividad política de la sociedad civil, mostraron fuertes componentes de autoritarismo a través de su recurrencia a la coacción militar en un caso, y al matonaje interno en el otro.

La profunda penetración de los valores castrenses alcanzó su más alta expresión en vísperas del golpe de 1966 cuando la Revolución Argentina, con un apoyo hasta entonces inédito y cuando menos la indiferencia de la sociedad civil, decretó el fin de las instituciones democráticas vigentes desde la constitución de la República. El autoritarismo estaba ya instalado en la lógica política nacio

nal. Las propuestas foquistas y armadas que florecerían a fines de la década del 60 habrían surgido de esta estructura autoritaria, en la que el cuestionamiento del orden democrático no partió de una juventud extrañamente radicalizada sino que había sido hecho, mucho antes, desde el propio aparato estatal. La prolongada hegemonía militar, en una sociedad cuyas clases dominantes no alcanzaron una alianza estable ni encontraron otros canales para acceder al aparato estatal que los abiertos por el poder castrense, hizo jugar a las Fuerzas Armadas como una suerte de partido, es decir como el lugar de representación de las distintas fracciones del bloque en el poder. Cada una profundizó lazos con uno u otro sector militar y dependió de los mecanismos internos de la corporación militar para ver cristalizados sus proyectos. Por ello, los ascensos militares, los pases a retiro, cuya dinámica implica variables relativamente independientes del juego político o de los intereses económicos, concentraron todo el interés, no sólo de las clases dominantes.

El control del aparato estatal con legitimación de la sociedad civil, la capacidad de enfrentar distintos grupos sociales y enfrentar a otros impidiendo el avance del bloque popular y la defensa de intereses propios que, aunque identificados con clases sociales concretas, permiten mantener unidad, independencia y objetivos particulares a las instituciones armadas, les dio el carácter de una fuerza eminentemente política, de un verdadero partido militar, que se asume y es aceptado como tal por la sociedad civil en su conjunto.

El período que aquí hemos analizado es el que corresponde a la formación de la hegemonía militar en Argentina, proceso que no se cerró con el golpe de 1966. Diez años más tarde el país vivió el más profundo y brutal "experimento" militar al que haya sido sometido hasta el presente. No podemos saber si la espiral se ha cerrado por fin. Pero lo cierto es que si la intervención castrense se funda ante todo en la crisis hegemónica de las clases dominantes y en la esci-

sión entre éstas y el aparato de representación política, las razones para su subsistencia como partido militar no han desaparecido. Es indudable, empero, que la desarticulación del campo popular y la crisis del peronismo modifican considerablemente el panorama. Sin embargo, el poder militar permanece latente.

Bibliografía

- Aramburu, Pedro Eugenio; La revolución libertadora, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1956.
- Bobbio, Norberto; ¿Qué alternativas a la democracia representativa?, Sistema 16, 1977.
- Cantón, Darío; Elecciones y partidos políticos en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973
- Cantón, Darío; La política de los militares argentinos. (1900-1971), Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
- Cantón, Darío; Las intervenciones militares en Argentina, (1900-1966), Instituto Torcuato Di Tella, Documento de trabajo.
- Carranza, Mario Esteban; Fuerzas Armadas y estado de excepción en América Latina, México, Siglo XXI, 1978.
- Cavarozzi, Marcelo; Consolidación del sindicalismo peronista y emergencia de la fórmula política argentina durante el gobierno frondicista, Buenos Aires, CEDES, 1979.
- Cavarozzi, Marcelo; Sindicatos y política en Argentina 1955-1958, Buenos Aires, CEDES, 1979.
- Cúneo, Dardo; El desencuentro argentino, Buenos Aires, Pleamar, 1965.
- De Riz, Liliana; Cavarozzi, Marcelo y Feldman Jorge; El contexto y los dilemas de la concertación en la Argentina actual, Buenos Aires, CEDES, 1984.
- Díaz, Alejandro, C. F.; Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires, Amorrortu, 1970.
- Fernández, Arturo; Sindicalismo y concertación social, Avance, 1984.
- Ferrer, Aldo; Economía internacional contemporánea, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.

- Fronidzi, Arturo; Panorama económico y soluciones, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1958.
- Fronidzi, Arturo; Ni odio ni miedo, Buenos Aires, S.E.P., 1956.
- García Lupo, Rogelio; La rebelión de los generales, Buenos Aires, Jancana Ediciones, 1963.
- Garretón, A.; En torno a la discusión sobre el Estado autoritario en América Latina, Chile, FLACSO, 1979.
- Gilly, Adolfo; La anomalía argentina, Avance, 1985.
- Gramsci, Antonio; Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, México, Juan Pablos Editor, 1975.
- Halperín Donghi, Tulio; Argentina, la democracia de masas, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1975.
- Hernández Arregui, J.J.; La formación de la conciencia nacional, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.
- Hodges, Donald; Argentina 1943-1976, The National Revolution and Resistance, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1976.
- Laclau, Ernesto; Política e ideología en la teoría marxista, México, Siglo XXI, 1980.
- Lafianra, Félix, ed.; Los panfletos, su aporte a la Revolución Libertadora, Buenos Aires, Editorial Itinerarium, 1955.
- Lechner, Norbert; Estado y política en América Latina, México, Siglo XXI, 1981.
- Lefort, Claude; ¿Qué es la burocracia?, Madrid, Ruedo Ibérico, 1970.
- López Alonso, Gerardo; Cincuenta años de historia argentina, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1983.
- Luna, Félix; Argentina, de Perón a Lanusse, Buenos Aires, Editorial Planeta, 1972.
- Montemayor, Mariano; Presencia política de las Fuerzas Armadas, Buenos Aires, Sigla, 1958.

- Murmis, Miguel; Portantiero, Juan Carlos; Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.
- O'Donnell, Guillermo; Estado y alianzas en la Argentina, (1956-1976), Buenos Aires, Centro de Estudios de Estado y sociedad, 1976.
- O'Donnell, Guillermo; Tensiones en el Estado burocrático autoritario y la cuestión de la democracia, Buenos Aires, CEDES, 1978.
- Onganía, Juan Carlos; Mensaje, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1966.
- Orsolini, Mario Horacio; Ejército argentino y crecimiento nacional, Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1965.
- Orsolini, Mario Horacio; La crisis del Ejército, Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1964.
- Peña, Milcíades; El peronismo, Buenos Aires, Ediciones Fichas, 1972.
- Peralta Ramos, Mónica; Acumulación del capital y crisis política en Argentina, México, Siglo XXI, 1978.
- Pérez, Germán; Corporativismo, democracia y poder en México, México, Revista de Estudios Políticos, vol. 4, núm. 1, 1985.
- Perón, Juan Domingo; Habla Perón, Buenos Aires, 1949.
- Poulantzas, Nicos; Fascismo y dictadura, México, Siglo XXI, 1980.
- Poulantzas, Nicos; Estado, poder y socialismo, Madrid, Siglo XXI, 1980.
- Poulantzas, Nicos; Las transformaciones actuales del Estado, la crisis política y la crisis del Estado.
- Real, Juan José; 30 años de historia argentina, Buenos Aires, Ediciones Actualidad, 1962.
- Rivera Echenique, Silvia; Militarismo en la Argentina, México, UNAM, 1976.
- Rouquié, Alain; Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Emecé Editores, 1982.

Rouquié, Alain, et al.; Argentina, hoy, México, Siglo XXI, 1982.

Rouquié, Alain; Le mouvement de Frondizi et le radicalisme argentine, París,

Centre d'Etudes des Relations Internationales, Recherches, núm. 11, 1967.

Rouquié, Alain; El Estado militar en América Latina, México, Siglo XXI, 1984.

Scenna, Miguel Angel; Los militares, Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1980.

Sonntag, Rudolf Heinz; El Estado en el capitalismo contemporáneo, México, Siglo XXI, 1982.

Varela Cid, Eduardo; El juicio de residencia a Martínez de Hoz, Buenos Aires, El Cid Editor, 1981.

Villarreal, Juan; El capitalismo dependiente; estudio sobre la estructura de clases en Argentina, México, Siglo XXI, 1978.